

VILLALIBRE

Cuadernos de estudios sociales urbanos

N° 1 • AÑO 2007



- Globalización y migración indígena
- Escuela de formación política
- Exclusión política y pobreza urbana
- La urbanización creciente
- Las áreas metropolitanas en Bolivia



VillaLibre

Cuadernos de estudios sociales urbanos

Número 1

Año 2007

Centro de Documentación e Información Bolivia

**“Promoción y reconocimiento de los derechos de
migrantes indígenas que habitan área urbana”**

Director Ejecutivo CEDIB

Marco Gandarillas Gonzáles

Editor

Nelson Antequera Durán

Consejo editorial

Gustavo Rodríguez Cáceres

Escarley Torrico

Álvaro Bello (Chile)

Centro de Documentación e Información Bolivia CEDIB

Calle Calama 255, entre Nataniel Aguirre y Esteban Arze

Teléfono: 4 25 78 39 Fax: 4 25 24 01

www.cedib.org

Cochabamba - Bolivia 2007©

ISSN 1996-6601 Versión impresa

ISSN 1996-661X Versión electrónica*

* Disponible en www.cedib.org

Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Comunidad Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva del CEDIB y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.

Índice

Presentación.....	4
Artículos:	
La urbanización creciente.....	6
<i>Nelson Antequera Durán</i>	
Bolivia: las áreas metropolitanas en perspectiva de desarrollo regional	23
<i>José Blanes</i>	
Exclusión política, des ciudadanización y profundización de la pobreza urbana en Bolivia	45
<i>Carla Andrea Espósito Guevara</i>	
Metropolitanismo, globalización y migración indígena en las ciudades de México	68
<i>Maya Lorena Pérez Ruiz</i>	
Experiencias:	
Escuela de formación política del CEDIB. Una experiencia de formación política con organizaciones populares urbanas.....	95
<i>Miguel Miranda</i>	

Presentación de VillaLibre Cuadernos de Estudios Sociales Urbanos

Las ciudades de Bolivia han experimentado un proceso acelerado de crecimiento en las últimas décadas. La población se ha urbanizado a tal punto que en la actualidad más de la mitad de los bolivianos viven en áreas urbanas. El crecimiento urbano nacional va aparejado con la tendencia mundial de urbanización.

Para el año 2030, se espera que dos tercios de la población mundial viva en las ciudades. Las ciudades, más allá de la aglomeración demográfica, adquieren en el contexto económico y cultural actual un protagonismo sin precedentes. En un contexto de globalización y de debilitamiento de los Estados nación, se han constituido en los puntos de enlace entre lo local y lo global, en centros que polarizan y organizan vastos territorios en términos ya no sólo económicos sino también culturales y sociales, articulándolos al contexto global. Se torna prioritario comprender la realidad de las ciudades y la dinámica social que en las mismas se desarrolla, debido a que están creciendo en tamaño, densidad poblacional, complejidad y principalmente en importancia política. El peso político de las ciudades en el contexto actual tiene que ver no sólo con el crecimiento demográfico sino con su papel de centros de tránsito de capitales financieros, de mercancías, de información y de personas.

VillaLibre, Cuadernos de Estudios Sociales Urbanos pretende ser un aporte a la reflexión sobre la problemática urbana en nuestro país, dada la importancia creciente de las áreas urbanas en el mismo. VillaLibre es un espacio para el intercambio de estudios y reflexiones sobre el tema urbano desde las diversas disciplinas de las ciencias sociales así como para el intercambio de experiencias de y con las organizaciones urbano populares, tanto de nuestro medio como de otros países.

En este primer número recogemos cuatro artículos que nos introducen en la problemática urbana. El artículo “La urbanización creciente” presenta un panorama general del fenómeno urbano en el Mundo, en Latinoamérica y en Bolivia en particular. El artículo “Bolivia: las áreas metropolitanas en perspectiva de desarrollo regional” de José Blanes analiza el proceso de urbanización que está atravesando Bolivia, especialmente en torno a un eje central que reunirá dentro de unas décadas a casi tres tercios de su población total y la consecuente demanda de servicios y mercado de trabajo. El tercer artículo “Exclusión política, des ciudadanización y profundización de la pobreza urbana en Bolivia” aborda el análisis de los impactos producidos por los procesos de flexibilización laboral sobre las formas y la calidad de participación política y el ejercicio ciudadano. El artículo de Maya Lorena Pérez Ruiz reflexiona sobre el tema de los indígenas en las ciudades, en el contexto mexicano. Finalmente, presentamos la experiencia de la “Escuela de formación política del CEDIB” que se lleva a cabo con organizaciones populares urbanas. Este artículo presenta la propuesta y los logros de la Escuela, una experiencia que pretende no sólo la formación de miembros activos de organizaciones urbano populares sino que ha desarrollado una sólida metodología en educación popular con organizaciones suburbanas.

Agradecemos la colaboración de los autores de estos artículos que hacen posible iniciar el debate sobre temas urbanos. Esperamos que VillaLibre contribuya a la reflexión y a la búsqueda de mejores condiciones de vida para los habitantes de nuestras urbes.

VillaLibre

La urbanización creciente

Nelson Antequera Durán*

Resumen

La urbanización es un proceso creciente e irreversible tanto a nivel global como en nuestro país. En el presente artículo veremos cómo se están dando los procesos de urbanización en el Planeta, en nuestro Continente y en Bolivia. Analizaremos también cómo las políticas económicas y sociales han influido en los procesos de urbanización en nuestro país, especialmente las políticas de ajuste estructural y la Ley de Participación Popular. Otro de los factores que incide en la urbanización de la población son los movimientos migratorios. Analizaremos algunas aproximaciones teóricas al tema de migración, para entender cómo es que ha configurado las actuales ciudades de Bolivia.

Para el habitante del primer mundo – ese mundo cada vez más cosmopolita y extraterritorial de los empresarios, los administradores de cultura y los intelectuales globales –, se dismantelan las fronteras nacionales tal como sucedió para las mercancías, el capital y las finanzas mundiales. Para el habitante del segundo, los muros de controles migratorios, leyes de residencia, políticas de “calles limpias” y “aniquilación del delito” se vuelven cada vez más altos; los fosos que los separan de los lugares deseados y la redención soñada se vuelven más anchos, y los puentes, al primer intento de cruzarlos, resultan ser levadizos. Los primeros viajan a voluntad, se divierten mucho (sobre todo si viajan en primera clase o en aviones privados), se les seduce o

* Magíster en Antropología - UNAM, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). email: nelsonantequera@yahoo.com

soborna para que viajen, se les recibe con sonrisas y brazos abiertos. Los segundos lo hacen subrepticia y a veces ilegalmente; en ocasiones pagan más por la superpoblada tercera clase de un bote pestilente y derrengado que otros por los lujos dorados de la business class; se les recibe con el entrecejo fruncido, y si tienen mala suerte los detienen y deportan apenas llegan (Zygmunt Bauman en La globalización. Consecuencias humanas).

El crecimiento de las ciudades en el planeta

Durante el siglo XX la población del mundo se ha urbanizado de manera acelerada. La cantidad de personas que habitan las ciudades pasó de mil millones de habitantes urbanos en 1961 a tres mil millones en 2003 y se estima que para el 2030 la cifra será de 5 mil millones. Esto significa que el 60 % de la población mundial habitará en las ciudades. La proporción total de la población urbana creció del 13 % en 1900 al 29 % en 1950 y al 49 % en 2005. En el año 2005 se contaban 3,2 mil millones de residentes urbanos en el mundo y representaban 49 % de la población total global (Naciones Unidas 2006:1-3). Según Prats i Catalá, la urbanización es una tendencia constante “que ha acompañado la industrialización y que no parece que vaya a detenerse con el paso a las sociedades postindustriales de la información y del conocimiento, sin perjuicio de las importantes implicaciones de esta transición en la concepción misma del territorio” (2000:1).

El desarrollo implica urbanización, aunque no siempre se da el fenómeno a la inversa. Las zonas urbanas generan el 55 % del producto nacional bruto de los países de menos ingresos, el 73 % en los países de ingreso mediano y el 85 % en los países de ingreso alto. Los sectores manufactureros y de servicios se concentran en los centros urbanos, donde pueden beneficiarse de los mercados de insumos, productos y mano de obra, y donde las ideas y el conocimiento fluyen con mayor rapidez (Prats i Catalá 2000: 4).

Este fenómeno de la urbanización será más agudo en las zonas menos desarrolladas del planeta, pues el incremento será de 2,3 mil millones a 3,9 mil millones de personas en los próximos 25 años. Hacia 2030 se espera que el 56 % de la población de los países en desarrollo viva en áreas urbanas. En números absolutos, en 2030 la población urbana será cuatro veces mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados (3,9 mil millones de personas en los primeros y mil millones en los segundos).

Tabla 1. **Población urbana y rural en el mundo, 1950 a 2030.**

Mundial	Población (miles de millones)					Promedio anual de la tasa de crecimiento (porcentaje)	
	1950	1975	2000	2005	2030	1950 - 2005	2005 - 2030
Total mundial	2,52	4,07	6,09	6,46	8,2	1,71	0,95
Urbano	0,73	1,52	2,84	3,15	4,91	2,65	1,78
Rural	1,79	2,56	3,24	3,31	3,29	1,12	-0,03
Porcentaje urbano						Tasa de urbanización (Porcentaje)	
	29	37,2	46,7	48,7	59,9	0,94	0,83

Fuente: Naciones Unidas 2006: 9.

Las regiones menos desarrolladas son también las que albergan el mayor número de mega ciudades (donde residen más de diez millones de personas). En 2005, de las 20 mega ciudades del mundo, 15 se encontraban en los países menos desarrollados. En 2015, Tokio será la aglomeración urbana más grande, con 35 millones de habitantes, seguida de Bombay y Ciudad de México con 22 millones cada una y Sao Paulo con 21 millones de habitantes. (Naciones Unidas 2006:1-4).

Los gobiernos de los países en desarrollo han expresado su preocupación acerca de su incapacidad de proveer los servicios básicos necesarios a las poblaciones urbanas que crecen rápidamente: agua potable, alcantarillado, vivienda digna y transporte público. Para contrarrestar esta situación se han tomado medidas que tienden a reducir la migración hacia los conglomerados urbanos, incentivando el crecimiento de ciudades intermedias o imponiendo controles migratorios internos.

Como la urbanización se dará principalmente en países en desarrollo, este fenómeno significa importantes retos para los respectivos gobiernos, puesto que si no está acompañada de procesos de industrialización y desarrollo, el crecimiento poblacional implicará el incremento de la pobreza urbana, y el crecimiento de los barrios pobres (arrabales, favelas, chabolas, etcétera).

Sin embargo, según el informe de las Naciones Unidas, no se debe ver el proceso de urbanización como algo meramente negativo. La concentración poblacional puede ser beneficiosa en términos de que permite a la población acceso a servicios y a la dinámica económica propia de los centros urbanos. El desafío del siglo XXI es ofrecer una respuesta creativa a las oportunidades que ofrece esta situación, velando por el crecimiento de la dinámica económica de las ciudades (Naciones Unidas 2006: 5).

Tabla 2. Población urbana y rural por grupos de desarrollo

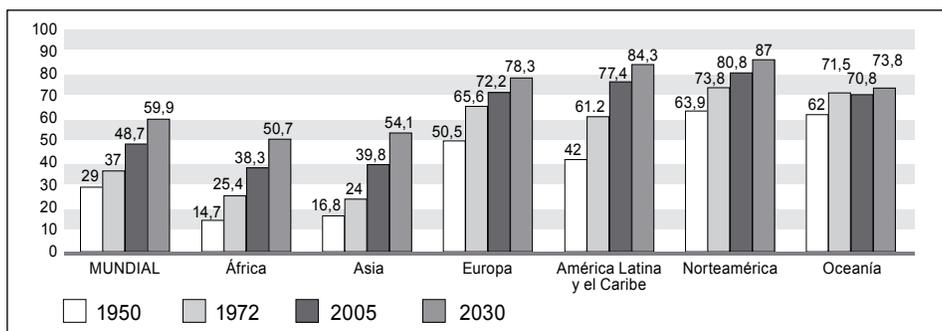
Grupo Según desarrollo	Población (miles de millones)					Promedio anual de la tasa de crecimiento (porcentaje)	
	1950	1975	2000	2005	2030	1950 - 2005	2005 - 2030
Población Total							
Regiones más desarrolladas	0,81	1,05	1,19	1,21	1,25	0,73	0,13
Regiones menos desarrolladas	1,71	3,03	4,89	5,25	6,95	2,04	1,12
Población Urbana							
Regiones más desarrolladas	0,42	0,7	0,87	0,9	1,01	1,37	0,47
Regiones menos desarrolladas	0,31	0,82	1,97	2,25	3,9	3,61	2,2
Población Rural							
Regiones más desarrolladas	0,39	0,35	0,32	0,31	0,24	-0,4	-0,07
Regiones menos desarrolladas	1,4	2,21	2,92	3	3,05	1,39	0,06
Porcentaje Urbano						Tasa de Urbanización	
	52,1	66,9	73,2	74,1	80,8	0,64	0,35
	18,1	26,9	40,3	42,9	56,1	1,57	1,08

Fuente: Naciones Unidas 2006: 16.

El crecimiento urbano en nuestro Continente

Actualmente Latinoamérica y el Caribe son de las regiones con mayores índices de urbanización. El 77 % de su población vive en las ciudades y se estima que para el 2030 el 84 % de su población será urbana (Naciones Unidas 2006:3). El crecimiento urbano en Latinoamérica entre 1950 y 1970 fue el más grande en la historia, por el efecto combinado de la migración como del crecimiento vegetativo. El crecimiento de la población se incrementó notablemente gracias al mejoramiento de los servicios de salud y a la prevención de enfermedades que causaban la muerte infantil (Ledo 2002:39).

Tabla 3. Porcentaje de población que reside en áreas urbanas



Fuente: Naciones Unidas 2006: 12.

Sin embargo la dislocación entre la urbanización, la industrialización y la es- casa modernización agraria impide que los excedentes laborales agrarios sean absor- bidos por el trabajo industrial, con la consecuente emergencia de la marginalidad urbana, el desempleo, la informalidad y la fuerte segmentación social (Prats i Catalá 2000: 7).

El emergente más visible de la pobreza urbana en la región es la condición de alojamiento de los pobladores. En los años 50 surgen en América Latina una serie de asentamientos irregulares en las ciudades, denominadas “villas miseria”, “chabolas”, “cantegriles”, etcétera. En los años 60 se ponen en marcha las políticas habitaciona- les, centradas en la construcción de viviendas para las personas de los barrios subur- banos. La primera generación de políticas se centró en programas de financiamiento de la oferta que consistían en desalojar a la población y reemplazar las construc- ciones populares por viviendas “modernas” agrupadas en conjuntos habitacionales.

A fines de la década de 1970 estas políticas muestran ser ineficientes para solucionar el problema de la vivienda y se opta por políticas alternativas basadas en la radicación de los asentamientos. Son políticas llamadas de segunda generación que consistían en programas masivos de entrega de “lotes con servicios” (Fernández 2002:4). En la década de 1980 se superponen acciones de ambas generaciones de políticas.

A principios de 1990 sobreviene la crisis del desarrollo del Estado-nación y las políticas de vivienda mencionadas entran en una fase de crisis y transición en el con- texto de las medidas de ajuste estructural. El advenimiento de la llamada globalización implicó la transformación radical de la relación tiempo – espacio, provocando que los territorios tengan importancia estratégica en el desarrollo. El espacio económico y cultural más calificado en la nueva economía son las ciudades. Este proceso coincidió con el momento en que los estados latinoamericanos atravesaban una de las fases más críticas de su historia y dio lugar a la urbanización creciente de la población. Se vivió un proceso de “urbanización de la pobreza” que tuvo como protagonistas a los propios pobladores, transformados en constructores de las ciudades. En este contexto, las polí- ticas sociales y habitacionales se enmarcan en las políticas de “lucha contra la pobreza” o “erradicación de la pobreza”. Las mismas tienen como fin procurar la gobernabilidad urbana mediante programas de “mejoramiento de los barrios” (Fernández 2002: 2-3).

Pese a que se siguieron aplicando las políticas tanto de primera como de se- gunda generación, en esta época el estado neoliberal abandona paulatinamente el

principio de responsabilidad acerca del problema de la vivienda y de los derechos sociales especialmente en las áreas urbanas. El Estado se desvincula de la responsabilidad de la provisión de servicios habitacionales, los cuales se transfieren al mercado (Fernández 2002:2).

Las ciudades latinoamericanas se han visto incapacitadas de generar empleos para las masas de migrantes hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades. No tienen la capacidad de brindar los servicios básicos a sus habitantes, así como los servicios de salud y educación, lo cual incide negativamente en los indicadores de calidad de vida urbana. Paralelamente, se ha incrementado la brecha entre la población con mayores y menores ingresos. La persistente pobreza urbana, así como el aumento de la brecha económica ha generado un incremento en la marginalidad social, la informalidad y la delincuencia en las ciudades de nuestro Continente (Prats i Catalá 2000: 9-15).

Las ciudades en Bolivia

El proceso de urbanización en Bolivia devino en la concentración de la población en tres grandes centros urbanos o zonas metropolitanas: La Paz (y El Alto), Cochabamba y Santa Cruz. Además, la población urbana se concentró en dieciséis ciudades intermedias y una centena de ciudades pequeñas. En Bolivia existe una nueva estructura urbana que se diferencia entre las ciudades principales y el resto de los asentamientos humanos.

Las reformas estatales tales como la reforma agraria, la reforma urbana, los esfuerzos de industrialización, la marcha hacia el Oriente, la crisis del modelo nacionalista, y la implementación de la Nueva Política Económica durante los ochenta y el programa de ajuste estructural durante los noventa dieron lugar a un mayor crecimiento urbano y a la concentración de la población en tres ciudades principales: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (Ledo 2002:54). Durante los últimos años estas ciudades concentraron la población, la inversión pública, la oferta de bienes y servicios y la cooperación internacional.

Este modelo urbano en Bolivia se constituye en una red de ciudades en las distintas zonas ecológicas, cada una de las cuales reproduce el modelo de primacía urbana sobre lo rural. En la zona altiplánica es indiscutible la primacía de La Paz, que alberga al 71 % de los habitantes urbanos. La Paz, situada en la zona altiplánica es la sede de la burocracia estatal, y concentra la mayor parte de los puestos de trabajo

en administración pública e instituciones. En los valles, Cochabamba alberga casi la mitad de los habitantes urbanos (45 %). Por su ubicación geográfica, tiene la doble función de integrar su contexto regional y de ser un enlace entre las ciudades de La Paz y Santa Cruz. De esta manera se ha convertido en un centro de integración e intermediación del país. Santa Cruz alberga al 60 % de los habitantes urbanos de la zona oriental. La moderna ciudad de Santa Cruz se ha convertido en el polo de desarrollo más importante del oriente boliviano y un punto de conexión con el Brasil.

Las ciudades intermedias, albergaban en el año 2000 un millón y medio de bolivianos. Las principales ciudades intermedias son Trinidad, Oruro, Potosí, Tarija y Sucre, capitales departamentales y otras menores como Patacamaya, Guayaramerín, Riberalta, Yacuiba, Bermejo, Tupiza, Villazón, Montero, Quillacollo, Sacaba y Llallagua, entre otras. Cada una con su dinámica propia, ya sea por ser capital de departamento, parte de la metrópoli o por su situación fronteriza, se han convertido en puntos de concentración poblacional importantes.

En un centenar de pequeñas ciudades viven en total medio millón de personas, mientras que más de tres millones viven en la zona rural, lo cual muestra la dispersión de la población en el territorio (Ledo 2002:59-60).

La urbanización en Bolivia ha estado relacionada con los procesos políticos y económicos que han tenido lugar durante el siglo XX. En este siglo, la población urbana ha crecido veinticuatro veces en importancia numérica, hasta el punto que en la actualidad concentra dos tercios de la población.

El crecimiento urbano no ha sido uniforme en Bolivia. En las tierras altas, con la caída de la actividad minera, la importancia de la población urbana ha decrecido en un 21 % durante la segunda mitad del siglo XX. En la zona oriental de Bolivia ha habido un crecimiento demográfico acelerado, que pasó de albergar del 12 % del total de la población en 1900 al 32 % el año 2000. Es en esta región que reside más del 25 % de la población urbana del país.

En la segunda mitad del siglo XX, se ha registrado un rápido crecimiento anual de alrededor del 4 % con un proceso de concentración urbana de más de tres cuartos de la población boliviana en ocho ciudades de más de 100.000 habitantes.

En este proceso, la migración interna ha tenido un importante impacto pues generó un proceso acelerado de redistribución territorial y especialmente un crecimiento urbano concentrado en pocas ciudades (Ledo 2002:53).

La concentración urbana en Bolivia ha sufrido un desplazamiento desde los enclaves mineros y las ciudades asociadas a esta actividad hacia la zona oriental. La articulación económica nacional durante la primera mitad del siglo XX estuvo asociada a los enclaves de la minería. Esto significó la concentración de la población urbana en las ciudades de la región occidental de Bolivia. Sin embargo, durante esta época más de la mitad de la población era rural. Entre las características de la articulación minera está la predominancia de La Paz, en una red de ciudades mineras como Oruro y Potosí. Incorporada a esta articulación, Cochabamba se constituía en la segunda ciudad en la jerarquía urbana, dada su indirecta relación con el sostenimiento de la actividad minera.

El impacto de las reformas sociales en el periodo del nacionalismo revolucionario a partir de 1952 contribuyó a la modificación de los patrones de urbanización y generó una redistribución territorial en Bolivia. Durante la década de los noventa, la predominancia de lo rural se revirtió, dando lugar a una mayor concentración de la población en los centros urbanos. El país entró en el siglo XXI con una predominancia de población urbana (64 %) sobre la rural.

Mientras el crecimiento de las ciudades del Oriente continuaba, muchas ciudades de occidente desaparecieron o vieron significativamente disminuida su población. La concentración de la población en la zona oriental está asociada también con la construcción de carreteras, lo cual favoreció los procesos de migración hacia el Oriente y contribuyó a la aparición de las ciudades y zonas de colonización. En los valles un factor que contribuyó a la redistribución poblacional fue la paulatina fragmentación de los campos de cultivo por el crecimiento demográfico. La misma dio lugar a la colonización de la zona tropical de Cochabamba (Ledo 2002:57).

El proceso de urbanización en Bolivia, como en el resto de los países menos desarrollados será acelerado en los próximos años. Según las estimaciones, en dos décadas, las tres zonas metropolitanas concentrarán casi dos tercios de la población total del país.

La acelerada emergencia de áreas urbanas no está siendo acompañada por estrategias de acción para abordar los problemas que la urbanización trae consigo. Es necesario tener presente que el fenómeno de urbanización no es un hecho aislado, pues responde a procesos económicos, sociales y políticos que se están dando a escala mundial, como lo vimos arriba.

En este sentido, el tema del crecimiento de las ciudades, aunque es actualmente percibido más como un problema, debe ser encarado en su justa dimensión a fin de

enfrentar los retos que la urbanización plantea y aprovechar las oportunidades que este proceso irreversible puede ofrecer.

Políticas económicas y sociales en el contexto urbano

Los indicadores económicos de desarrollo muestran que las tres ciudades principales tienen los mejores niveles en cuanto a índices de desarrollo humano e ingreso per cápita. La primera ciudad en desarrollo es Santa Cruz, seguida por Cochabamba y La Paz.

Sin embargo, detrás de las cifras globales se encubren las diferencias al interior de las ciudades que afectan a la población de las áreas suburbanas. En estas áreas se encuentra la mayor parte de la gente que vive en extrema pobreza, la cual afecta principalmente a la población indígena. Este hecho muestra que la segregación económica y cultural son elementos del incremento de la miseria y la exclusión. En las ciudades se evidencian con mayor crudeza los contrastes que existen entre quienes tienen mayores ingresos y quienes son más pobres. El quinto más alto en las ciudades principales tiene un ingreso catorce veces mayor que el quinto más pobre. En las áreas rurales el 20 % de los hogares más pobres controla sólo el 1,9 % de los ingresos, mientras que el 20 % más rico controla el 66 % de los ingresos, que representa 35 veces más que el extremo más pobre (Ledo 2002:58).

Las inequidades económicas y los procesos de segregación urbana se han visto acelerados por las políticas económicas y sociales derivadas del ajuste estructural implementadas en Latinoamérica en la década de 1990; supusieron la privatización de empresas estatales y el desmantelamiento de un conjunto de bienes y servicios provistos por el Estado y la reducción de los servicios públicos no atractivos para la privatización (Fernández 2002:7).

Entre las medidas derivadas de estas políticas, una de las más significativas en Bolivia fue la implementación de la Ley de Participación Popular, promulgada en 1994, la cual introduce importantes modificaciones en el sistema democrático boliviano. Con esta Ley el Estado pretende ampliar su cobertura de dotación de servicios y hacer visible su presencia institucional y política en todo el territorio boliviano a través del municipio; un intento de organizar el espacio y la población en la escala local para establecer mecanismos para que todos los sectores puedan ejercer su ciudadanía política. Por otra parte, los municipios amplían sus competencias en los campos de educación, salud, infraestructura, desarrollo rural, catastro, género y niñez, entre otros (Calla 1999).

La implementación de la Ley trajo consigo oportunidades y problemas para las comunidades indígenas y organizaciones vecinales. Por una parte supuso un nuevo escenario legal e institucional que a la vez que les ofrecía posibilidades de participar en el poder local a través del municipio, pero al mismo tiempo implicaba que las organizaciones indígenas y urbanas debían actuar en espacios distintos a los tradicionales, lo cual ha generado nuevas prácticas al interior de los mismos.

Las estadísticas que se presentan en el capítulo siguiente nos muestran que la implementación de la Ley de Participación Popular no ha logrado reducir la pobreza urbana, al contrario, la situación se ha hecho más crítica. Paradójicamente, los ingresos municipales se han ido incrementando cada año. En el caso del Municipio de Cercado, los ingresos se incrementaron de Bs. 18 millones 700 mil con los que se contaba el año 1994¹ a Bs. 367 millones 705 mil según el presupuesto municipal del año 2005², sin contar con los recursos de otros programas gubernamentales y privados.

Entonces cabe preguntarse por qué persiste y se agudiza la pobreza y la carencia de servicios. Parte del problema es la débil capacidad de gestión que se traduce en una planificación estrecha y carente de una visión integral del desarrollo. Los planes de desarrollo normalmente son encomendados a consultores externos que en un tiempo breve y con escasos recursos deben proyectar el desarrollo de la región para un quinquenio. El resultado es que estos planes se centran en la proyección principalmente de obras de infraestructura que si bien pueden ser de beneficio, no cambian sustancialmente la situación de pobreza. A esto se suma que los procesos de planificación anual atienden a las demandas inmediatas de las organizaciones, dejando de lado los planes de desarrollo.

La ley de Participación Popular contempla que la planificación de la gestión de los recursos municipales sea participativa. Este tipo de planificación, si bien hace participar “formalmente” a los vecinos, tiene como resultado final la imposición de la visión de los técnicos en cuanto al desarrollo y las necesidades locales. Estos procesos de planificación sólo han servido como un requisito administrativo y no como un instrumento orientador de las acciones municipales.

Consideramos que el enfoque de las políticas sociales parte de una concepción localista (o atomista como la llama Medina 1994:56-57), es decir restringida a los

1 Fuente: www.enlared.org.bo

2 Fuente: www.cochabamba.gov.bo/presupuesto.php

límites de la división política estatal como el municipio o la provincia y desarrollista (entendido el desarrollo como mayor infraestructura, mayor producción, ingreso en el mercado, etcétera, según Medina 1994: 59-71), por lo que se limita a ejecutar acciones atomizadas, que en la mayoría de los casos consisten en obras de infraestructura, las cuales no logran reducir la pobreza ni dinamizar la economía a largo plazo.

Según la reflexión del equipo del CEDIB, que ha trabajado en las zonas suburbanas de Cochabamba, la Ley de Participación Popular debe entenderse en el contexto de las políticas económicas y sociales que se han implementado en el país a lo largo de su historia. Este análisis plantea que se debe tomar en cuenta en este proceso dos etapas:

La primera, es la lucha por la descentralización que se remonta a los inicios de la República. A principios del siglo XIX, nace en Santa Cruz un movimiento anticentralista encabezado por Andrés Ibáñez quien plantea la idea de un Estado federalista con rasgos bastante socialistas como alternativa al centralismo. A finales del mismo siglo e inicios del siglo XX se vivió la Revolución Federal en la cual una de las banderas del Partido Liberal paceño fue precisamente el federalismo, ante el centralismo de Sucre. En la segunda mitad del Siglo XX, después de la Guerra del Chaco y hasta la Revolución de 1952, aparece una corriente nacionalista que pide la integración de las diferentes regiones del país. Con la integración económica de Santa Cruz, surge la voz anticentralista del Comité Cívico de Santa Cruz. En la década de 1960, la mayor parte del petróleo en el país era de procedencia cruceña, pero los recursos iban a La Paz. Por ese motivo, se inicia una lucha para que el 11 % de las regalías de petróleo (producción boca de pozo) se quede en Santa Cruz. Las regalías desde entonces han sido la base para el crecimiento económico de ese departamento.

A principios de la década de 1990, en el gobierno de Jaime Paz Zamora (MIR), este sentimiento anticentralista cobra fuerza. Se fundan los otros comités cívicos en las diferentes regiones del país, que exigen la descentralización con un componente más político: ya no se demanda sólo descentralización administrativa sino elección directa de las autoridades locales. En el año 1991, el entonces socialista Carlos Hugo Molina, manifestaba que la descentralización exigida conlleva el peligro de crear nuevos centralismos locales y por tanto se debe apuntar más bien a una descentralización municipal y no departamental. En el año 1993, el gobierno de Sánchez de Lozada (MNR), propone una descentralización administrativa, pero no política, pues se teme que eso lleve a una desintegración nacional, y empieza a hablarse de la Participación Popular (CEDIB 2004).

La segunda etapa de este proceso es la implementación del modelo neoliberal. En el año 1985, Víctor Paz Estenssoro inicia el modelo neoliberal en Bolivia con el apoyo de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial. Las graves consecuencias sociales de estas medidas fueron paliadas parcialmente mediante el Fondo Social de Emergencia (FSE). En el gobierno de Jaime Paz Zamora se crean otros fondos: Fondo de Desarrollo Campesino, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fondo Indígena y Fondo de Medio Ambiente. Estas instituciones responden a medidas que por una parte, legitiman el modelo y por otra sirven para prevenir las consecuencias y conflictos sociales que surgen como resultado de la política neoliberal (CEDIB 2004).

En el año 1993, Gonzalo Sánchez de Lozada lleva a cabo la privatización de las empresas públicas (capitalización) y de la seguridad social. Al mismo tiempo, como los fondos siguen siendo insuficientes, diseña una serie de medidas para paliar las consecuencias de la aplicación del modelo y legitimarlo. Una de estas medidas es la Ley de Participación Popular (1994), con la que Sánchez de Lozada intenta dar respuesta a las demandas cada vez mayores de descentralización política (lideradas por el Comité Cívico de Santa Cruz), así como a los crecientes conflictos surgidos a consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal.

En el aspecto económico, el gobierno central se queda con el 75 % de los impuestos al igual que antes de la Ley, pero se descarga de la responsabilidad de la educación y la salud, que recae en los Municipios. Antes de la Ley de Participación Popular, el 5 % era asignado a las Universidades, un 10 % a las Corporaciones de Desarrollo y otro 10 % a las capitales de los Departamentos. Con la Ley, el gobierno central sigue manteniendo su 75 % y el 5 % es asignado a las Universidades. La variante es que el otro 20 % es repartido a los Municipios pero bajo criterio de población, que en los hechos supone igualmente que los centros urbanos se quedan con la mayor parte de los recursos. Asimismo, queda a decisión de cada Municipio si los recursos propios además de los recursos de Coparticipación Tributaria (que llegan desde el gobierno central), serán usados de acuerdo a los estatutos de la Ley de la Participación Popular o si se quedarán a disposición del Municipio. Este es el caso del Municipio de Cochabamba, que sólo utiliza los recursos de la Coparticipación Tributaria para formular los POA y no los otros recursos de los que dispone (CEDIB 2004).

En el contexto urbano, las políticas estatales, enmarcadas en la Ley de Participación Popular, han sido orientadas hacia la productividad urbana, la protección del medio ambiente y la mitigación de la pobreza. Estas políticas deberán estar fundadas

en cuatro pilares: a) la habitabilidad que propone que las ciudades proporcionen una calidad de vida aceptable para todos; b) la competitividad en términos de crecimiento del empleo, los ingresos y la inversión; c) el buen gobierno y administración que implica la inclusión y representación de todos grupos sociales en la sociedad urbana y c) la confiabilidad financiera que postula que las ciudades deben ser financieramente seguras y estables para los inversores privados (Fernández 2002).

Lo más característico de esta generación de políticas impulsadas desde los organismos internacionales son los programas de mejoramiento barrial. El discurso de “reducción de” o “lucha contra” la pobreza no es otra cosa que el cinismo institucionalizado de las agencias multilaterales. Mientras por un lado promueven este tipo de estrategias por otro, promueven el libre mercado, sustentado en la eliminación de los derechos ciudadanos sobre los bienes y servicios más esenciales para la vida. Los programas de mejoramiento barrial, financiados por el BID, son parte importante de las acciones contra la pobreza urbana pues atacan el emergente más visible, el asentamiento ilegal o irregular.

El éxito en la reducción de la pobreza consiste en reducir el conflicto que la existencia de la pobreza urbana acarrea, con el consiguiente impacto positivo en la “gobernabilidad” urbana. La misma da cuenta de la estabilidad social, es decir de la condición favorable para el ingreso y la reproducción de capitales en las ciudades dentro la lógica global. Tanto la Participación Popular, como los programas de “reducción de la pobreza”, tienen serias limitaciones en cuanto a mitigar efectivamente la pobreza, ya que operan sobre sus efectos, en el contexto de la creciente mercantilización de los bienes y servicios habitacionales y urbanos (Fernández 2002: 10-12). Con las experiencias de mejoramiento de los barrios queda la sensación que al intentar actuar sobre las consecuencias los resultados son magros. Con esta perspectiva, no habrá más remedio que aceptar que habitaremos ciudades cada vez más injustas, que la calidad de vida descenderá y el problema habitacional se agravará aún más. A través de la mejora de los barrios con las pequeñas obras realizadas con recursos municipales o con los programas de mejoramiento barrial, se logra una mejora relativa de la ciudad, la reducción del conflicto, y se logra que el mercado de la prestación de servicios habitacionales funcione mejor, con lo cual se asegura que los nichos y flujos del capital global no encuentren obstáculos en su rotación acelerada (Fernández 2002:14).

En conclusión, las políticas económicas han incidido en la reducción de las políticas sociales. Como veremos en los capítulos siguientes, en las ciudades los de-

rechos sociales, tales como la provisión de servicios básicos han quedado en manos privadas, los ciudadanos así se han convertido en “consumidores” de los mismos, y quienes no tienen recursos suficientes no pueden acceder a estos servicios. Las políticas de reducción de la pobreza o de mejoramiento de barrios sólo incide en las consecuencias y no en las causas estructurales de la pobreza, por lo que sus resultados son magros, puesto que a medida que crecen las ciudades la pobreza se hace más aguda y los problemas mayores.

Migración y urbanización

Según un informe de las Naciones Unidas, la migración desde las áreas rurales hacia las urbanas y la creciente urbanización de asentamientos rurales son los factores determinantes del crecimiento urbano en los países menos desarrollados. Tomando en cuenta que la migración urbano rural y la urbanización rural significan el 40 a 50 % del crecimiento urbano, se espera que entre 250 y 310 millones de personas en los países en desarrollo se integrarán al ámbito urbano entre 2005 y 2015, ya sea porque migrarán de las zonas rurales o porque sus asentamientos rurales devendrán urbanos (Naciones Unidas 2006:3).

En nuestro país, en 1976, alrededor de un millón de personas mayores de cinco años de edad había cambiado su residencia al menos una vez en la vida. En 1992 esa cifra era de dos millones de personas, lo que representaba más de un tercio de la población total. Los movimientos territoriales explican dos tercios del crecimiento demográfico en determinadas regiones. En el caso de Bolivia, la migración implica movimientos masivos de población que se intensificaron durante la década de 1980.

El gran número de migrantes que se trasladan a las ciudades ha producido un acelerado crecimiento urbano, con la consecuente demanda de servicios y la presión sobre el uso del suelo. Se puede afirmar que fueron las reformas estructurales las que causaron la redistribución de la población. Según Ledo, la caída de la minería y la consecuente relocalización que produjo el despido de más de veinte mil trabajadores y el cierre de las minas trajo consigo importantes cambios en la redistribución geográfica de la población y de la fuerza de trabajo. Entre 1987 y 1992 más de cien mil personas salieron de las regiones mineras del occidente boliviano. Muchos pueblos y ciudades vieron desaparecer a su población hasta el punto de convertirse en pueblos fantasma. Cuatro de cada diez migrantes se establecieron en las ciudades del corredor (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz), mientras que otros se trasladaron a la región

del Chapare u otras zonas rurales, y menos de un quinto se estableció en ciudades intermedias.

La redistribución territorial no fue uniforme. De los migrantes hacia el altiplano, un 45 % se fue a la ciudad de La Paz y 17 % a ciudades secundarias. Mientras que en Santa Cruz 40 % de los migrantes se estableció en la ciudad de Santa Cruz y un 33 % en las zonas rurales. En el valle se dieron tres corrientes migratorias, un tercio se estableció en el área rural, un cuarto se estableció en la ciudad capital y una proporción similar en las ciudades intermedias (Ledo 2002:65).

En el caso de Cochabamba más de la mitad de los migrantes vienen del altiplano, lo que ha hecho de ésta una ciudad altiplánica. En contraste, la mayoría de los migrantes en Santa Cruz provienen de tierras bajas, sólo el 25 % proviene de tierras altas.

Se puede apreciar también que la migración rural urbano acontece principalmente en El Alto, pero también se da un fenómeno de migración desde el área rural altiplánica hacia el trópico de Cochabamba (Ledo 2002:67).

Es evidente que los cambios en los patrones de movilización territorial de la población boliviana durante el siglo XX han tenido un impacto directo en la urbanización y la ocupación territorial. Según Ledo, estos movimientos se convierten en un indicador indirecto de las acciones de política económica y/o la aparición de posibilidades de empleo, como se muestra en el siguiente resumen. El primer movimiento está relacionado con la primacía urbana de La Paz, que recibió una parte importante de la población migrante antes de 1950. El segundo movimiento está relacionado con los procesos de colonización directa que se iniciaron en 1960, en un eje que va de San Julián en Santa Cruz, el Chapare en Cochabamba, el departamento del Beni y La Paz. El tercer cambio se dio entre 1950 y 1980 con el desarrollo de la agricultura comercial y las industrias grandes y medianas, orientadas a la producción agroindustrial en el oriente boliviano. La industria agropecuaria atrajo flujos migratorios del altiplano y de los valles. El cuarto cambio migratorio se da por la migración internacional, especialmente a la Argentina y Estados Unidos desde la década de los setenta. El último cambio ocurrió en la segunda mitad de los años ochenta, a partir de la aplicación de las medidas de ajuste estructural y la relocalización que provocó la migración hacia las ciudades del Corredor y hacia el Chapare por el atractivo de la producción de la coca.

Durante los años noventa continuó la migración hacia las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En esta época, la población migrante es predominante-

mente de origen urbano. La interpretación de este fenómeno escapa al estereotipo usual de migración rural urbano y tiene que ver con las relaciones entre centros urbanos y las transformaciones de las ciudades en las últimas décadas.

En Santa Cruz y Cochabamba una gran parte de los migrantes provienen de las tierras altas (Potosí, Oruro y La Paz), esto se explica en parte porque estas zonas estaban tradicionalmente relacionadas con la producción minera, y al entrar en crisis produjeron una modificación en el desarrollo urbano de Bolivia.

Factores como la ampliación de la frontera agrícola, el desarrollo de la industria ganadera, la crisis de la economía minera, el estancamiento de la industria urbana, las actividades relacionadas con la producción y comercialización de coca, la apertura de vías de comunicación en el oriente boliviano, los proyectos de integración energética con Brasil hacen prever que los flujos migratorios hacia el oriente y el trópico se incrementarán en los próximos años (Ledo 2002:69).

Conclusión

En el presente artículo hemos visto que la urbanización de la población a nivel global y en nuestro país en particular se ha convertido en un proceso no sólo irreversible, sino creciente. El mismo tiene que ver con las políticas económicas y sociales que se viven en el contexto internacional como en el local. Uno de los factores determinantes del crecimiento urbano es sin duda la migración. Este hecho ha convertido a las ciudades en conglomerados humanos de personas de distintos orígenes económicos, sociales y culturales. En el caso de Bolivia, dada su diversidad cultural, las ciudades son espacios de convivencia de poblaciones de distintas culturas originarias entre sí y de estas con la cultura mestiza urbana.

Bibliografía

Bauman, Zygmunt

2001 *La Globalización Consecuencias Humanas*, Fondo de Cultura Económica, México D.F.

Calla, Ricardo

1999 "Indígenas, Ley de Participación Popular y cambios de gobierno en Bolivia (1994-1998)" en Assies, W.; Van der Haar G; Hoekema, A. (ed.) *El Reto de la Diversidad*, El Colegio de Michoacán, Zamora.

CEDIB

2004 “Impacto de la Ley de Participación Popular en el proceso organizativo de Villa Sebastián Pagador”, informe de investigación Programa de Poder Local. UNITAS/CEDIB, Cochabamba.

Fernández, Raúl

2002 “La agenda global y la gestión local del habitat” en *Desarrollo local en áreas metropolitanas*, en <http://www.urbared.ungs.edu.ar>

Ledo, María del Carmen

2002 *Urbanisation and Poverty in the Cities of the National Economic Corridor in Bolivia. Case Study: Cochabamba*, Delft University Press, Delft.

Medina, Javier

1994 *Del alivio a la pobreza al desarrollo humano*, HISBOL, La Paz.

Naciones Unidas

2006 *World Urbanization Prospects. The 2005 Revision*, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Nueva York.

Prats i Catalá, Joan

2000 “Las ciudades latinoamericanas en el umbral de una nueva época, La dimensión local de la gobernabilidad democrática y el Desarrollo Humano”, en www.iigov.org.



Bolivia: las áreas metropolitanas en perspectiva de desarrollo regional

José Blanes*

Resumen

Cuando se avecina la creación de autonomías departamentales y en el contexto de la Asamblea Constituyente, las áreas metropolitanas se constituyen en los núcleos centrales del desarrollo económico. El artículo analiza el curso rápido en que Bolivia ha pasado de ser un país rural a otro urbano, en torno a un eje central que reunirá dentro de unas décadas a casi dos tercios de la población total –la gran mayoría de población indígena–, así como las demandas por servicios y mercado de trabajo. Con este eje compite otro por el Sur, sede de los principales asientos mineros y gasíferos, y otro de menos potencial por el Norte. El análisis comparativo resalta las diferentes perspectivas de cada una de las tres principales zonas y la naturaleza diferenciada de los procesos urbanos y regionales, así como las direcciones posibles y los ritmos del cambio urbano-rural.

Introducción

El análisis de las zonas metropolitanas en Bolivia cobra hoy día especial importancia porque se inscriben en el vértice de los principales cambios territoriales que se avecinan, a raíz de la inminente descentralización autonomista. La Asamblea Constituyente tendrá como tema central el de los estatutos autonómicos, los que darán un giro de 180 grados a los principales temas territoriales de Bolivia. De prosperar las autonomías regionales, se impulsarán desde las ciudades diferentes proyectos

* Director del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, La Paz. E-mail: jose.blanes@cebem.org
El presente artículo resume las principales ideas del trabajo que sobre el mismo tema ha sido publicado por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (FESILDIS) de La Paz.

de construcción de desarrollo territorial regional en los que las áreas metropolitanas son piezas claves, ya que son el corazón de las regiones. Estas zonas urbanas se definen como “ciudades región”.

Desde la perspectiva de la construcción regional, se puede leer el desarrollo y la actual estructura de las tres principales áreas metropolitanas de Bolivia: a) las autonomías departamentales tendrán que organizar su capital “interno” para actuar frente al contexto externo (el país y el mundo). De este capital interno regional las zonas metropolitanas existentes son una pieza clave; b) el proceso de metropolización es parte de la historia de desarrollo del país por el que se han ido formando las actuales zonas urbanas, sin relación explícita con ningún proceso de desarrollo regional; y c) las zonas metropolitanas son ya un hecho físico, poblacional y político que se necesita repensar, no sólo como una parte muy importante del marco contextual del desarrollo regional, sino como una pieza fundamental del mismo.

El **análisis comparativo** de este artículo busca resaltar las diferentes perspectivas de cada una de las tres principales zonas en Bolivia en relación con el desarrollo regional, en el contexto de los procesos de descentralización y de regionalización autonómica y la naturaleza diferenciada de los procesos urbanos y regionales en Bolivia. Una dimensión comparativa de la **temporalidad** de los cambios y sus dimensiones en cada zona metropolitana permitirá establecer no sólo las diferencias entre zonas, sino los recorridos que cada una viene llevando a cambio, así como las direcciones posibles y los ritmos del cambio.

Las zonas metropolitanas en Bolivia

Existen tres zonas metropolitanas en expansión rápida desde hace un par de décadas, que cada día hacen escuchar sus voces hasta el nivel de lograr el quiebre del sistema político –la ciudad de El Alto, de hecho, que ocupa casi la mitad de la zona metropolitana de La Paz, ha logrado en los dos últimos años cambiar el presidente Constitucional. En esas tres zonas vive una parte muy importante de la población del país y más de dos tercios de la población urbana. Allí se ha ido concentrando lo más duro y conflictivo de la pobreza. Allí residen también la mayor parte de los desafíos del país para competir tanto interna como externamente.

Las tres zonas reflejan formas muy distintas de incorporación cultural y económica de la población indígena en el desarrollo, tema muy importante en Bolivia, donde según el último Censo el 62 % de la población declaró su pertenencia a uno de los grupos étnicos.

Formación reciente y rápida

La urbanización en Bolivia es una historia rica en **procesos territoriales de cambio** desde territorios ancestrales hasta la apertura de nuevos espacios de la globalización actual. El territorio en Bolivia ha sufrido cambios profundos y rápidos en los últimos años. A lo largo de la historia se transitó de la ocupación y ordenamiento del período precolombino de Tiahuanacu –centro religioso y de poder político de la cultura aymara– al período incaico, con su centro en el Cuzco. Los fortines de Samai-pata e Incallajta, en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba respectivamente, pensados como defensa de fronteras internas entre habitantes de las tierras bajas y tierras altas, recuerdan las actuales fronteras sociales y culturales entre cambas y collas.

En la Colonia se estructuró el eje urbano Potosí - Sucre, donde Potosí, centro minero que alcanzó los 150.000 habitantes, llegó a ser la segunda ciudad del mundo de entonces. El proceso republicano, partiendo del eje mencionado, derivó en otra configuración que se consolidó a finales del siglo XIX en torno a La Paz, y donde resalta el eje minero y administrativo Potosí - Oruro - La Paz.

En los últimos cincuenta años las tres grandes ciudades del nuevo eje central se constituyeron en el foco hacia el que se desplazó la población desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. En estos centros se fueron desarrollando la administración, los servicios, la industria y los principales proyectos de desarrollo regional. En estas tres ciudades se confrontan nuevas fronteras sociales, económicas y políticas, que diferencian a tierras bajas y altas desde mediados del siglo XX. Hoy, la mayor parte de las poblaciones indígenas se concentran en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, las que se consolidan a su vez como el eje dominante del proceso de urbanización. Este se diferencia según un modelo de urbanización indígena urbano en La Paz y el moderno de Santa Cruz. Cochabamba se constituye en un modelo intermedio que goza de las características de ambas. Esta diferenciación es fundamental para entender el proceso de urbanización de Bolivia (Indaburu, 1998; Urquidi, 1999; Blanes, 2001).

Sin embargo, habrá que estar atentos a otros centros –tanto en Tarija como en Chuquisaca y Potosí–, que van a presentar desarrollos propios con motivo de la moderna minería y de la explotación del gas¹. El proceso de urbanización es muy reciente y ha sido rápido. A comienzos del siglo XX, según el Censo de 1900, la

1 En el departamento de Tarija se encuentra la mayor parte de las reservas de gas natural, y en Potosí los principales yacimientos de plata, ambos considerados entre los más importantes del mundo. Estos entrarán en su fase de exportación dentro de dos años.

población urbana era de 227.935 sobre 1.603.417 habitantes, el 14,22 %, cuando el promedio mundial era el 13 %, y se concentraba en una parte pequeña del territorio nacional. Es proverbial su débil ocupación del territorio y la baja densidad poblacional promedio: 1,20 habitantes por Km², en los 1.332.581 Km² con que el país contaba en ese entonces. Las tres grandes ciudades de referencia eran La Paz, con 54.874 habitantes; Cochabamba, con 21.886; y Santa Cruz de la Sierra, con 15.874 habitantes. veintinueve centros urbanos, además de los tres mencionados, constituían la base del nuevo sistema de ciudades: Sucre, con 20.907 habitantes; Potosí, con 20.910; Oruro, con 13.575; Tarija, con 6.980; y Trinidad, con 2.556.

Hasta mediados del siglo XX la población se duplicó sin mostrar cambios importantes en su estructura. El Censo de 1950 reportó un total de 3.019.031 habitantes, con una población urbana de 780.722 –el 25,86 %–, porcentaje menor al promedio mundial de ese entonces (29 %). Su densidad poblacional ascendió a 2,75 habitantes por Km². Las tres áreas urbanas de referencia avanzan en sus dimensiones y van definiendo la actual estructura: La Paz, con 321.073 habitantes; Cochabamba, con 80.795; y Santa Cruz, con 42.742.

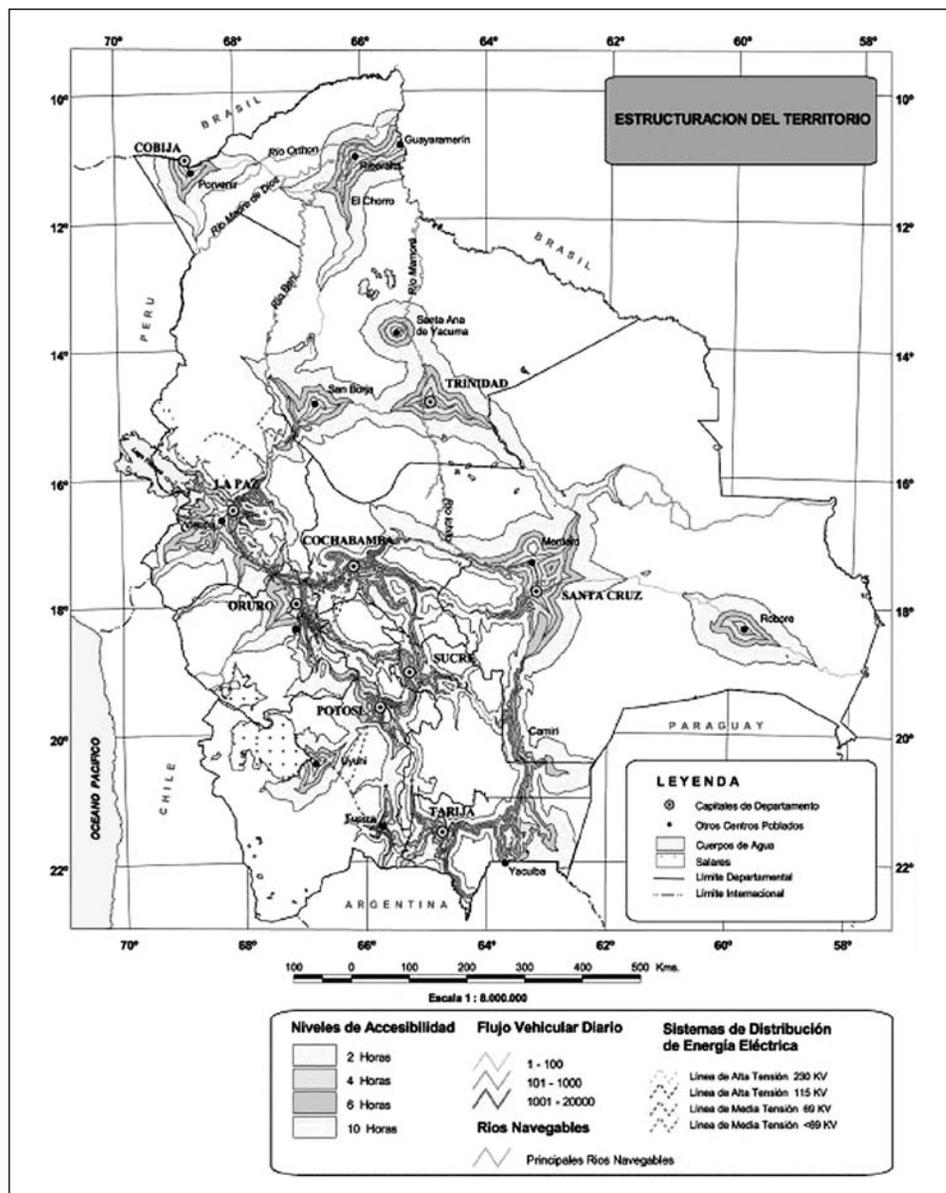
Se registraban ya 49 centros urbanos, entre los que destacaban –diferenciándose por un ritmo menos dinámico de crecimiento, a pesar de su importante tamaño–: Oruro, con 62.971 habitantes; Potosí, con 45.758; Sucre, con 40.128; y Trinidad, con 10.759.

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 1976, sólo 26 años después, muestra importantes cambios en la estructura poblacional: de los 4.613.486 habitantes, 1.921.941 se ubican en áreas urbanas, el 41,66 %, promedio cercano al de América Latina. La densidad poblacional es todavía muy baja, 4,20 habitantes por Km².

Las tres áreas urbanas más importantes son: La Paz, con 635.283 habitantes; Cochabamba, con 204.684; y Santa Cruz de la Sierra, con 254.682. Con ello se definen ya las características de primacía de las nueve capitales departamentales actuales. El proceso de urbanización se generaliza y ya existían cien centros urbanos, entre los que destaca Oruro, con 124.213 habitantes, como satélite de los tres del eje central. Por su parte, en el eje del Sur se encuentran: Potosí, con 77.397 habitantes; Sucre, con 63.625; y Tarija, con 38.916. Finalmente, en el Norte están: Trinidad, con 27.487 habitantes; y Cobija, con 3.650.

Resalta también un conjunto de centros urbanos intermedios –mostrando un sistema articulado con las principales ciudades en el Sur– que emergen gracias a las

Mapa 1. Estructuración del Territorio



actividades mineras: Huanuni, Colquiri, Villazón, Siglo XX, Tupiza y Llallagua. En tierras bajas: Montero, Riberalta, Guayaramerín, Bermejo, Yacuiba y Camiri, entre los más importantes, ilustran claramente la expansión de la frontera económica y la importancia del periodo de explotación de hidrocarburos.

Quillacollo y El Alto, como signos de la reciente articulación en torno al eje central, manifiestan la actual configuración de concentración en torno a las actuales zonas metropolitanas. A estas alturas, departamentos como Potosí, Tarija y Santa Cruz poseían sistemas de ciudades relativamente estructurados (Urquidi, 1998).

Entre finales del siglo XX y comienzos del XXI (según los Censos de 1992 y de 2001), la población urbana pasó de 3.694.846 sobre un total de 6.420.792 habitantes a 5.165.230 sobre el total de 8.274.325. La tasa de urbanización pasa de 57,55 % en 1992 a 62,4 % en 2001 (INE, 2002). El promedio latinoamericano es 56,60 % y el mundial, de 41,00 % por esos años.

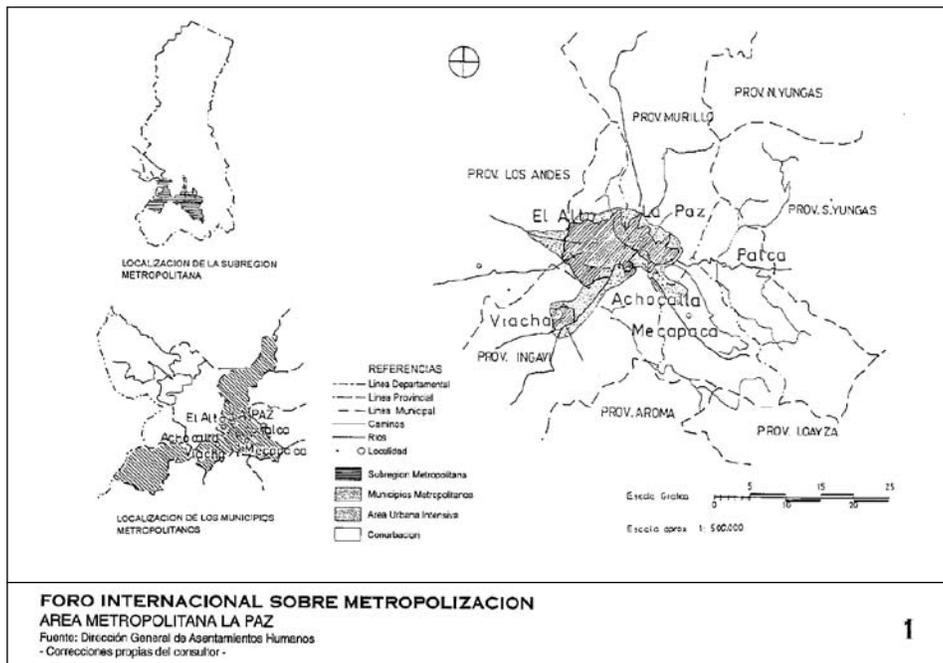
En el Censo de 2001 ya están bien definidas las áreas metropolitanas, cuyos centros urbanos aledaños fueron acercándose al núcleo principal, cercado, sobre todo por efecto de las migraciones. Es importante mencionar que los núcleos iniciales en las tres áreas metropolitanas disminuyen en importancia relativa con relación a la población urbana allegada a ellos. El caso más notorio es el de La Paz, ya que la ciudad de El Alto es en este momento casi tan grande como la primera. El proceso generalizado de urbanización del país ha sido tanto o más rápido, en algunos casos, que el propio crecimiento de estas zonas metropolitanas. En el caso de las tres zonas metropolitanas, los centros urbanos de sus entornos se han ido acercando a los núcleos urbanos principales por recibir migraciones en su primera oleada a las áreas urbanas, con lo que se fueron urbanizando las áreas rurales circundantes. Este fenómeno ha ocurrido de forma muy rápida y muchos centros pasaron a la categoría de urbanos en pocos años.

El mapa que sigue muestra claramente los ejes urbanos donde destaca el eje central frente a los ejes del sur y del norte.

Dimensiones actuales

Las áreas metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, presentan la siguiente composición demográfica con relación a la población de sus departamentos y a la población nacional (en base al Censo de 2001).

Mapa 2. Área Metropolitana de la Paz



Cuadro 1. Composición demográfica de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

Zona Metropolitana de La Paz	Censo 1992	Censo 2001
Ciudad de La Paz	713.378	789.585
El Alto	405.492	647.35
Viacha	19.036	29.162
Achocalla	-	10.369
Total	1.137.906	1.476.466
(28,4 de la población urbana del país)		
Zona Metropolitana de Cochabamba	Censo 1992	Censo 2001
Cochabamba	397.171	516.683
Quillacollo	51.418	74.98
Colcapirhua	19.547	41.637
Sacaba	51.418	92.581
Tiquipaya	3.037	26.732
Total	519.554	752.613
(14,6% de la población urbana del país)		

Zona Metropolitana de Santa Cruz		Censo 1992	Censo 2001
Ciudad de Santa Cruz		697.278	1.113.582
Warnes		10.866	17.872
Cotoca		9.229	15.181
El Torno		6.332	11.878
Montero		57.027	78.294
Total		725.724	1.236.807
(23% de la población urbana del país)			
Las tres Zonas Metropolitanas		Censo 1992	Censo 2001
La Paz		1.137.906	1.476.466
Santa Cruz		25.724	1.236.807
Cochabamba		519.554	752.613
Total		2.383.184	3.465.886
		(64% de la población urbana y 37% de la población total del país)	(67% de la población urbana y 41% de la población total del país)

Cuadro 1. (Continuación)

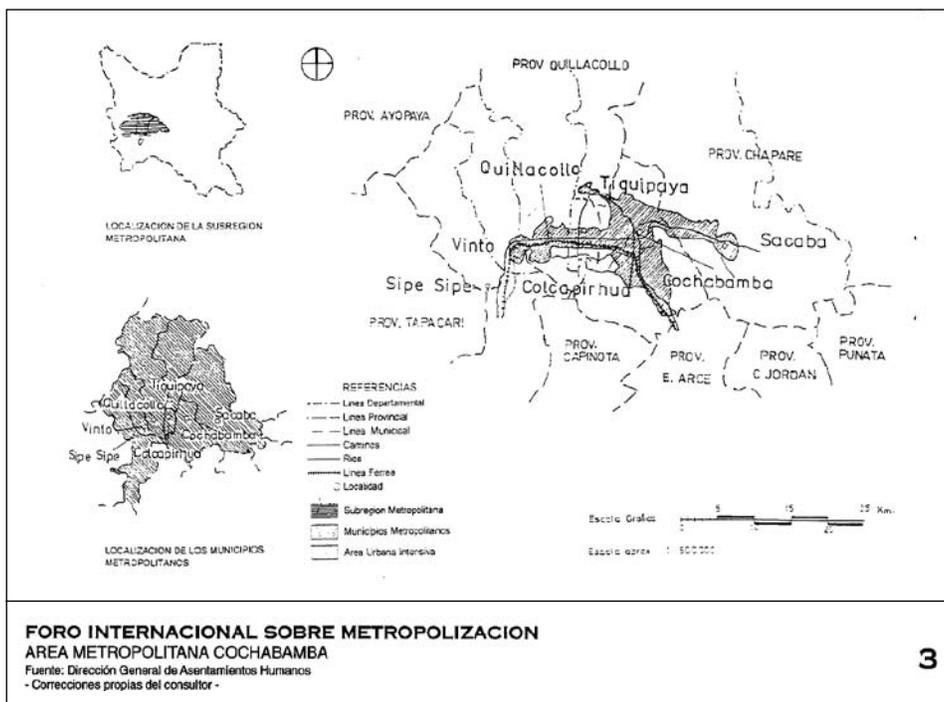
Área metropolitana (AM)	Municipios que la componen	Población		Población total departamental	Porcentaje de la población total departamental en AM urbana		Porcentaje de la población total departamental en AM	
		Urbana	Total		Urbana	Total	Urbana	Total
La Paz	La Paz	789.585	793.293	2.350.466	64,61	66,65	18,35	18,93
	Palca	14.185	-----					
	Mecapaca	-----	11.782					
	Achocalla	10.369	15.110					
	El Alto	647.350	649.958					
	Viacha	29.108	66.142					
	Laja	-----	16.311					
	Total ZM	1.518.693	1.566.781					
Cochabamba	Cochabamba	516.681	517.024	1.455	51,07	52,88	8,98	9,3
	Quillacollo	78.324	104.206					
	Vinto	14.220	31.489					
	Colcapihura	41.637	41.980					
	Sacaba	92.581	117.100					
	Total ZM	743.443	769.819					
Santa Cruz	Santa Cruz de la Sierra	1.11.059	1.135.526	2.029.471	62,7	68,11	15,39	16,70
	Cotoca	17.482	36.425					
	Porongo	-----	11.085					
	La Guardia	25.444	39.552					
	El Torno	18.935	37.961					
	Warnes	17.872	41.570					
	Montero	78.294	80.341					
	Total ZM	1.274.086	1.382.460					

Fuente: elaboración propia.

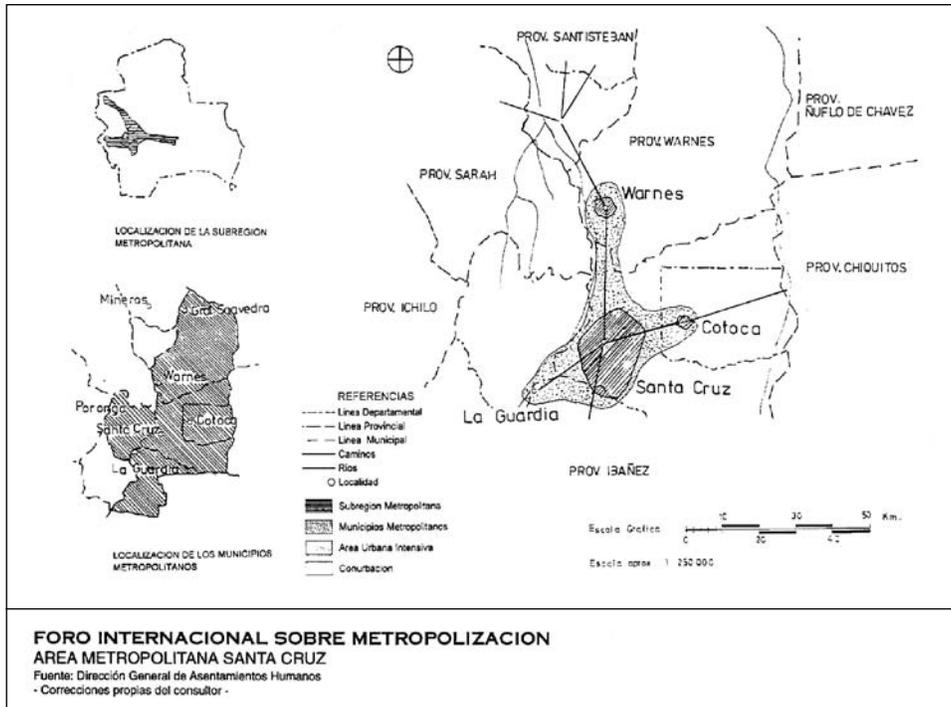
En el caso de La Paz, el crecimiento de la ciudad de El Alto se ha constituido en la base para el crecimiento de los centros aledaños. En el momento actual se trata de un proceso de densificación centrípeta hacia las ciudades de El Alto y La Paz, donde se concentra la mayor parte de las funciones urbanas, y por consiguiente, las expectativas de la población y la expansión urbana hacia las áreas urbanas cercanas a La Paz. Ello produce una cada vez mayor cercanía de los centros del conjunto, lo que facilita crecientemente la formación de asentamientos urbanos. Se trata de una masa urbana que, por un lado, refuerza centros importantes, y por el otro, va desarrollando otros centros de la gran metrópoli, con funciones específicas como zonas residenciales, de recreación, barrios de expansión y zonas industriales.

Cochabamba, de forma similar a La Paz y Santa Cruz, ha ido concentrando población en torno al núcleo principal y acercando entre sí a centros que ya tenían

Mapa 3. Área Metropolitana de Cochabamba



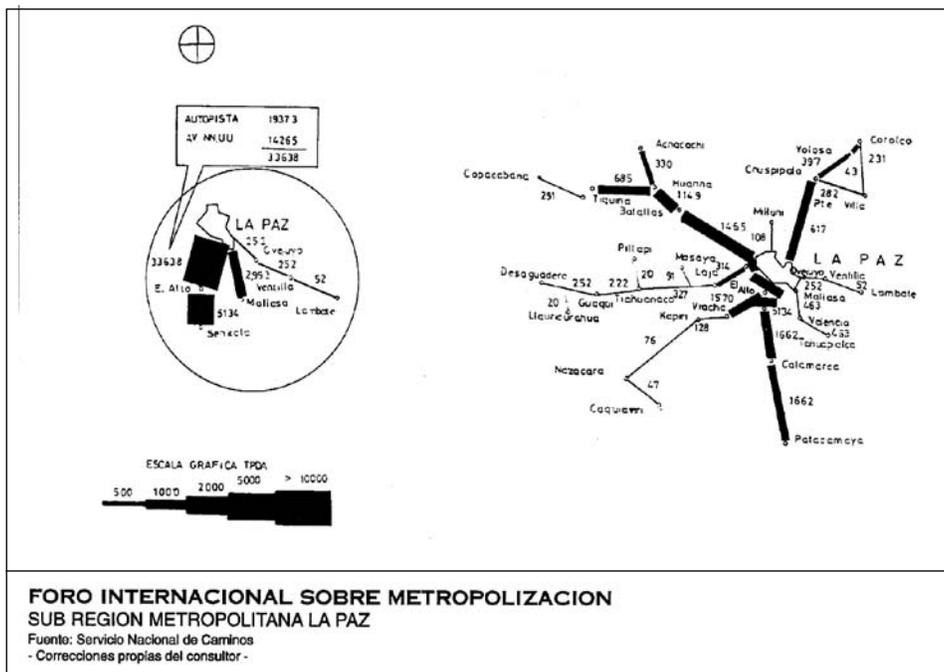
Mapa 4. Área Metropolitana Santa Cruz



su propia imagen y funciones. El resultado es un continuum cada vez más articulado con el desarrollo regional. Dos factores impulsaron este proceso de densificación: las migraciones a la zona tropical del Chapare, que agrandaron las poblaciones de la periferia al usarlas como estaciones intermedias en la migración desde otros lugares de fuera del departamento; y el crecimiento económico, a raíz del incremento de los flujos en el eje central del país que impulsaron tanto la densificación del núcleo central como de los centros periféricos.

Es difícil entender el caso de Santa Cruz sin tomar en cuenta una primera fase de crecimiento urbano en torno a un centro, y el proceso posterior de desarrollo de las provincias cercanas. Es un caso –más claro que los anteriores- de desarrollo de centros periféricos y de funciones productivas importantes en relación con el centro urbano principal. En este caso, el desarrollo de los centros se produjo gracias a las

Mapa 5. Sub-región Metropolitana de la Paz



actividades agroindustriales y a la formación de las colonias agrícolas de migrantes tanto del país como de fuera: menonitas, japoneses y rusos.

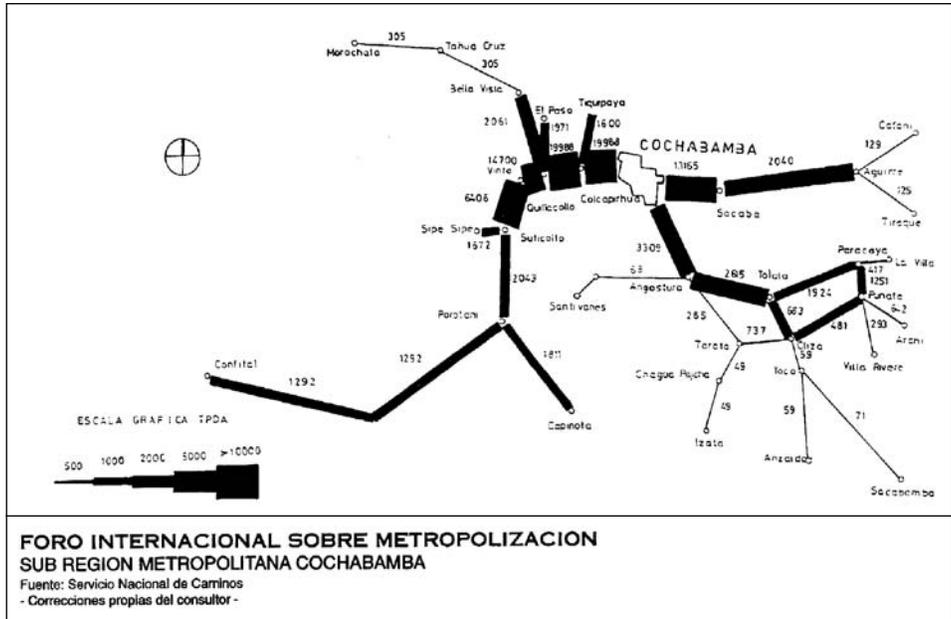
La misma forma radial de la ciudad muestra la manera en que se han ido agregando poblaciones circundantes a un centro estructurado en forma de anillos que crecieron de forma sucesiva en los últimos cincuenta años.

Las redes viales muestran los principales radios de articulación de los entornos, que cada vez conviven más cerca del núcleo central y se desarrollan con él. En torno a estos radios viales se articulan los centros urbanos que conforman cada uno de los conjuntos metropolitanos. Se trata de ciudades que se fueron conformando por la llegada a los pequeños poblados preexistentes, con lo que se fueron estrechando las relaciones con los principales centros productivos rurales de la región. La Paz se expandió siguiendo los principales caminos troncales que llevan a Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, el que vincula también con el norte de Chile y el eje del Sur boliviano;

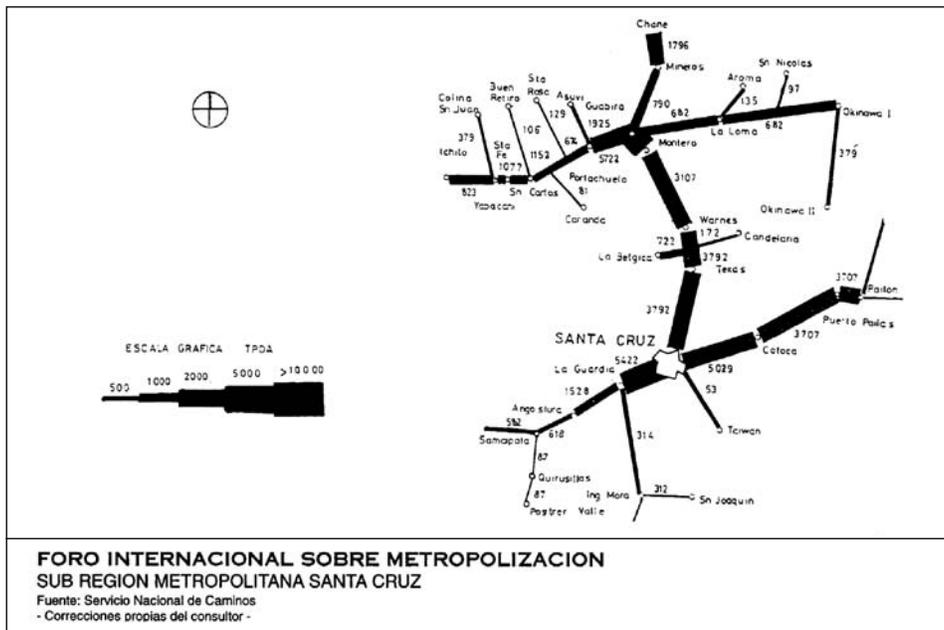
al mismo tiempo, es la salida por el eje central del país. El otro camino es el que lleva hacia el Perú, y finalmente, el que se abre hacia la zona tropical del Norte.

Cochabamba estructuró sus principales centros urbanos en el eje central hacia el norte y hacia el sur con La Paz y con Santa Cruz, respectivamente. Con esta última le ligam dos vías: la carretera antigua, en un primer momento, y la moderna, que pasa por la zona tropical de El Chapare en un segundo, el más importante. En Santa Cruz destaca también la importancia del eje central por las dos direcciones, tanto del camino antiguo como del nuevo. Pero tienen gran impacto los caminos abiertos hacia el Norte, que la vinculan con Trinidad, y finalmente hacia la nueva vía de exportación fluvial de Puerto Suárez, en la frontera este con Brasil. En ese camino cuenta con el gasoducto y con los caminos carretero y ferroviario hacia ese país. Son los tres grandes ejes del desarrollo económico de la región. Finalmente, de crecimiento más reciente es el eje que vincula esta ciudad hacia la Argentina, pasando por el centro gasífero de Tarija, en el Sur de Bolivia.

Mapa 5. Sub-región Metropolitana de Cochabamba



Mapa 5. Sub-región Metropolitana Santa Cruz



Diferencias y similitudes de las zonas metropolitanas

La Paz da cuenta de la afluencia de población desde un entorno fundamentalmente aymara y de la formación de una “ciudad región” culturalmente heterogénea, pero donde las poblaciones del centro y sur de la ciudad se distancian social, económica y culturalmente de las poblaciones aymaras de las periferias.

La zona urbana de Cochabamba muestra un proceso de urbanización relativamente más homogéneo desde una perspectiva cultural, que en el proceso de migración ha ido generando centros intermedios para incorporarlos después al núcleo central, pero también se van formando en ella barrios que muestran una creciente diferenciación sociocultural. Santa Cruz, fruto asimismo de rápidos procesos de migración campo ciudad, da cuenta de un proyecto de ciudadanía de mayor ruptura con sus lugares de origen, pero con buena articulación entre las ciudades intermedias cercanas y la ciudad principal. Quizá sea ésta la ciudad donde tengan lugar los contrastes más grandes entre los barrios del Norte y los del Sur, entre el centro y las periferias.

En los tres casos se han observado al mismo tiempo procesos centrífugos controlados principalmente por las clases pudientes que buscan formas exclusivas de vida urbana, barrios residenciales y cercados en medio de ciudades donde las condiciones de pobreza son relativamente crecientes. Aunque las condiciones generales de vida han mejorado, tres ciudades han acumulando poblaciones con altos niveles de pobreza crítica, la que radica no tanto en la carencia de servicios, cuanto en la insatisfacción que genera la falta de oportunidades en medios urbanos donde conviven con los sectores de más altos ingresos y formas de vida globalizadas (Albo, 1983; Indaburu, 1998; Prado, 2001; Guaygua et al., 2000; Blanes, 2001).

El patrimonio social y cultural se ha formado de manera muy diferente y expresa historias muy distantes unas de otras: a) en La Paz, la herencia del pasado es físicamente más amplia, mostrando al mismo tiempo con mucha fuerza, los rasgos de lo antiguo y de lo nuevo –simultaneidades y contrastes-, así como las discontinuidades; b) en Cochabamba las continuidades físicas y culturales son una característica y las estratificaciones se vienen construyendo en los últimos años con la formación de barrios nuevos, caracterizados por su precariedad; y c) en Santa Cruz, a pesar de la revalorización más reciente de los elementos heredados, éstos se concentran en un centro que va perdiendo funciones habitacionales ante el surgimiento de nuevos centros en la zona metropolitana.

Económicamente, estas grandes conglomeraciones representan diferentes funciones en la relación del país con la globalización, con la estructura económica en proceso de diferenciación y de especialización, y finalmente, de la relación entre las economías rurales y agrícolas con las urbanas. Las tres ciudades son “ciudades región”. Cochabamba manifiesta una relación muy activa entre la economía urbana con las actividades de su entorno rural y la producción de alimentos para otras zonas del país.

Es un lugar de servicios en el sector del transporte por ser el centro de las conexiones viales del país. La Paz, además de ser la sede administrativa central del país, se caracteriza por actividades de comercio internacional con el Perú y Chile que impactan a regiones lejanas de otros departamentos, actividad que comparte con ciudades como El Alto y Oruro. Santa Cruz se caracteriza por su entorno agroindustrial y su condición de nexo importante hacia el MERCOSUR, y en las ferias de negocios vende su imagen a empresarios de países como Brasil, Argentina y Chile, que miran al MERCOSUR (Indaburu, 1998; Urquidi, 1999; Prado, 2001; Blanes, 2001).

Urbanísticamente, los tres conglomerados urbanos principales, ejes orde-

nadores de su entorno, han tenido dinámicas bien diferentes en la herencia de su patrimonio urbano, y en su transformación, conservación y transmisión hacia las generaciones siguientes. Los cascos urbanos y sus estructuras de centros o construcción de policentros consolidan, hoy día, formas de estratificación, segregación y construcción de las ciudades diferentes entre sí. De este modo, se dan cascos urbanos heredados del pasado y revalorizados de forma diferenciada, así como redefinición de las funciones centrales de los mismos. En las tres zonas urbanas se estrechan los espacios públicos en la medida que crece la urbanización, teniendo lugar procesos de crecimiento físico lejos del control y ordenamiento de sus gobiernos locales. De forma diferente, las tres zonas han generado zonas o barrios de clases medias con tendencias de autosegregación por problemas de seguridad ciudadana, ente otros, y sufren procesos crecientes de diferenciación espacial, y barrios que se pueden mencionar como zonas emergentes y con ventajas importantes en el proceso de globalización, mientras que grandes zonas urbanas están cada vez más lejos de una participación con ventajas locales (Prado, 2001; Indaburu, 1998).

Políticamente, las tres zonas han representado comportamientos diferentes, construido soluciones muy personalizadas para los problemas de sus municipios y participado de formas muy diferentes en los procesos políticos nacionales. Los tres centros representan grandes desafíos para el sistema político por el peso en los procesos electorales.

Administrativamente hablando, los municipios de las tres zonas urbanas forman un conjunto aparte del mundo municipalista, no sólo por reunir más de la mitad de los ingresos municipales, sino también por su deuda. En cuando a la gestión metropolitana, no han existido propuestas viables más allá de las dinámicas individuales de cada gobierno municipal, aunque los esfuerzos de concebir una zona metropolitana de forma integral han mostrado algunos avances en Santa Cruz con relación a las experiencias de La Paz y de Cochabamba. Las tres zonas muestran una profunda falta de correspondencia entre las características de los problemas urbanos y las capacidades de los gobiernos municipales. No se perfilan soluciones viables desde dentro, desde los propios gobiernos municipales, a pesar de los intentos de mancomunarse en función de la gestión urbana. De todos modos, éstos siguen siendo los principales actores en cualquier proceso de gestión metropolitana (Urquidí, 1998).

Estructura e importancia económica de las zonas metropolitanas

Las tres zonas metropolitanas están en los tres departamentos que han confor-

mado el eje central del desarrollo del país, con lo que la participación de ellas en la economía es correlativa con la del propio departamento. Las tres regiones participan con poco más del 72 % del total del PIB nacional: Santa Cruz, con 28,37 %, La Paz, con 26,1 % y Cochabamba con 17,9 %.

El sector primario. Santa Cruz aportaba 32,49 %, descendiendo a 15,93 % en Cochabamba y a un bajo 13,44 % en La Paz. En agricultura, selvicultura, caza y pesca, Santa Cruz alcanza 42,85 %; Cochabamba, 15,14 %; y La Paz 12,87 %. En extracción de minas y canteras, Santa Cruz logra 18,49 %; Cochabamba, 17 %; y La Paz 14,33 %.

El sector secundario. Santa Cruz aportaba un 28,99 %; La Paz 25,66 % y Cochabamba 22,15 %. En industrias manufactureras Santa Cruz alcanza 30,65 %; La Paz, 24,54 %; y Cochabamba, 22,61 %. En construcción y obras públicas La Paz logra 31,21 %; Santa Cruz 20,81 % y Cochabamba 19,88 %.

En el sector terciario. La Paz aportaba con 33,63 %; Santa Cruz, 25,78 %; y Cochabamba 17,03 %. En establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a empresas,

La Paz alcanza 35,09 %; Santa Cruz, 30,12 %; y Cochabamba, 16,06 %.

En proporciones similares se distribuye el PIB metropolitano. Las tres áreas sumaban, en 1996, un PIB de 4.044 millones de dólares, lo que significaba más del 50 % del total nacional. Internamente las tres áreas son la parte más importante de sus regiones, destacando la primacía urbana de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en sus entornos, lo que define las características económicas de la metropolización (Universidad de Toronto, 1998 y 1999; Urquidi, 1999, Blanes 2001).

- El área metropolitana de La Paz 1.550 millones de dólares, el 87 % del total departamental.
- El área metropolitana de Santa Cruz registró 1.504 millones de dólares, el 59 % del total departamental.
- El área metropolitana de Cochabamba 990 millones de dólares, un 82 % del total departamental.

Desde la perspectiva del ámbito local, las tres metrópolis se presentan como los nodos de articulación de la economía global y como los principales motores del crecimiento del país y de sus respectivas regiones.

- **La Paz**, además de ser la sede administrativa central del país, se caracteriza por actividades de comercio internacional con el Perú y con Chile que impactan sobre regiones lejanas de otros departamentos, actividad que comparte con ciudades como El Alto y Oruro. Las actividades administrativas y de servicios generan relaciones con el resto del país por encima de lo que ocurre con las 20 provincias del departamento. El hecho de que La Paz se proyecte más hacia el resto del país que hacia sus regiones es un dato importantísimo para entender su debilidad como región. El que la ciudad se explique más por sí misma y en función de sí misma ante las provincias le da una imagen de ciudad rentista, que depende en buena medida de los servicios que presta.

Aunque es la cabeza económica del departamento, como mercado de trabajo y de consumo de bienes y servicios, sus funciones con el resto del país son su característica central. Existen importantes empresas en la zona metropolitana pero resalta la presencia de pequeñas y microempresas.

- **Cochabamba** manifiesta una relación muy activa entre la economía urbana y las actividades de su entorno rural y la producción de alimentos para otras zonas del país. Por ser el centro de las conexiones viales del país, es un lugar de servicios en el sector del transporte. El sector comercial ocupa un papel importante.

Otro aspecto que caracteriza a este centro es su papel de ciudad “intermedia” dentro del sistema urbano, que las otras dos áreas metropolitanas, por lo que, por varios aspectos, podría caracterizarse como ciudad de intermediaciones. Empresarialmente, la zona metropolitana da una imagen clara de medianas y pequeñas empresas. Pero Cochabamba-Cercado se ve mucho más involucrada en las actividades económicas de sus centros poblados cercanos que en el caso de Santa Cruz y de La Paz.

- **Santa Cruz** contrasta con las otras dos zonas urbanas, no sólo por su configuración física sino también por su modelo de desarrollo. Frente a la imagen de ciudad rentista de La Paz o de ciudad de intermediación y servicios de Cochabamba, Santa Cruz se caracteriza por la vocación productiva de su entorno agroindustrial y su condición de nexo importante hacia el MERCOSUR.

La imagen empresarial que va emergiendo progresivamente es de grandes y modernas empresas, con lo que impone una suerte de liderazgo en varios niveles, particularmente en el campo corporativo. Es un signo muy importante el hecho de que el empresariado haya querido distanciarse de la tradicional Confederación de Empresarios Privados de Bolivia para defender sus intereses por sí solo. Obviamente,

no es de menor importancia que la mayor parte de las empresas transnacionales han elegido ese departamento como sede de operaciones y de gestión.

En las ferias de negocios Santa Cruz vende su imagen a empresarios de países como Brasil, Argentina y Chile que miran al MERCOSUR (Indaburu, 1998; Urquidi, 1999; Prado, 2001; Blanes, 2001).

El proceso de diferenciación económica departamental es creciente y aunque las tres zonas participan de lleno en la nueva economía, sus características expresan modelos relativamente diferentes en la forma de estructurar las ventajas comparativas de la globalización y de estructurar las propias regiones.

Los indicadores sociales

Los indicadores sociales muestran situaciones críticas en las tres áreas metropolitanas, donde resalta la percepción de las desigualdades y de los procesos de exclusión en las tres áreas, particularmente en indicadores como vivienda, y sobre todo, calidad de vida. Los pobres de estas ciudades son cada vez más en términos relativos.

La ciudad de Santa Cruz ha visto empeorar su calidad de vida en materia de criminalidad, colocándose por encima de ciudades como La Paz y Cochabamba; aumenta la desprotección policial, dadas las grandes magnitudes del delito, y éste está pasando de ser un fenómeno de la pobreza a una importante área de ingresos, el crimen organizado.

Las cifras no son muy confiables ya que no existen buenos estudios cuantitativos –y menos aun cualitativos–, pero muestran una alta correlación con el tamaño poblacional de las ciudades.

El empeoramiento de la calidad de vida no se mide tanto por el acceso a los tradicionales servicios sociales públicos (éstos han mejorado durante los últimos años), sino por indicadores de percepción que son los más cercanos a los sistemas de acción social de las grandes zonas urbanas.

El futuro próximo

En la proyección para los años 2010, 2020 y 2035 (sobre un total estimado de 15 millones de habitantes), las tres áreas metropolitanas habrán reunido a más del 60 % de la población del país, incluida la población urbana y rural.

Cuadro 2. *Bolivia: cambios en la población con necesidades básicas insatisfechas según departamento, censos de 1992 y 2001 (en %)*

DEPARTAMENTO	ÁREA URBANA			ÁREA RURAL		
	Censo 1992	Censo 2001	Diferencia	Censo 1992	Censo 2001	Diferencia
Bolivia	53,1	39	(14,1)	95,3	90,8	(4,5)
Chuquisaca	43,4	33,4	-10	97,3	94,7	(2,5)
La Paz	56,7	50,9	(5,8)	96,9	95,5	(1,4)
Cochabamba	50	33,2	(16,8)	94,3	85,7	(8,5)
Oruro	57,8	50,1	(7,8)	94,4	94,3	(0,1)
Potosí	51,7	48,3	(3,4)	95,1	95,4	(0,3)
Tarija	49,3	30,5	(18,8)	93,6	86,6	-7
Santa Cruz	48,5	24,9	(23,6)	92,5	81	(11,5)
Beni	72,5	66,8	(5,7)	97,9	96,1	(1,8)
Pando	48,3	43,3	-5	96,4	91,5	(4,9)

Fuente: INE-UDAPE

Cuadro 3. *Bolivia: población con necesidades básicas insatisfechas y variación anual, censos de 1976, 1992 y 2001 (en porcentaje)*

Departamento	Censo			Variación 1976-2001	Promedio Anual (*) 1992-2001
	1976	1992	2001		
Bolivia	85,5	70,9	58,6	(1,08)	(1,33)
Chuquisaca	90,5	79,8	70,1	(0,82)	(1,05)
La Paz	83,2	71,1	66,2	(0,68)	(0,53)
Cochabamba	85,1	71,1	55	(1,21)	(1,74)
Oruro	84,5	70,2	67,8	(0,67)	(0,25)
Potosí	92,8	80,5	79,7	(0,53)	(0,09)
Tanja	87	69,2	50,8	(1,45)	(1,99)
Santa Cruz	79,2	60,5	38	(1,65)	(2,43)
Beni	91,4	81	76	(0,62)	(0,54)
Pando	96,4	83,8	72,4	(0,96)	(1,23)

Fuente: INE-UDAPE.

(*) Para el cálculo de la variación promedio anual entre 1976 a 2001, el periodo intercensal es de 24 días. De 1992 a 2001 es de 9 años, 3 meses y 5 días.

Aunque la ocupación del territorio no es homogénea, debido a razones principalmente relacionadas con la fisiografía y la distribución de los recursos naturales, el poblamiento del país muestra una estructura urbana propicia para un desarrollo

equilibrado. Sin embargo, hay que destacar que las ciudades de tres departamentos concentrarán en las próximas décadas casi dos tercios de la población total del país. Aunque no existen graves problemas de primacía urbana, algunos departamentos van a sentir fuertemente el desequilibrio poblacional: Oruro, Potosí y Chuquisaca serán los más afectados. Las ciudades bolivianas están concentrando cada vez más a los pobres del país. La transición de la pobreza rural hacia las ciudades va a causar serios problemas que hasta el momento no se han enfrentado.

Por otro lado, se concentrará en las ciudades la mayor parte de la población con los mejores niveles de formación profesional del país, aumentando la diferencia entre las áreas urbana y rural. Se profundizará la concentración de recursos de capital en las ciudades. En las ciudades se diferenciarán cada vez más la gestión pública de la gestión privada de las mismas. Las ciudades serán expresiones cada vez más importantes de la diferenciación regional. Lo municipal cada vez más se verá desafiado por lo urbano y lo regional.

El desarrollo de estas ciudades ha cambiado muchas veces de significado, debido a las diferentes fases del desarrollo nacional. Hoy, aunque sigue basándose en una matriz de exportación de materias primas, se ha desarrollado una mayor complejidad intersectorial, lo que se refleja en los roles de las ciudades. Muchas macropolíticas nacionales como las mencionadas han cambiado el marco global del país en todas sus dimensiones (nivel macro), lo que ha afectado a las regiones, a los municipios y a la población.

La competitividad del país frente a la globalización, al mismo tiempo que le afecta de forma global, ha diferenciando las regiones y consiguientemente, a sus sistemas urbanos. Existen pocos análisis sobre este tema, y habrá que seguir buscando y estudiando las evidencias sobre cómo han afectado las políticas macro al proceso de urbanización.

Cuadro 4. Proyección poblacional de las zonas metropolitanas, 1976-2035

Año	La Paz-EI Alto	Santa Cruz	Cochabamba	Total zonas	Porcentaje de la población total
1976	645.161	265.524	229.957	1.140.642	24,72
1992	1.137.906	725.724	528.223	2.391.853	37,25
2001	1.476.466	1.236.807	752.613	3.465.886	38,70
2010*	2.050.000	1.920.000	1.045.000	5.015.000	49,03
2020*	2.450.000	2.730.000	1.350.000	6.530.000	53,55
2035*	3.131.000	4.050.000	1.830.000	9.011.000	60,96

Los cambios sociales y políticos han tenido importancia en todo el país, pero sobre todo en el gobierno de las ciudades y en el desarrollo de su rol en sus contextos regionales. En contraste con esta importancia, las ciudades no han sido un objeto explícito de interés de parte del sector público; sólo se las ha considerado como espacios de construcción política, tanto a nivel de la gestión pública como por el sistema político. Los actores de la sociedad civil o de la economía han desarrollado acciones parciales y fragmentadas sobre los procesos urbanos, y se ha concentrado el interés en la temática municipal como una muestra del alto nivel de desarrollo de la vida política. El tema de las áreas metropolitanas ha merecido mayor atención en los escenarios de la sociedad civil y del sector privado de la economía.

La acelerada emergencia de áreas urbanas metropolitanas no estuvo acompañada por la formación de **actores de la sociedad civil** relacionados con las dimensiones urbanas metropolitanas, y no se han consolidado estrategias de acción para abordar los problemas metropolitanos. Por consiguiente, carecemos hoy día de mecanismos adecuados de gestión de los problemas que la metropolización trae consigo.

Por todo ello, no se han aprovechando adecuadamente las ventajas comparativas que las tres zonas metropolitanas ofrecen a las regiones correspondientes de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, así como al propio desarrollo urbano en cada una de ellas. No se están emprendiendo proyectos de construcción territorial que permitan mejorar el entorno de acción metropolitano.

No se han generado, sino de forma incipiente y desigual, sistemas de valores en esa dirección, ni una conciencia del fenómeno metropolitano como síntesis de procesos económicos, sociales y políticos; tampoco se observan planteamientos metropolitanos impulsados por actores metropolitanos o mecanismos de gestión metropolitana. Los momentos que se han detectado estuvieron a cargo de elites de profesionales o técnicos, y carecieron de continuidad. Pero, con todo, el tema llegó a la conciencia ciudadana como un problema y no como una oportunidad de desarrollo. El contexto institucional del país no está aún maduro para enfrentar el tema, y no es sólo por falta de una ley específica².

2. En agosto de 1998 se llevó a cabo en Cochabamba el Taller Nacional "Desarrollo urbano sostenible. Experiencias municipales en el contexto de la Participación Popular", donde se revisó el tema de la metropolización y se sacaron conclusiones sobre las dificultades y los caminos a seguir. En marzo de 1999, en el marco del Foro Internacional sobre Metropolización, en la ciudad de Santa Cruz, se revisaron varias experiencias referentes importantes, entre las que se contó con casos de Estados Unidos, Canadá y Europa (Universidad de Toronto, 1998; Prado, 1999). En 2000 se llevó a cabo un trabajo de análisis comparativo entre las zonas metropolitanas de La Paz y Santa Cruz, en la perspectiva de

Bibliografía

Albo, X. et al.

1983 *Chukiyawu: la cara aymara de La Paz, cabalgando entre dos mundos*, Cuadernos de Investigación, 24, CIPCA, La Paz.

Blanes, J.

2001 *Área metropolitana de La Paz, condiciones de competitividad*, CEBEM, La Paz.

Guaygua, G. et al.

2000 *Ser joven en El Alto: rupturas y continuidades en la tradición cultural*, PIEB, La Paz:

Indaburu, R.

1998 *Plan estratégico y ordenamiento territorial de La Paz metropolitana*, La Paz:

IIPLAN. INE

2002 *El proceso de urbanización en Bolivia, 1992-2001*, INE, La Paz.

Prado, F.

2001 *Los desafíos de la globalización y la competitividad en el área metropolitana de Santa Cruz*, CEDURE, Santa Cruz.

Universidad de Toronto

1998 *Taller nacional desarrollo urbano sostenible. Experiencias municipales en el contexto de la participación popular*, Cochabamba, ACDI, La Paz.

1999 *Foro internacional sobre metropolización, 11-12 de marzo, Santa Cruz*, ACDI, La Paz.

Urquidi, B.

1999 “Los desafíos actuales de las ciudades bolivianas: presentación de temas relevantes en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba” en Universidad de Toronto, *Foro internacional sobre metropolización, 11-12 de marzo, Santa Cruz*, ACDI, La Paz.

rescatar una visión de competitividad metropolitana desde la óptica de las ciudades del Sur. Tanto en el caso de La Paz como de Santa Cruz se resaltan muchos elementos de interés que deberán ser tomados en cuenta para la gestión de los problemas urbanos de estas grandes áreas en formación en Bolivia (Prado, 2001; Blanes, 2001; Indaburu, 1998).

Exclusión política, des ciudadanía y profundización de la pobreza urbana en Bolivia

Carla Andrea Espósito Guevara*

Resumen

El presente artículo aborda el análisis de los impactos producidos por los procesos de flexibilización laboral sobre la inclusión/exclusión política y el ejercicio ciudadano, así como de las repercusiones de éste último sobre la pobreza. En Bolivia, a raíz de las transformaciones neoliberales, se vivió un proceso de exclusión política ligada a un fenómeno de des ciudadanía, que ha profundizado la pobreza urbana al excluir a grandes grupos sociales tanto del acceso a espacios reales de participación y decisión, como del reparto de riqueza y del ejercicio de derechos sociales.

Introducción

El presente artículo aborda el análisis de los impactos producidos por los procesos de flexibilización laboral sobre la inclusión/exclusión política y el ejercicio ciudadano, así como de las repercusiones de éste último sobre la pobreza. Sostenemos que en Bolivia, a raíz de las transformaciones neoliberales, se vivió un proceso de exclusión política ligada a un fenómeno de des ciudadanía, no superado por el actual gobierno, que ha profundizado la pobreza urbana al excluir a grandes grupos sociales tanto del acceso a espacios reales de participación y decisión, como del reparto de riqueza y del ejercicio de derechos sociales a través de:

* Licenciada en Sociología, universidad Mayor de San Simón Cochabamba, Maestrante universidad de la Cordillera La Paz, Bolivia.

- a) un proceso de desalarialización que trajo como una de sus principales consecuencias el dismantelamiento de la ciudadanía social y de las organizaciones laborales que la sostenían;
- b) la aplicación de una serie de reformas destinadas a la recomposición de la relación entre el Estado y la sociedad que promovieron un nuevo tipo de ciudadanía restringida y fragmentada que favoreció el fortalecimiento de redes clientelares y la descomposición de estructuras sociales organizativas locales que servían de soporte para la reproducción social de los barrios sin solucionar los problemas causales de la generación de pobreza.

Asimismo debe resaltarse que la exclusión política está cruzada por elementos ligados a la discriminación sociocultural y lingüística que complejizan aún más el panorama. La masiva presencia de población migrante de origen indígena en las ciudades está redefiniendo la significación, la estructura y la cultura de la sociedad urbana a través de fuertes componentes de origen étnico y cultural, los que, simultánea y tácitamente, operan como uno de los mayores obstáculos sociales para ejercer ciertos derechos sociales (Arteaga y Espósito 2006)¹.

El dismantelamiento de la sociedad salarial

Las ciudades, en la última década, han perdido parte de su capacidad de asegurar por la vía del empleo formal, estable y asalariado, condiciones de vida razonablemente adecuadas para un segmento importante de la fuerza de trabajo, cediendo en gran parte su dimensión integradora (Ziccardi 2001:94). Al intentar dar una explicación a este nuevo fenómeno, cobra una importancia fundamental la profundización de los procesos de exclusión fruto de nuevas *relaciones laborales* y del retraimiento del Estado en la creación de empleo formal.

La reconfiguración ocurrida en el campo laboral fue conceptualizada en los términos de Castel como la transición de formas fordistas de organización del trabajo que concentraban a grandes cantidades de trabajadores, hacia formas tyloristas (Brugué, Goma y Subirats 2002), organizadas sobre la flexibilización laboral. Las

¹ La información que se presenta en esta ponencia recoge algunos de los hallazgos efectuados en una investigación realizada entre los años 2005 y 2006 con el apoyo de Unitas, del Programa de Desarrollo del Poder Local y la Fundación Carolina de España, denominada "Movimientos sociales urbanos, una lucha contra la exclusión, social, económica y política", los datos de esta investigación han sido re-interpretados bajo la mirada de la producción de la exclusión social y la profundización de la pobreza urbana.

mismas, respondiendo a un nuevo criterio de ganancia, articulan nuevas formas de utilización de la mano de obra poniendo en juego la misma concepción del trabajo como elemento estructurante de la vida, de la inserción y del conjunto de las relaciones sociales. De esta manera, se potencian procesos de vulnerabilidad, precarización, exclusión social y aumento del desempleo, así como el dismantelamiento de todo el sistema de protecciones sociales que sustentó la sociedad salarial, configurando los rasgos de una nueva cuestión social cristalizada en la desestructuración de los estables; la instalación de la precariedad singularizada por trayectorias erráticas de periodos empleo no empleo y la creación de desempleo y empleo precario a través de la “flexibilidad, la polivalencia y la subcontratación” que afecta fundamentalmente jóvenes, mujeres, personas mayores y grupos de migrantes, denominados como “supernumerarios” (Castel 1997:403-416).

Para este autor, una de las mayores consecuencias de la degradación de la condición salarial es la pérdida de la función integradora del trabajo, causada esencialmente por las “desafiliaciones”, entendidas como la ausencia de inscripción del sujeto en estructuras dadoras de sentido, postulándose nuevas sociabilidades que ya no se inscriben en apuestas colectivas (Castel 1997: 421). Las mismas provocan efectos desastrosos desde el punto de vista de la cohesión social, actuando como elemento descalificador en el plano cívico y político, al hacer perder a los trabajadores su condición ciudadana², concretizada en la pérdida de la capacidad de influencia política y de negociación de derechos.

Aunque la descripción de Castel remite a procesos vividos en sociedades europeas, en particular la francesa, su lectura puede ayudarnos a comprender lo ocurrido en los países latinoamericanos a raíz de las reformas neoliberales. Es preciso subrayar que, pese a que la sociedad salarializada nunca fue numerosa en países como Bolivia, su centralidad fue clave en la construcción de los procesos políticos y ciudadanos (Zavaleta 1983) a través de las luchas sociales, de ahí el peso que cobra su derrumbe.

La forma particular de dismantelamiento que sufrió la sociedad salarial en Bolivia, fue conceptualizada como un proceso de *re-proletarización* (García 1999). El mismo supuso la presencia de políticas de desregulación de la normatividad laboral dirigidas a favorecer un uso flexible de la fuerza de trabajo, eliminando derechos so-

2 Castel asocia la condición ciudadana a la capacidad de ejercer derechos a partir de las prerrogativas sociales que da el trabajo y el ser útil socialmente en el Estado de bienestar.

ciales y laborales a favor del aumento de las tasas de ganancia del capital a partir de la reducción de empleos públicos, la eliminación de la estabilidad laboral, la ausencia de seguridad social y la caída del salario real. Estas son medidas conocidas como la *flexibilización laboral* contenida en la libre contratación.

Ésta constituyó en la práctica, la degradación de la relación asalariada, que reafirma una zona de vulnerabilidad³ donde el “trabajo permanente es algo no permanente” (Arteaga y Espósito 2006). En este escenario el aumento de las tasas de desempleo⁴, el incremento del subempleo, del empleo asalariado precario y eventual y las diversas formas de subcontratación⁵ sujetas a bajos salarios, son el rasgo predominante (Escobar 2005: 61-63).

El empleo urbano en particular se caracteriza por a) la precariedad, b) por la concentración de dos tercios de sus nuevos empleos en el sector informal, c) por la concentración de la mitad de sus nuevos empleos en el sector terciario, d) por ser predominantemente no asalariado (“cuenta propista”), y e) por exigir cada vez menos calificaciones -tres de cada cuatro nuevos empleos son no calificados (Escobar 2005: 61-63). Los contingentes migratorios precarizados y sin derechos son aprovechados para integrarlos de manera rentable en los sectores más bajos del mercado de trabajo generando un “nuevo fenómeno de pobreza” (Alonso s/f), panorama que suma a las viejas desigualdades otras nuevas, como son las formas de exclusión al interior de los propios trabajadores, con la creación de subcategorías de trabajadores - por género, por pertenencia étnica, con/sin estabilidad, con/sin seguridad social- cuya pirámide muestra la aparición de múltiples estándares de ciudadanía social en Bolivia (Farah 2006).

Por su parte el desempleo urbano se expresa en: a) una tasa de desempleo que alcanza niveles inéditos con mayor presencia de mujeres, b) un mayor peso relativo entre hombres y mujeres en la cesantía del empleo, c) los desocupados son jóvenes y más escolarizados, d) una mayor incidencia en hombres jefes de hogar en la cesación del empleo y e) un aumento en la duración de los episodios de desempleo (Escóbar 2003).

3 Zona de vulnerabilidad en el sentido de un “espacio social de inestabilidad, de turbulencias, poblado de individuos precarios en cuanto a su relación con el trabajo y frágiles en su inserción relacional” (Castel 1991).

4 Actualmente el desempleo urbano asciende al 11.8 %, esto significa que al momento existen 315.000 personas están en condiciones de desempleo absoluto, situación que no da señales de cambiar con el actual gobierno del MAS al gobierno e incluso se cree que bajo este gobierno se profundizó aún más la situación de empleo precario.

5 El subempleo actualmente afecta al 64 % de la población ocupada.

La desaparición del empleo formal causada por la retracción del Estado en la generación de empleo productivo, obliga a “los trabajadores excedentes” en búsqueda de medios de subsistencia, a desplazarse ya sea hacia el sector informal⁶ y de servicios o hacia trabajos asalariados parciales, temporales o mediados por la subcontratación, en especial las comerciales y PYMES⁷. La característica de todas estas es una baja generación de recursos,⁸ la total desprotección social, precarias condiciones de trabajo y una alta inserción de jóvenes y mujeres. La solución a los problemas de empleo se trasladó a la iniciativa individual apoyándose en estrategias de subsistencia económica basadas en el trabajo de toda la familia donde predomina la autoexplotación laboral, la asunción privada o semi privada de los costes sociales y la despolitización de las relaciones laborales.

La extrema dificultad para lograr ingresos con los que enfrentar las necesidades familiares redundando en una actitud agresiva de competencia, vivida como la afirmación de intereses individuales en menoscabo de ciertos valores compartidos, centrados en la cooperación y reciprocidad. Esta actitud competitiva entre los pobres hace que estos no se impliquen en aspectos referidos al bien común de sus barrios y que dependan más de factores de poder, en especial político y de redes clientelares para acceder a los medios y/o recursos para su supervivencia (Arteaga y Espósito 2006). Sus efectos en la ciudadanía social son profundos en tanto va en ascenso la emergencia de una “nueva ciudadanía privada” que refuerza los derechos estrictamente individuales y la asunción personalizada de los riesgos sociales (Alonso s/f).

Esta situación de carencia y vulnerabilidad que provocan la falta de empleo, el trabajo precario y/o el desempleo, es vivida por los actores de los barrios urbano populares como una situación de permanente exclusión y discriminación hacia la “gente de escasos recursos” generada y/o avalada por el Estado. La noción de postergación que se expresa en los barrios populares, “vivir relegados en nuestro propio país”, muestra el carácter desintegrador del vínculo social generado por la flexibilización laboral, (Arteaga y Espósito 2006: 41). Este proceso explota las antiguas identidades laborales sustituyéndolas por nuevas formas de identidad parcial pertenecientes a sub-segmentos laborales o a la condición étnica de grupos migrantes, observándose así mismo la reconstrucción de ciudadanía locales o regionales que responden a las ventajas econó-

6 El sector informal y los hogares particulares (servicio doméstico) procuran empleo para siete de cada diez ocupados, en tanto que el sector estatal aporta uno de cada diez empleos (Rivero 2006).

7 Pequeñas y medianas empresas.

8 Siete de cada diez empleos son de baja calidad e ingreso precario (Rivero 2006).

micas y políticas que los grupos sociales puedan obtener en sus territorios y ciudades.

Esta forma de reestructuración de las relaciones laborales afectó cualitativamente la relación entre Estado, economía y sociedad así como la estructura de clases. Esta se ha visto fuertemente trastocada, por la recomposición de los regímenes institucionales de producción de bienestar que desorganizaron los derechos sociales y el estatus de ciudadano de los trabajadores (Farah 2006), como por las severas transformaciones ocurridas en la composición de los sectores agrupados en la Central Obrera Boliviana. Los cambios sufridos en la cob, tanto en los grados de filiación, como en las condiciones materiales que sustentaron la organización afectan la propia acción sindical⁹. La sustitución de elementos centrales que antes hacían a la actividad laboral como el contrato fijo, la concentración masiva, el respeto a los derechos laborales y los sistemas jerarquizados de aprendizaje y ascenso por otras nuevas formas de contratación en las que prima la eventualidad, la polivalencia y la subcontratación, promueven el surgimiento de un nuevo tipo de trabajador asalariado, despolitizado y fragmentado, sometido a nuevas formas híbridas de trabajo, contrato¹⁰ y organización productiva¹¹ (García 2001), que han agudizado las condiciones de su explotación.

Desarticulación de organizaciones laborales, despolitización del trabajo y pérdida de la ciudadanía social

Los cambios materiales descritos en las relaciones laborales tuvieron efectos directos sobre el plano ideológico de la acción sindical que sufrió el vaciamiento de sus contenidos de clase desintegrándose el ideario de la ciudadanía salarial identificada con los derechos sociales y la negociación colectiva. Se impuso en su lugar un nuevo sentido de ciudadanía caracterizada, por la escisión entre ciudadanía y derechos económicos y laborales. Este hecho ocurre paralelamente a un cambio en las mediaciones entre Estado y trabajadores, el cual sustituye el sindicato por los partidos políticos en la tarea de mediación entre sociedad y Estado. El sindicato queda anulado en dos sentidos: como intermediario político y como organismo representativo del trabajador organizado (García 1999).

9 Sectores como el LAB, AASANA, petroleros, ferroviarios y mineros del oro fueron traspasados al sector privado. En cambio, otros como mineros de estaño, telegrafistas, serigrafistas, cinematógrafos desaparecieron por efecto de cambios en las actividades económicas. En tanto que fabriles, comerciantes y seguridad social fueron afectados por las transformaciones fiscales que supusieron la eliminación de sindicatos de base con presencia estatal (Arze 2000).

10 El trabajo a domicilio, la subcontratación, el contrato eventual, entre otros (García 1999).

11 Las nuevas formas de organización del trabajo responden a un modelo de tipo taylorista, que desconcentra y externaliza partes de la producción.

Este cambio fundamental en las relaciones entre Estado y trabajadores tuvo su trayectoria. Desde su aplicación en el año 1985, las medidas del ajuste estructural formaron parte de una iniciativa histórica deliberada de los sectores empresariales. Las medidas apuntaron a la disolución de las estructuras organizativas obreras, cuya experiencia y conocimiento suponían un costo económico excesivo y un peligro político para la nueva organización de la economía y del capital en Bolivia (Arteaga y Espósito 2006:5). Uno de los objetivos centrales de las reformas neoliberales promovidas por el ajuste estructural fue proporcionar un marco jurídico que facilitara una profunda transformación de la base productiva garantizando mayores tasas de ganancia a largo plazo para el capital con el abaratamiento de la fuerza de trabajo y el desmantelamiento de la organización sindical (García 1999; 2001).¹²

Esto se logró a través de la disolución de las factorías y grandes conglomerados obreros, la externalización de un gran número de actividades productivas (Arze 2000) y la desaparición del contrato por tiempo indefinido. Estas medidas atomizaron tanto la relación laboral fordista como las formas correspondientes de ejercicio de ciudadano, dando paso a un nuevo proletariado más numeroso pero materialmente fragmentado, mayoritariamente compuesto por jóvenes, mujeres y migrantes sin experiencia sindical, individualizados y desafiados, por tanto incapacitados para ejercer sus derechos (Arze 2000). Las formas de contratación y de inserción han sido calificadas como una “nueva tecnología de normalización del obrero destinadas a extirpar antiguos hábitos políticos sindicales” (García 1999), disminuyendo la efectividad de la acción colectiva al pulverizarse la capacidad de articular sus demandas políticas.

La dispersión y atomización de los trabajadores¹³ es el principal efecto político de esta desintegración que se traduce no sólo en la pérdida de la capacidad de las organizaciones laborales para incidir en el Estado (recordemos que el sindicalismo obrero desde 1952 se constituyó casi en un contrapoder del Estado con capacidad de vetar y modificar decisiones estatales a través de la presión política) (Zavaleta 1984), sino también en la disolución de un espacio social que otrora permitiera, la sociabilidad entre iguales (los trabajadores) y la formación política de la clase trabajadora (García

12 Se trataba de eludir las trabas a la acumulación que imponían las conquistas laborales del periodo previo que encarecían el costo de la mano de obra disminuyendo la tasa de ganancia empresarial (García Linera 1999).

13 La desconcentración del trabajo, el contrato por tiempo definido y la pérdida de una identidad cohesionada por el trabajo son las principales razones que están en la base de la desarticulación del sindicato.

2001; Arce 2000). Producto de esto deviene su desarticulación como sujeto social colectivo capaz de crear un proyecto político ideológico alternativo basado en el trabajo como regulador de la sociedad y como generador de la solidaridad social (Alonso s/f).

Este hecho tuvo un impacto directo sobre la ciudadanía social. En términos del salario la desorganización sindical se traduce, en la pérdida de la capacidad de los trabajadores para aminorar la obtención de plus valor por parte del empleador disminuyendo los niveles de explotación por medio de una práctica organizativa de exigencia de sus derechos sociales. Por otra parte, la desorganización sindical conlleva la incapacidad de lograr la desmercantilización de una parte de la reproducción gracias a la obtención de beneficios sociales (salario social) (Alvarez 2006). Los mismos han desaparecido gracias a la des-socialización del trabajo y de la propiedad. El Estado ha perdido la capacidad de emplear productivamente la fuerza de trabajo al abandonar la regulación de la relación laboral. Esto ha restado importantes ingresos al Estado, sin los cuales queda imposibilitado para sostener la vigencia de prestaciones y derechos sociales (Farah 2006). De esta manera, las condiciones de vida e ingreso de los trabajadores han empeorado, lo cual ha profundizado el empobrecimiento urbano.

En síntesis, la pérdida de centralidad y la despolitización del trabajo asalariado, su dispersión gracias al comercio informal, el desempleo y la privatización del sector estatal y la desarticulación de las organizaciones sindicales constituyen los elementos centrales que permitieron la descomposición y desmonte de la vieja ciudadanía social promovida por el estado corporativista de 1952. La misma se caracterizó por una fuerte acción dirigida a la demanda y satisfacción de derechos sociales, por modos de normalización e integración social a través del empleo y la negociación colectiva por una alta participación de las organizaciones de trabajadores mineros y fabriles fundamentalmente en las decisiones estatales. La ciudadanía social fue sustituida por una nueva ciudadanía neoliberal, acorde con las necesidades del nuevo modelo divorciando aspectos que antes asociaban ciudadanía, trabajo, derechos sociales y participación colectiva.

La nueva ciudadana neoliberal

El desmonte del sistema estatal en Bolivia provocó un fuerte deterioro de las condiciones de vida. El llamado “costo social” se vio reflejado en el aumento de la desigualdad, la amplificación de los contrastes sociales y en una creciente deslegitimación del sistema político, que señalaba la necesidad de dar forma a nuevas políticas sociales destinadas a paliar la crisis económica y social. Una de las respuestas

estatales fue el diseño de una novedosa política social destinada a potenciar el nivel local como medida para combatir la pobreza y a fortalecer la democracia mediante la ampliación el rol de los gobiernos locales, la descentralización de ciertos recursos y de la creación de políticas redistributivas que buscaron promover nuevos procesos de ciudadanía local.

La nueva matriz sociopolítica supuso la construcción de un sistema de mediación entre Estado y sociedad. El mismo buscó agregar demandas globales y reivindicaciones políticas de los sujetos y actores sociales a través de un nuevo régimen político compuesto por una estructura institucionalizada de partidos políticos (Lazarte 2005), articulada sobre una visión *eficientista* y *procedimental* de la democracia (García 2005). Este régimen tiende a debilitar la acción colectiva sindical como forma privilegiada del quehacer político boliviano y del ejercicio de la ciudadanía (Lavaud 1998). Fortalece en su lugar, el vínculo institucional sustentado en elecciones periódicas como principal forma de renovación de la política, en el parlamentarismo como el espacio de resolución de los conflictos y en los partidos políticos como el único y legítimo mediador entre el Estado y la sociedad (Mayorga 2001; 2004). Su fortalecimiento fue inversamente proporcional al debilitamiento del Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Los rasgos esenciales de las reformas de segunda generación en Bolivia estuvieron definidos por la búsqueda de la modernización del Estado, la ampliación del ámbito municipal, la descentralización de recursos y la promoción de la participación en el ámbito local que fueron las herramientas de lucha contra la pobreza y ampliación de la ciudadanía. Asimismo, un novedoso marco jurídico destinado a normar la participación social en los ámbitos locales, acompañó estas medidas. El mismo prometía mejorar el sistema democrático representativo incorporando elementos de democracia participativa y deliberativa, cediendo cierto disfrute de derechos políticos y ciudadanos básicos a través de la participación en este ámbito. Los pilares de la nueva política, plasmados en la Ley de Participación Popular (LPP), están definidos por: un reordenamiento administrativo del país con base en gobiernos municipales autónomos, la mejora de las condiciones de vida en el ámbito local a partir de la descentralización de recursos específicos de coparticipación tributaria, la creación de nuevos mecanismos de enlace entre el Estado y la sociedad civil (las Organizaciones Territoriales de Base OTB y los Comités de Vigilancia¹⁴), y la aplicación de

14 Estructuras representativas de las OTB, constituidas como sistemas de control de la gestión municipal, en especial de la inversión de los recursos de coparticipación.

mecanismos de planificación participativa en la estructuración de la demanda de los habitantes del municipio.

No obstante, la aplicación de éstas políticas sociales profundizó los procesos sociales que reproducen la fragmentación social y la pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 1999 la pobreza moderada era de 62 % y la pobreza extrema de 36,8 %. El año 2003, la pobreza moderada aumentó a 67,3 % y la pobreza extrema llegó a 39,7 %. En lo referente a la distribución de la riqueza en las ciudades, los ingresos medidos por el índice de Gini demuestran que estamos actualmente entre los países más desiguales del mundo. En Bolivia, el 10 % más pobre de la población sigue reduciendo su participación en el ingreso (en torno al 3 %), mientras que el 10 % más rico ha pasado a apropiarse del más del 42 %, doce veces por encima que los más pobres. Según un estudio de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas del gobierno boliviano (UDAPE), entre 1999 y 2001, los ingresos del 10 % más rico de los bolivianos aumentaron en 11 %, mientras que el 10 % más pobre perdió casi 20 % de su ingreso (Lora 2004). Estos datos evidencian que, luego de diez años de aplicación de las reformas descentralizadoras y de la participación local, los mecanismos creados no lograron corregir los principales desequilibrios distributivos causantes de la pobreza, tampoco lograron contrarrestar los efectos más desfavorables del proceso de urbanización de la pobreza, ni la profundización de las desigualdades sociales.

Los movimientos sociales producidos entre el 2000 y el 2006 señalaron precisamente los límites de ese modelo en tres niveles: a) el acrecentamiento de la precariedad social y laboral, b) la exclusión política de los sectores populares y c) la subordinación de los espacios democráticos a grupos económicos a través de la patrimonialización e instrumentalización de la democracia, limitando la expansión de la ciudadanía social esperada.

La principal característica de esta política social es que la base de los nuevos mecanismos de participación ciudadana promovidos por el Estado fue trasladada de los espacios laborales hacia los territoriales, En consecuencia, la condición ciudadana basada en el ejercicio de derechos laborales y sociales como mecanismo de acceso a la ciudadanía política a través de organizaciones sindicales agrarias y urbanas, fue desmantelada y sustituida desde el Estado por otra forma de ciudadanía. La misma se caracteriza por la escisión entre derechos económicos y políticos y por el traspaso de un sistema participativo organizado en función a lo laboral a otro sistema con base en lo territorial (que implica niveles municipales, distritales y barriales) desde donde se participa ya no en calidad de trabajador sino de vecino. Esta política, al

mismo tiempo que reconoce a las organizaciones de base territorial como los únicos interlocutores válidos ante el Estado, proscribire a las organizaciones laborales de la participación en niveles estatales, desconociéndolas como interlocutores válidos del Estado y como actores del desarrollo local.

La municipalización del país fue complementada con la aplicación de una política re-distributiva basada en la descentralización del 20 % del total de los recursos que ingresan por tributación al Estado. Estos recursos fueron distribuidos entre los 318 los municipios existentes en el país, de acuerdo a un criterio poblacional que secundariza el criterio de necesidades. Así, localidades más necesitadas pero con menos población, reciben proporcionalmente menos recursos que localidades con mayor población pero con menos necesidades. Estos ingresos, al depender de los impuestos recogidos por el Estado, constituyen montos variables, debido a que hasta el año 2005, en que se produce una reforma central en el régimen de impuestos de las empresas transnacionales que operan en el campo hidrocarburífero, estaban respaldados por una política impositiva injusta que gravaba la mayor parte de los impuestos al consumo y a la renta de las personas y la menor carga impositiva a las empresas privadas nacionales y transnacionales¹⁵.

Este 20 % de los recursos de coparticipación tributaria, dividido entre un número tan amplio de municipios, resulta absolutamente insuficiente frente al número de necesidades que éstos deben cubrir, entre las que están salud, servicios e infraestructura urbana. Los escasos recursos (ya sean propios, de coparticipación o préstamos) impiden a los municipios impulsar el desarrollo local. El problema radica en que los gastos de inversión necesarios para dinamizar la economía local y cumplir con las metas sociales, no pueden ser cubiertos únicamente con el total de ingresos municipales. Es por ello que los municipios recurren a obtener empréstitos de fuentes internas y externas, generando un proceso de endeudamiento de los municipios que es dramático¹⁶ (Ayo 2003: 127).

Los resultados en cuanto a mejoramiento cualitativo de las posibilidades de participación social en la planificación de los presupuestos locales, en la distribución de recursos y en el control social, fueron muy limitados. La Ley creó un sistema de

15 Hasta mediados del 2006, antes de la nueva política hidrocarburífera promulgada por Evo Morales, en Bolivia la mayor parte de los impuestos (IVA; ICE, IVA-IT, IT y RCIVA) provenían fundamentalmente de las contribuciones de los consumidores, trabajadores y ciudadanos, en un porcentaje del 74 %. Al contrario, las aportaciones al fisco de las empresas grandes y pequeñas (IUE y IEHD) sólo alcanzaban al 21 %, (**Boletín DESC de la APDHB**).

16 Actualmente la deuda municipal asciende a 447 millones de dólares (Ayo 2003: 127-129).

participación altamente restringido, centrado en los espacios locales. Esto limitó a las organizaciones sociales su capacidad de incidir en los niveles, estatales meso y centrales, logrando sólo reproducir la exclusión política de las organizaciones urbano-populares en lo local.

Este hecho fue vivido al interior de las organizaciones esencialmente como una dificultad permanente para integrar y hacer reconocer sus demandas en las instancias estatales y como la imposibilidad de decidir acerca de los aspectos centrales que hacen al desarrollo de la sociedad. A esto se suma la burocratización de la cosa pública y la influencia del clientelismo sobre las organizaciones de base, que configuran un escenario que desmotiva la participación de las organizaciones sociales en el ámbito local en la medida en que ven truncada la posibilidad de tomar decisiones autónomas. De esta manera, las principales funciones de su vida organizativa quedan en manos de las dirigencias vecinales ligadas a los partidos políticos a través de redes clientelares. Este elemento explica una de las causas centrales de la emergencia de los movimientos sociales producidos entre los años 2000 al 2006.

En términos generales, la calidad de la participación social está definida tanto por la calidad de las organizaciones de base en la tarea de agregar demandas y hacerlas escuchar por los diferentes niveles del Estado, como por su capacidad de ejercer derechos. No obstante, uno de los logros más notables del nuevo proceso de ciudadanización fue precisamente el debilitamiento y/o descomposición de las organizaciones sociales frente al Municipio, ya sea debido a divisiones internas causadas por luchas internas por acceder a recursos o por influencia de las redes clientelares con las que el municipio media su relación con las organizaciones, provocando el empobrecimiento del contenido, visión y calidad política de la participación local.

A esto debe agregarse la poca eficacia de los mecanismos de control social creados por la Ley de Participación Popular. Si bien uno de los aciertos fue el diseño de nuevos mecanismos de vigilancia social que daban atribuciones de control a las organizaciones sobre los recursos municipales, éstas nunca tuvieron atribuciones de fiscalización sobre los otros recursos que ingresan a los municipios y sobre fondos y donaciones extranjeras que son manejados a discreción por los partidos en las alcaldías. Tampoco pueden definir el destino de otros fondos públicos o participar en las decisiones sobre deudas que contraen los municipios. A lo anterior se suma el problema que los Comités de Vigilancia han sido absorbidos por las redes clientelares del Municipio, anulando su función de vigilancia ciudadana y el rol de control

social asignado a las organizaciones como parte de sus derechos ciudadanos (Arteaga Espósito 2005).

El obstáculo más grande identificado por las organizaciones barriales en su lucha por lograr mayores espacios de participación e integración de sus demandas en el Estado y los municipios es precisamente el accionar de los partidos políticos. El mismo se caracteriza por la especulación por la especulación de las necesidades de los barrios, la cooptación de los controles sociales a través del clientelismo, por compartir intereses con las empresas transnacionales y deslegitimar todo tipo de iniciativas locales. Al respecto presentamos la siguiente tabla comparativa que resume la percepción de las distintas organizaciones estudiadas respecto al accionar de los partidos políticos en el ámbito local.

Tabla 1. *Posición comparada del papel de los partidos políticos en la discriminación de servicios básicos en los barrios de los distritos estudiado*

Santa Cruz	Tarija	Potosí	Oruro	Cochabamba	La Paz	El Alto
Especulan con necesidades sentidas.	Especulan con necesidades sentidas.	Especulan con necesidades sentidas.	Especulan con necesidades sentidas.	Especulan con necesidades sentidas.	Especulan con necesidades sentidas.	Especulan con necesidades sentidas.
Control social responde a su lógica.	Control social responde a su lógica.	No intervienen en favor del consumidor	Control social responde a su lógica.	No apoyan iniciativas locales		No apoyan iniciativas locales
Cooperativas de servicios responden a sus intereses.			No intervienen en favor del consumidor	Favorecen a empresas extranjeras		Favorecen a empresas extranjeras
						No intervienen en favor del consumidor

Fuente: Arteaga, Espósito 2006.

Los partidos políticos, a partir de La Ley de Participación Popular, adquieren el monopolio de la representación social frente al Municipio y de la toma de sus decisiones políticas a través del control de los Concejos Municipales. Tal poder les permite el control político de los presupuestos locales, los mismos que usualmente son administrados bajo criterios estrictamente clientelares, premiando fidelidades políticas de las organizaciones, lo cual va en contra de un criterio social de priorización real de necesidades sociales.

La burocratización de la cosa pública es un fuerte componente de estas reformas sociales. Las mismas complejizaron tanto de las vías legales para el reconocimiento

de las demandas sociales como los mecanismos estatales de resolución de conflictos. Sobre todo en ámbitos municipales, se ha creado una densa red de mecanismos y procedimientos por los que debe cursar la demanda (Planes Operativos Anuales, Planes de Desarrollo Distrital PDD, Planes de Desarrollo Municipal). En este ámbito donde predomina el castellano y la jerga técnica como código de entendimiento, se tiene como resultado más procedimientos a cambio de menos participación.

Debe reconocerse que si bien las reformas municipalistas intentan retomar lo social como provisión y gestión de servicios en educación, salud y saneamiento básico mediante políticas sociales de combate a la pobreza, también dejan de lado las políticas de bienestar social (Farah 2006:6). Esto, sumado a las limitaciones mencionadas hace imposible que los municipios puedan cumplir con tareas de promoción económica y desarrollo local, siendo muy bajo el impacto real en la lucha contra la pobreza.

Esto explica, en parte, por qué los últimos diez años, pese a los esfuerzos institucionales, se han caracterizado precisamente por el incremento de la exclusión social, visible en la generalización de condiciones de habitabilidad precarias en los barrios urbano-populares, en la carencia de servicios básicos como electricidad, agua potable y alcantarillado, los cuales son insuficientes en cuanto a cobertura y, en caso de disfrutar de los mismos, su calidad no es la deseada o no responde al costo de conexión y/o la tarifa mensual.

Las guerras del agua del año 2000 en Cochabamba y la del 2005 en El Alto, (movimientos sociales agregados esencialmente sobre una base ya no salarial sino territorial) expresaron precisamente el rechazo a la “privatización del bien común”. La misma mercantilizó y desestatalizó los servicios básicos, excluyendo a grandes grupos sociales de su acceso. Los servicios básicos se convirtieron, a través de la Ley de municipalidades que autorizó su concesión a empresas transnacionales, en nuevos espacios para la inversión privada (Farah 2006), creando un nuevo tipo de “ciudadano consumidor,” potenciando al mismo tiempo nuevas formas “ciudadanía segmentada” donde unos acceden a servicios a través el mercado y otros quedan excluidos (Ziccardi 2006:16).

Esta desigualdad social en el acceso a bienes y servicios¹⁷ se expresa cada vez más territorialmente en la conformación de barrios peri-urbanos claramente diferenciados por la población que los habita, por el equipamiento urbano, el modo de vida

17 Las guerras del agua vividas en Cochabamba el año 2000 y en El Alto el 2005 pusieron en evidencia la enorme desigualdad existente en la distribución de servicios básicos elementales como el agua

y por la baja inversión pública de los municipios¹⁸, que describen un “déficit de inclusividad y fracturas de ciudadanía” (Brugué, Goma y Subirats 2002). Los mismos que Saltalamacchia (1993) denomina enclaves urbanos, se caracterizan, muchos de ellos, por la proliferación de *prácticas de refugio*, consistentes en el repliegue de los sectores más castigados hacia los grupos primarios de sociabilidad (barrio, familia, iglesia, pandillas, redes clientelares) como respuesta a la destrucción de las principales formas de encuentro y solidaridad. Se verifica asimismo la tendencia a la construcción de identidades locales que hacen que las demandas ciudadanas se refugien en los elementos institucionales más próximos.

A ésto se suma la presencia de factores de exclusión étnico culturales de larga data como elementos clave que impiden a los grupos de emigrantes descampesinizados indígenas, desafiados de sus organizaciones naturales, integrarse a los mecanismos urbanos de participación y ejercer ciertos derechos ciudadanos y sociales profundizando las condiciones de pobreza ya existente y/o creando otras nuevas¹⁹.

El difícil escenario de la ciudadanía local. Clientelismo y cooptación de las organizaciones vecinales

El factor más corrosivo en el debilitamiento y desestructuración de las organizaciones urbanas locales y vecinales es precisamente el fortalecimiento de las redes clientelares. Si bien el clientelismo político²⁰ siempre formó parte del carácter de las relaciones entre el Estado y las organizaciones sociales (Rivera 1993), a partir de las reformas neoliberales se extiende y fortalece convirtiéndose en el principal mecanismo de relación entre los Municipios y las organizaciones sociales de base

18 A pesar de la institucionalización de la Ley de Participación Popular que municipalizó los servicios públicos para mejorar las condiciones de vida, la gestión urbana no transformó las condiciones de inequidad debido a una débil capacidad de gestión por parte de las alcaldías y a la imposición de una política mercantilista de los servicios básicos, propiciada por las políticas neoliberales. La misma que obligó a entregar en concesión la distribución y comercialización del agua a empresas transnacionales, incrementando las tarifas y precios de conexión, excluyendo así de su acceso a vastos sectores urbanos migrantes.

19 La incidencia de pobreza sobre las poblaciones indígenas en Bolivia es de 64 % contra 48 % que no lo son.

20 El clientelismo político puede ser definido como un mecanismo de dominación política aplicado a través de un conjunto de prácticas asimétricas fundadas en una relación cara a cara, contactos personales y formas de interacción social. Se sostienen en una red de intercambios desiguales pero mutuamente beneficiosos realizados entre partidos, un conjunto de intermediarios políticos y las organizaciones urbanas. Su finalidad es asegurar el control de la conflictividad en ámbitos locales, así como la creación de lealtades políticas a partir de la incorporación, en forma subordinada, de los sectores marginales al sistema político. Ver: Farinetti, 2000 y Auyero 2003.

(Arteaga y Espósito 2006). El aumento de la migración, la pobreza, el desempleo y la precariedad de las condiciones de vida en las ciudades, actúan como condicionantes que hacen vulnerables, y muchas veces dependientes a los sectores populares de los partidos políticos, quienes actualmente operan como los únicos facilitadores para el acceso a recursos materiales y servicios municipales (Quisbert Quispe 2003).

Las reformas institucionales fueron también un factor de fortalecimiento del clientelismo en la medida en que vigorizaron a los partidos políticos -al mismo tiempo que debilitaban las organizaciones de la sociedad-, otorgándoles poderes casi plenipotenciarios en manejo y administración de importantes recursos. Los mismos son utilizados en la práctica, prioritariamente para el mantenimiento y reproducción de la política y de nuevos poderes y cacicazgos locales.

Estas redes operan desde los municipios y actúan a través de la cooptación de los dirigentes de las organizaciones vecinales con el intercambio de empleos en el sector público a cambio de lealtades políticas. En un contexto caracterizado por el crecimiento de los índices de desempleo y precarización del empleo, la oferta de fuentes de trabajo en la función pública se convierte en un gran movilizador político y fuente de poderosas fidelidades que convierten a los municipios en un botín de los partidos políticos alentando el uso discrecional de los recursos.

El poder de los vínculos clientelares radica precisamente en que se sustentan sobre un tipo de “fidelidad personalizada”, “una relación cara a cara” facilitada por la cercanía que posibilitan las relaciones locales. Los espacios preferidos de consolidación del vínculo clientelar no son necesariamente los espacios organizativos, sino otros, como reuniones sociales (Revilla 2004) convocadas por alcaldes y autoridades municipales y las fiestas patronales o aniversarios barriales²¹. En estos ámbitos, donde la cooptación dirigencial adquiere una connotación ritual, estableciéndose un tipo de compromisos que encubren el pragmatismo de la relación clientelar, creando lealtades muy fuertes y difíciles de desmontar.

En términos ideológicos, el clientelismo se legitima a través de la instrumentalización de una ideología desarrollista que apela a la “modernización” de los barrios: el “obrismo”. El mismo puede definirse como parte de una lógica paternalista que alienta representaciones sociales de “progreso urbano” y una visión de desarrollo que

21 Si bien las fiestas son espacios de fortalecimiento de la cohesión e identidades barriales, también constituyen espacios donde se expresa la conflictividad política del barrio y el terreno en el que los políticos e intermediarios organizan sus redes y compromisos políticos.

promociona el asfalto, el cemento, las grandes construcciones y la jardinería en los centros urbanos, por encima del abastecimiento de las necesidades básicas urbanas como alcantarillado, el agua potable y la salud en los barrios periféricos. El “obrismo” se sustenta en un manejo ideológico que presenta las obras como favores del Alcalde hacia la población, reafirmando el espejismo del desarrollo urbano (Arteaga y Espósito 2006). El resultado concomitante es la consolidación de ciertos liderazgos políticos locales que son los que fundamentalmente han instrumentalizado y alentado el “obrismo”.

Asimismo, la incrustación del clientelismo en las relaciones locales obstruye las posibilidades de autonomía política de las organizaciones, entendida como la capacidad de generar un proyecto político propio, independiente del Estado, o de adherirse libremente a una corriente política. La incorporación de los sectores populares en la política se da en condiciones de desigualdad económica, cultural y social. Tanto los dirigentes de las organizaciones como los miembros de base son concebidos como un mercado electoral al que se puede acceder a través de la manipulación de sus necesidades sociales básicas, el hecho de la subsistencia condiciona el voto, institucionalizando un circuito de intercambios entre ciudadanos desiguales que (García 2005) funcionariza la pobreza potenciando el uso patrimonial de recursos y presupuestos locales.

El debilitamiento de los vínculos orgánicos es la principal consecuencia del establecimiento de este tipo de prácticas que vuelve a las organizaciones incapaces de accionar sobre el conflicto central de la pobreza, que es el conflicto distributivo tanto a nivel local como nacional. Las organizaciones sociales encuentran su límite en la vulnerabilidad de las dirigencias vecinales frente al clientelismo debido fundamentalmente a tres razones: a) la precariedad de las condiciones de vida que diluye el peso de las adhesiones colectivas y los compromisos políticos haciendo aflorar lo más básico del individualismo potenciado por el modelo neoliberal; b) la falta de una perspectiva política de largo plazo de las organizaciones que se desprenda de la inmediatez de sus necesidades presentándose como horizonte alternativo de creencias al orden actual; y c) la debilidad interna de las organizaciones que permite prácticas inconsultas y discrecionales de las dirigencias. La “sujeción por el estómago”, es la gran limitación de las organizaciones para construir espacios de autonomía política en el escenario local, atrapadas como están, en los límites de la precariedad de sus condiciones de vida.

Reconstrucción de la ciudadanía y desafíos hacia el futuro

Este panorama nos lleva a repensar el tema de la ciudadanía: ¿cómo es posible ejercer una ciudadanía activa en sociedades donde predominan diversas formas de exclusión, desigualdad social y clientelización de las relaciones con lo público, donde las organizaciones laborales han sido totalmente desestructuradas y las organizaciones locales cooptadas por redes clientelares? Ziccardi (2001) plantea que en América Latina la construcción de la ciudadanía, luego de la crisis del Estado de bienestar y de la erosión de las formas ciudadanas que lo sustentaron, puede reconstruirse en el ámbito de las ciudades, en particular en el ámbito local, donde los individuos acceden a los bienes y servicios que conforman la dimensión social de la ciudadanía.

En Bolivia se puede mencionar logros únicamente en relación a la ampliación del papel de los gobiernos locales, con las limitaciones mencionadas. En cambio en lo referente a la participación de la ciudadanía, los logros son mínimos, aunque actualmente está en proceso la apertura de mayores espacios de participación social tales como la Constituyente y modalidades de referéndum. Precisamente fue la acción y luchas de los movimientos sociales durante los últimos seis años que se lograron perforar la impermeabilidad del Estado neoliberal. En cambio sobre la construcción y expansión de la dimensión social de la ciudadanía pensamos que existe más bien un retroceso en relación a lo logrado en el Estado corporativo. Podríamos incluso hablar de un proceso de desc ciudadanización, en particular en lo que hace a la ciudadanía social, fruto de la disociación de lo que, fue el sustento de la ciudadanía: la relación entre ciudadanos y derechos (Farah 2006).

Las formas de ciudadanía fragmentada ya existentes han sido profundizadas por los procesos de reproletarización. Los mismos separaron el trabajo de los derechos sociales y, por la forma particular en que se dio la territorialización de la participación subordinada a los partidos y al clientelismo²², en lugar de conducir a la expansión de la ciudadanía, han generado la construcción de una *ciudadanía restringida* (Ziccardi 2006:10). Esto implica la presencia de fracturas en el tejido social y la ruptura de ciertas coordenadas básicas de integración (Brugué, Goma y Subirats 2002:4) que impiden a la población, incorporar sus demandas en el ámbito público y negociar e influir en la distribución de recursos nacionales y locales a través de la

22 La fortaleza y dificultad de desmontar las redes clientelares radica precisamente en la proximidad de las relaciones locales, que facilitan, padrinazgos, compadrazgos, y todo tipo de vínculos simbólicos que son la base de las fidelidades de la clientela política hacia los dirigentes, caciques o punteros (Auyero 2003).

participación en el ámbito público, acentuándose los procesos de exclusión.

El caso boliviano demuestra las limitaciones de los modelos creados para superar la pobreza y la exclusión social a través de la creación de novedosos mecanismos de participación local y la redistribución de algunos recursos. Al mismo tiempo, se promueven medidas que destruyen la ciudadanía social y limitan la ciudadanía política facilitando el terreno para que los espacios locales creados para la participación sean utilizados, ya sea para la reproducción y fortalecimiento de prácticas clientelares o para la construcción de poderes y cacicazgos locales en desmedro del control y la participación social. En esa medida, uno de los problemas que es indispensable salvar para superar la pobreza o, por lo menos disminuir sus efectos, es la reasociación de derechos económicos y políticos como única vía para la reconstrucción de los ciudadanos es decir, habitantes de las ciudades con derechos individuales, económicos, sociales y políticos.

Si se entiende la base de la ciudadanía como el derecho a gozar de un mínimo de bienestar económico y seguridad, a participar del patrimonio social, núcleo de bienestar proporcionado por un conjunto de derechos socioeconómicos que conectan con instituciones económicas, legales y sociales tales como el trabajo, el sistema educativo, la salud, y seguridad social, se tiene que estas instituciones de la ciudadanía social están asociadas principalmente con las de *redistribución del ingreso* monetario y no monetario: recursos productivos, (tierra, capitales, tecnología) conocimiento, posición económica y política. Atañen esencialmente al vínculo Estado economía, lo que remata en relaciones de clases, en tanto que únicamente a través de la ciudadanía social es posible ponerle límites al capital. Por ello la ciudadanía social está en permanente ajuste dependiendo de la correlación de las fuerzas sociales y de la fortaleza de las organizaciones sociales (Farah 2006).

En la medida en que Bolivia vive un escenario de ajuste de sus fuerzas sociales el desafío hacia el futuro, si se busca crear una ciudadanía más inclusiva con verdaderas capacidades de participación social y poder de decisión que sirva de instrumento para revertir los procesos de exclusión y empobrecimiento social, es potenciar una nueva articulación entre el Estado, economía y sociedad, mediada por la ciudadanía social, sustentada en la reorganización productiva del trabajo (Farah 2006). En este sentido, algunas tareas pendientes hacia el futuro son:

- Desindividualizar la relación entre trabajo y capital para evitar la fijación del salario como transacción entre “individuos libres”.

- Trascender la ciudadanía individual y lograr el reconocimiento de ciudadanía colectiva.
- Recrear la relación entre trabajo y derechos sociales.
- Crear nuevos vínculos entre el trabajo y el espacio público.
- Re-estatalización de servicios sociales con el fin de revertir la segmentación de la sociedad y la idea de ciudadano como consumidor de servicios.
- Potenciar el fortalecimiento organizativo que impulse un nuevo sistema re-distributivo.

El nuevo escenario, producto de las luchas sociales, debe reflejarse en la reestructuración de una nueva ciudadanía social, lo cual exige una mayor participación del Estado, la creación de empleo y de un nuevo régimen social. La experiencia boliviana ha demostrado que, para combatir la pobreza, las reformas políticas son insuficientes sin reformas económicas, de la misma forma que la ciudadanía política es imposible sin una ciudadanía social.

Bibliografía

Alvarez, Sonia

2006 *Trabajo y producción de la Pobreza en América Latina y el Caribe*, CLACSO, Buenos Aires.

Alonso, Luis Enrique

s/f "Trabajo y ciudadanía. Estudios sobre la crisis de la sociedad salarial" en <<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/gustavo/traductor/index.php>> , CLACSO, Buenos Aires.

Arze, Carlos

2000 *Crisis del sindicalismo boliviano. Consideraciones sobre sus determinantes materiales y su ideología*, CEDLA, La Paz.

Arteaga, Walter y Carla Espósito

2005 *Movimientos Sociales Urbano-Populares, Elementos para contextualizar sus luchas contra la exclusión*. UNITAS Documento Interno, La Paz.

2006 "Movimientos Sociales Urbano-Populares en Bolivia: Una lucha contra la exclusión social, económica y política". Madrid Fundación Carolina, en <http://www.fundacioncarolina.es/NR/rdonlyres/81F8F58F-10E3-449A-B2C9-2629C5DDDF48A/0/AvanceInvestigación4UNITAS.pdf>.

Auyero, Javier

s/f “Desde el punto de vista del cliente. Repensando el tropo del clientelismo político”, en *Apuntes de investigación*, N° 2/3 en [http://www.apuntes-cecyp.org/numero 2y3.html](http://www.apuntes-cecyp.org/numero%202y3.html).

Ayo, Diego

2003 *Municipalismo y Participación Popular*, Muela del Diablo, La Paz.

Brugué Q, R. Goma y Joan Subirats

2002 “De la pobreza a la exclusión social. Nuevos retos para las políticas públicas”, en *Revista Internacional de Sociología*, Tercera época, No 33, septiembre-diciembre.

Castel, Robert

1991 “La dinámica de los procesos de marginalización: de la vulnerabilidad a la exclusión”, en *El espacio institucional*. Lugar Editorial, Buenos Aires.

1997 *La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del trabajo asalariado*, Paidós, Buenos Aires.

CEDLA

2003 “¿Un respiro político hasta 2007? Realidades y apariencia del Plan Mesa” en *Documento de Coyuntura*, N° 6, La Paz.

Escobar de Pabón, Silvia

2003 “Trabajo y género en Bolivia: 1992-2001” en: Berger, Silvia (Ed.).

2005 “Globalización, Trabajo, y Pobreza: el caso de Bolivia”, en *Trabajo y producción de la Pobreza en América Latina y el caribe*. CLACSO, Buenos Aires.

Farah, Ivonne

2006 “Pensarnos iguales en un nuevo pacto redistributivo”. En publicación *Umbral* 14, CIDES UMSA, Postgrado de ciencias del Desarrollo, Universidad Mayor de San Andrés. Bolivia, septiembre 2006 en [http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/libros/boliviarcides/ umbral14.pdf](http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/libros/boliviarcides/umbral14.pdf).

Farinetti, Marina, s/f

“Clientelismo y protesta: cuando los clientes se rebelan” en *Apuntes de investigación*, N° 2/3 en [http://www.apuntes-cecyp.org/numero 2y3.html](http://www.apuntes-cecyp.org/numero%202y3.html).

García Linera, Álvaro

1999 *Reproletarización. Nueva clase obrera y desarrollo del capital en Bolivia (1952 - 1998)*, Comuna, La Paz.

2001 *Tiempos de Rebelión*, Comuna, La Paz.

2005 “Los retos de la democracia en Bolivia” en *Democracia en Bolivia. Cinco análisis temáticos del segundo estudio nacional sobre democracia y valores democráticos, Cuadernos de Análisis e investigación*, Corte Nacional Electoral, La Paz.

Lavaud, Jean Pierre

1998 *El embrollo boliviano. Turbulencias sociales y desplazamientos políticos 1952-1982*, IFEA-CESU-Hisbo, La Paz.

Lazarte, Jorge

2005 *Entre los espectros del pasado y las incertidumbres de futuro. Política y democracia en Bolivia a principios del siglo XX*, Plural Editores/ ILDIS, La Paz.

Lora, Miguel

2004 “Bolivia, el país más desigual del mundo”, en *Revista electrónica Rebelión*, 9 de Mayo.

Mayorga, René A.

2001 “Presidencialismo parlamentarizado y gobiernos de coalición en Bolivia” en Lazarte Jorge *Tipos de presidencialismo y coaliciones de gobierno en América Latina*.

2004 “La crisis del sistema de partidos políticos: causas y consecuencias. Caso Bolivia”, en *Partidos políticos en la Región Andina. Entre la crisis y el cambio*, Ágora democrática, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Lima.

Revilla, Carlos

2003 *Informe final investigación etnográfica Cultura y política*, Documento Interno N° 35, Programa Desarrollo del Poder Local, UNITAS, La Paz.

Rivera, Silvia

1993 *Violencias Encubiertas*, CIPCA, La Paz.

Rivero, María del Carmen

2006 *El poder de las luchas sociales: 2003 el quiebre del discurso neoliberal*, CEDLA, La Paz.

Sandoval, Godofredo

1999 “Rasgos del proceso de urbanización de las ciudades en Bolivia” en *Sociólogos en el umbral del siglo XXI*, II Congreso Nacional de Sociología, Colegio de Sociólogos. Plural Editores, La Paz.

Quisbert Quispe, Máximo

2003 FEJUVE El Alto, 1990 -1998. Dilemas del clientelismo colectivo en un mercado político en expansión, en *Chukiyawu: Cuadernos de Investigación Aruwiwiri*, N° 1, Taller de Historia Oral Andina, La Paz.

Satlamacchia, Homero

1993 “Barbarie capitalista y prácticas de refugio”, Ponencia presentada en el II encuentro Internacional de “Movimientos y desigualdades”. 17 y 18 de noviembre de 1993, México D.F.

Torrico, Escarley

2004 “La participación popular en Bolivia. A pesar de la Ley” en: *Medio Ambiente y Urbanización*, Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, América Latina, Año 20, N° 60, Buenos Aires.

Zavaleta, René

1984 *El poder dual*, Siglo XXI, México D.F.

1983 “Forma clase y forma multitud en el proletariado minero en Bolivia” en: *Bolivia Hoy*. Siglo XXI, México D.F.

Ziccardi, Alicia

2001 “Las ciudades y la cuestión social” en *Pobreza desigualdad social y ciudadana: límites de las políticas sociales en América Latina*. Buenos Aires. CLACSO, Buenos Aires.

2006 “Pobreza urbana, exclusión desigualdad y políticas sociales en las sociedades complejas”, ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano de Ciencias Políticas, 4 al 6 de septiembre de 2006 Campinas.



Metropolitanismo, globalización y migración indígena en las ciudades de México

Maya Lorena Pérez Ruiz*

Resumen

Este artículo reflexiona sobre la presencia de los indígenas en las ciudades de México, y señala algunas de las características visibles de su situación cultural, económica, social e identitaria. Se pretende demostrar que la presencia de la diversidad cultural en las ciudades, así como las relaciones interétnicas que entablan grupos culturales diferentes en condiciones de asimetría y desigualdad, no es un fenómeno nuevo producido por la globalización contemporánea, aunque tal condición sí genera ciertas características específicas en esos procesos. Palabras calves: metropolitanismo, ciudades mundiales, migración, indígenas en las ciudades, jóvenes, identidades sociales y cambio cultural.

México país diverso

México se ha caracterizado a lo largo de su historia por la presencia de diferentes grupos sociales, diversos en cultura, identidades y particularidades históricas. De esta forma, sus movimientos de población así como su impacto en las culturas e identidades diversas, no constituyen un fenómeno nuevo vinculado sólo a la modernidad y a la globalización; así como tampoco el intenso contacto entre culturas diversas es un proceso exclusivo de la posmodernidad que algunos dicen que vivimos.

Así por ejemplo, la región en la que está ubicada la Ciudad de México se ha

* Investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

caracterizado por ser desde épocas remotas una zona de arribo y encuentro entre poblaciones con orígenes, culturas, lenguas e identidades diversas y entre ellas se han desarrollado relaciones complejas, no siempre asimétricas ni igualitarias. Diversas fuentes arqueológicas e históricas indican que la Cuenca de México desde la época formativa durante la fundación de Tenochtitlán (en 1324) y hasta el momento de la Conquista (o sea desde 2500 a.c. hasta 1521 d.c., aproximadamente) estuvo abierta a grupos de todas las regiones mesoamericanas, ya fuera por cuestiones relacionadas con la presión demográfica, el intercambio, el tributo, la migración, las invasiones y el dominio, entre otras (Serra Puche, 1989)¹. De manera similar a lo que sucede en nuestros días las poblaciones que entraron en contacto diferían la mayoría de las veces en grados de desarrollo, formas de organización y culturas, aunque poco puede saberse aún sobre la manera particular en la que dirimieron dichas diferencias culturales, y si estas fueron empleadas para justificar las relaciones de conquista y dominación de unas poblaciones sobre otras.

Es importante señalar, entonces, que la tendencia a la convivencia, a la confrontación y a la mezcla entre culturas e identidades diversas tampoco es un fenómeno nuevo. En los tiempos prehispánicos —igual que hoy— estos procesos iban aparejados con la capacidad de expansión política, militar y económica de una potencia imperial: en aquella época se asociaba al poderío de los mexicas cuya influencia rebasaba los límites de la cuenca de México y llegaba a regiones tan distantes como el actual estado de Oaxaca o la lejana Guatemala. Hoy, la expansión de los capitales, si bien se supone que carecen de nacionalidad y de arraigo, en los hechos están anclados y protegidos por las naciones más poderosas del orbe, que construyen bloques de poder para confrontarse y competir con otros bloques y países para lograr la expansión que necesitan. Así que los beneficiarios de la globalización contemporánea sí tienen rostro, nacionalidad y lengua, además de que poseen una cultura y un cierto estilo de consumo de bienes culturales.

Puede decirse, entonces, que Tenochtitlán es un antecedente remoto que prefiguraba lo que son hoy las ciudades mundiales o metrópolis globales, cuya expansión se ha potenciado por la revolución informática, la masividad de los medios de comunicación, y la supuesta desnacionalización y desterritorialización de los capitales;

1 Para dicha autora, los mexicas constituyen un ejemplo típico de la tendencia a mezclarse presente en esa época, ya que no se establecieron sólo en Tenochtitlán sino también en Tlatelolco, Culhuacan, Acolhuacan, Xochimilco y Azcapotzalco además de que, junto a los huitznahuacas, fueron a establecerse a Coatlinchan y a Tetzco. En contrapartida, en Tenochtitlán había dos o tres barrios otomíes, grupos de xochimilcas, y más tarde, huexotzincas. " (Serra Puche, 1989, pp. 31).

condiciones que facilitan la flexibilidad de las fronteras de los estados nacionales, los procesos de expansión de los capitales, las industrias culturales y la mano de obra. Ciudades mundiales que son centros de poder y hegemonía; urbes que reúnen y confrontan una multitud de grupos con culturas e identidades diferentes; que propician, inducen e imponen un predominio económico, político y cultural; y que, por esa vía, se proponen conseguir la homogeneización o por lo menos la subordinación de las diferentes identidades culturales.

Es importante señalar que en el México prehispánico, igual que en el mundo europeo de la antigüedad y como sucede hoy en la globalización contemporánea, en estas urbes cosmopolitas y hegemónicas se concentran los poderes y los liderazgos que controlan los procesos de expansión de los sistemas económicos que crearon estas urbes —con sus modelos societarios, culturales y civilizatorios— que generalmente propician y promueven fuertes tendencia a la homogeneización cultural, o por lo menos al intercambio y a la intensa mezcla cultural. Proceso éste último que se ha dado en llamar hibridación cultural². Junto a tales tendencias, sin embargo, también se han generado procesos de resistencia y de apropiación selectiva de elementos culturales, que contribuyen a fortalecer y a mantener vigentes las identidades locales subordinadas.

De esta manera tiene también una larga historia la tensión entre la tendencia a la uniformidad y homogeneidad cultural propiciada desde las potencias hegemónicas y la tendencia que, a veces como respuesta, fortalece la diversidad sobre la base de la resistencia, de la resignificación de bienes culturales y/o de la adaptación y renovación de las identidades locales.

Para continuar con el ejemplo, cabe decir que en la actualidad la Ciudad de México como capital del país sigue siendo un centro hegemónico de poder político, económico y cultural, sólo que inmerso en las redes de la globalización y la mundialización contemporáneas, en las que ocupa un lugar subordinado frente a otros centro hegemónicos mundiales. Gilberto Giménez (2003) en su revisión sobre el metropolitano global nos señala que en el marco de las ciudades mundiales — es

2 Si bien la palabra "híbrido" tiene diversas genealogías y usos —como la biología y la lingüística— en el campo de la cultura se refiere a la idea de mezcla, de ocupar espacios intersticiales y de tener o asumir varias identidades. Es básicamente una noción descriptiva, que no explica por qué sucede un cambio específico ni los procesos mediante los cuales los sujetos asumen o rechazan un cambio en su cultura o su identidad. En México Néstor García Canclini ha promovido su empleo en zonas urbanas. Por el contrario, Gilberto Giménez cuestiona profundamente esta noción. Los argumentos pueden seguirse en la bibliografía de estos autores citada al final de este trabajo.

decir de los centros urbanos donde se concentran las corporaciones transnacionales, los organismos internacionales, juntamente con las mayores compañías de servicios especializados que las sirven (como los bancos, bufetes, los medios de información y comunicación masivos así como las empresas de publicidad)— la Ciudad de México ocupa un lugar beta respecto de las ciudades alfa como Nueva York, Chicago, Londres y Tokio³. Como ciudad mundial, aunque con un rango menor, la Ciudad de México funciona también como superficie de contacto (interface) entre lo global y lo local, de modo que desde su posición en el sistema jerarquizado de ciudades mundiales propio de la globalización ésta sirve para retransmitir los impulsos de la globalización a los centros nacionales y provinciales que constituyen su hinterland local (Giménez, 2003). De esta forma —y como la globalización incluye la dimensión cultural— desde la Ciudad de México se expande el carácter polarizado, desigual y excluyente de la diversidad cultural que acompaña dicha globalización.

Con apego a la memoria histórica, pero también sobre la base de reconocer las particularidades de los procesos actuales, vale decir, entonces, que lo que marca el carácter particular de las migraciones contemporáneas —así como de las relaciones interculturales que las acompañan— es la especificidad con la que los agentes hegemónicos de la globalización actual organizan la división social del trabajo, des-territorializan las relaciones sociales y los flujos de capitales, provocan e inducen los procesos migratorios e intentan producir los cambios culturales. Procesos que a su vez, se sustentan en determinadas concepciones del desarrollo y de la civilización con las cuales las metrópolis hegemónicas, y sus agentes, explican y organizan simbólicamente las diferencias sociales y culturales entre los pueblos y países que entran en contacto, y se proyecta y justifica la mundialización de un solo tipo de cultura. De allí la importancia de atender las particularidades culturales de los migrantes y los grupos culturales que entran en contacto, sus posiciones sociales, su inserción laboral, su toma de decisiones así como las subjetividades desde las cuales se enfrentan tales procesos, y que están asociadas, entre otros, con factores de organización social, edad y género⁴.

3 Giménez (2003) basándose en Friedman, 1996, Sassen, 1991, Jhonson, Taylor y Eatts, 2000, considera que las llamadas ciudades mundiales son los soportes o puntos nodales de la maraña de redes supraterritoriales que definen la globalización, y que son las que en conjunto conforman un sistema jerarquizado de cobertura global. Este sistema de ciudades mundiales, cada una de las cuales se conectan reticularmente con los demás centros urbanos nacionales o regionales que constituyen su hinterland es lo que Giménez —basándose en Knox, 2000) llama metropolitanismo global.

4 Cabe aclarar que también hablo de metrópolis o países hegemónicos ya que pese a la desnacionalización y la desterritorialización de las redes y flujos de capitales, mano de obra y cultura en la

La población indígena en México y su migración a las ciudades

En la actualidad la población indígena en México ha ido creciendo en números absolutos, ya que en 1930 había 2.4 millones de hablantes de lenguas indígenas mayores de cinco años, mientras que en el año 2000 la cifra aumentó a poco más de 6 millones (6 044 547); lo cual significa que los indígenas representan el 7 % respecto 84.7 millones de personas de ese rango de población que habitan el país. De ellos habitan en zonas rurales 3.6 millones, mientras que en las urbanas lo hacen 2.4 millones⁵.

Entre los indígenas de México los jóvenes son el sector generacional mayoritario ya que por cada cien hablantes de lenguas indígenas (HLI) 29 son jóvenes de entre los 15 y los 29 años⁶. De esta forma en el país existen poco más de 1 millón 700 mil jóvenes indígenas (1 752 905 de HLI mayores de 5 años). De ellos alrededor de 1 millón (el 28.1 % de 3.6 millones) viven en áreas rurales y poco más de 700 000 (el 29.8 % de 2.4 millones) viven en zonas urbanas, es decir en localidades mayores de 2 500 habitantes⁷. Esta proporción es concordante con la tendencia nacional de población que, según el censo del año 2000, dejó de ser país con una gran proporción de niños (de entre 0 y 15 años) y se convirtió en un país de jóvenes (de entre 15 y 29 años). Dicho sector casi se duplicó de 1970 a 1990 ya que pasó de 12.3 millones a 23.9 millones y, en el año 2000 alcanzó la cifra de 27.2 millones, que significan el 28.5 % del total de la población nacional, estimada en 97.5 millones de personas. Se calcula que para el año 2010 la cantidad de jóvenes será de más de 30 millones, época a partir del cual se espera que disminuya el volumen de esta población⁸.

La diversidad cultural vigente en el país se expresa en la existencia de más de 90 lenguas y dialectos que están relacionado con formas distintas de organización social y de cultural. Las lenguas indígenas predominantes son el nahuatl (1.4 millones de hablantes), el maya (800 mil), el mixteco (438) y el zapoteco (422)⁹.

globalización, estoy de acuerdo con los autores que señalan la importancia de los estados nacionales como el tipo societario específico con el cual interactúan los agentes de la globalización, y que pueden impulsar o inhibir dicho proceso. Un interesante ensayo al respecto lo presenta Garretón (2002).

5 Valdés y Menéndez (1987) e INEGI y el Instituto Nacional de las Mujeres 2002.

6 Los niños (de entre 5 y 14 años) son 24 por cada cien personas, los mayores de entre 30 y 40 son 21, los de 45 y 59 son 14, y los de 60 años y más son apenas 12 por cada 100 personas HLI Ver: INEGI, 2002, pp. 419 y 424)

7 Ver: INEGI, 2002, Pp. 420 y 425

8 Cifras aportadas por el INEGI en sus publicaciones *Los jóvenes en México y Mujeres y hombres 2002*, publicadas en el año 2000 y 2002, respectivamente.

9 Entre las lenguas que tienen más de 200 mil hablantes están el tzotzil, el otomí, el tzeltal, el totonaca

La movilidad de la población, junto a la incidencia del sistema educativo y de los medios de comunicación, han influido para que los indígenas sean cada vez más bilingües y hasta trilingües: además de su lengua y el español están aprendiendo el inglés y hasta el japonés, por aquello de que algunos perciben a Japón como la potencia del futuro. No obstante, todavía en México hay alrededor de un millón de personas, hablantes de lenguas indígenas, que es monolingüe (el 16.9 % del total de HLI mayores de 5 años) y de ellos, como puede suponerse, la mayor parte corresponde a mujeres: es decir 633 mil (el 21.3 %), son mujeres y 369 mil son hombres (el 12.4 %) ¹⁰. Las proporciones de la población monolingüe varían según se trate de población que habita zonas urbanas o rurales, si se trata de hombres o mujeres y si tienen acceso a la educación escolarizada. Las entidades federativas donde se concentra el mayor número de monolingües son: Chiapas (296 mil), Oaxaca (219 mil), Guerrero (125 mil), Veracruz (78 mil) y Puebla (76 mil) ¹¹. Tal situación habla de que ciertamente en esas entidades existen regiones donde es posible una menor interacción entre población indígena y de habla española, pero también indica que esas regiones persisten condiciones de mayor exclusión de los índices de bienestar social, entre ellos el de acceso a la educación. En localidades rurales el 29.4 % de las mujeres indígenas no habla español, mientras que en las áreas urbanas, donde deben interactuar permanentemente con población no indígena, el porcentaje se reduce a 9.4 %. En cuanto al alfabetismo, el 56 % de las mujeres hablantes de lenguas indígenas saben leer y escribir, contra el 76.7 % de los hombres que también lo hacen. Como es de suponerse, en las áreas rurales la imposibilidad de acceder a la educación se acentúa, así que el porcentaje de mujeres indígenas alfabetas es de apenas el 48.9 %, mientras que en las zonas urbanas aumenta al 66.7 %. En contraste, los hombres registran tasas de alfabetismo superior al de las mujeres, ya que son del 71.3 % en áreas rurales y del 83.6 % en áreas urbanas ¹².

y el mazateco; entre las que cuentan con más de 100 están el chol, el huasteco, el mazahua, el chinanteco, el purépecha y el mixe. Las que tienen menos de 10 mil hablantes son el tepehua, el kanjobal, el pame y el mame (INEGI, 2002).

10 Las entidades federativas donde se concentra el mayor número de monolingües en general se corresponden con aquellas que tienen mayor cantidad de población indígena, por lo que se concentran en Chiapas (296 mil monolingües), Oaxaca (219 mil), Guerrero (125 mil), Veracruz (78 mil) y Puebla (76 mil). Yucatán cuya población HLI mayor de 5 años representa el 37.3 % del total de su población mayor de 5 años, es la excepción, ya que sus tasas de monolingüismo son de 7 % para los hombres y de 10.5 % para las mujeres (INEGI, 2002, p. 430)

11 Yucatán cuya población HLI mayor de 5 años representa el 37.3 % del total de su población mayor de 5 años, es la excepción, ya que sus tasas de monolingüismo son de 7 % para los hombres y de 10.5 % para las mujeres (INEGI, 2002, p. 430)

12 INEGI, 2002: pp. 428, 429, 430, 435

Los datos globales sobre alfabetismo y la escolaridad, sin embargo, adquieren otra dimensión cuando se trata de niños y jóvenes que son quienes han recibido mayor atención del sistema educativo nacional. Es observable entonces que más del 80 % de los niños y niñas indígenas van a la escuela: para ser precisos, 84 de cada cien niñas y 87 de cada cien niños asisten a la escuela en áreas rurales: y en áreas urbanas 82 de cada cien niñas y 86 de cada cien niños asisten a la escuela. Respecto de los jóvenes, se registran tasas de alfabetismo del 78.2 % y el 88.2 %, respectivamente¹³. Datos como los señalados permiten reafirmar la necesidad de enfocar el análisis de la información nacional por grupos de edad y género, para poder captar las variaciones y especificidades para cada sector poblacional. Por desgracia, en México y específicamente respecto a la población indígena, todavía es difícil acceder a ese desglose de información censal en todos los rubros.

En torno a la escolaridad hay que decir, sin embargo, que no todos los datos censales son alentadores y son significativos los niveles de atraso escolar¹⁴ que se presenta entre los indígenas, ya que éste va desde el 18 % a la edad de 8 años, hasta casi el 80 % a los 16 años; lo que habla de las dificultades, que tanto en el ámbito rural como en el urbano, enfrenta esta población para acceder y mantener su asistencia a la escuela. Ello ha generado que el nivel de instrucción entre los indígenas sea, por lo general, muy bajo y más aún entre las mujeres. Así, entre la población HLI mayor de 15 años, de cada cien mujeres: 32 carecen de instrucción, 28 cuentan con primaria incompleta, 17 tienen primaria completa, 3 han realizado estudios de secundaria incompleta y sólo 12 tienen estudios de secundaria completa o más. Entre los hombres de cada cien: 19 no tienen instrucción, 32 tienen primaria incompleta, 20 han terminado la primaria, 4 tienen la secundaria incompleta y sólo 20 tienen su educación básica completa o más. Ello significa que sólo una reducida parte de la población indígena ha podido tener acceso a la educación profesional. Para el año 2000, entre los mayores de 15 años únicamente el 3.9 % de los hombres (102 589 aproximadamente) tuvo algún grado aprobado en carreras profesionales, y entre las mujeres solamente el 2 %, es decir 54,016 aproximadamente¹⁵.

En el México de hoy Valencia Rojas¹⁶ identificó por lo menos 106 áreas en las que existen ciudades en torno a las cuales se generan dinámicas económicas pro-

13 INEGI, 2002: pp. 428, 429, 430, 435

14 La población con atraso escolar, según el INEGI, es aquella que no tiene aprobado el número de grados que corresponden a su edad.

15 INEGI, 2002, pp. 432, 433, 436 y 437

16 Valencia Rojas, Alberto, 2000. *La migración indígena a las ciudades*, INI, México.

picias para la atracción de población indígena migrante¹⁷. Dichas ciudades, según el caso, están asociadas a desarrollos agrícolas, industriales, turísticos y de vías de comunicación, entre otros. Algunos de estos proyectos son impulsados por capitales nacionales pero muchos de ellos responden a intereses transnacionales. Además de la ciudad de México, Monterrey, y Guadalajara —cada una junto con sus zonas metropolitanas— constituyen las más importantes zonas de atracción de migrantes indígenas. Identifica también otras ciudades que están adquiriendo características de megalópolis dado que han sido destinadas a descentralizar la Ciudad de México (Toluca, Cuernavaca, Pachuca, Puebla y Tehuacan, entre otras), o que forman parte de corredores agroindustriales y comerciales (como Morelia, Celaya, Uruapan, Zamora, y Tepic, entre otras). Identifica en ellas procesos migratorios diferentes, según procesos y circunstancias específicas, que pueden ser rural-urbanos, urbanos rurales, urbanos-urbanos y hasta circulares. En esas rutas migratorias participan los indígenas, aunque ninguna de ella puede ser considerada la población exclusiva.

El último Censo General de Población realizado el año 2000 muestra ya una distribución poblacional que expresa cambios significativos en los patrones de migración y asentamiento y que tienden a la centralización y la urbanización. De modo que si en 1990, casi el 70 % (el 66.7 %) vivía en localidades rurales (de menos de 2500 habitantes) para el año 2000 la proporción disminuyó a casi el 60 % (59.8 %).

Por todo lo anterior, es común encontrar en casi todas las ciudades del país hablantes de lenguas indígenas, muchos de ellos provenientes de regiones distantes, lo cual ha intensificado el contacto intercultural en las ciudades. En la Ciudad de México, por ejemplo viven 141 710 indígenas que hablan un casi todas las lenguas indígenas que existen el país¹⁸.

Otro indicador más de los efectos de la migración son los altos índices de feminidad que existen en regiones importantes por la atracción o por la expulsión de migrantes. De esta forma, si bien la proporción nacional entre hombres y mujeres indígenas es casi similar (alrededor de 3 millones para cada sexo), en el Distrito Fede-

17 Valencia Rojas (2000) identifica como integrantes de estas rutas migratorias 19 ciudades grandes (mayores de 500 mil), 58 ciudades medias (de más de 100 mil pero de menos de 500 mil y 29 ciudades pequeñas (con más de 50 mil habitantes pero menores de 100 mil). El autor toma como base, entre otras fuentes, el *Sistema de ciudades y distribución espacial de la población en México*, de CONAPO, la *Encuesta nacional sobre migración en áreas urbanas del país*, de CONAPO e INEGI, así como la información del *XI Censo General de Población y Vivienda de 1990* así como el *Conteo de Población de 1995*, ambos realizados por el INEGI.

18 INEGI, 2000.

ral existen 123 mujeres por cada 100 hombres, como producto de la inmigración de mujeres a esta ciudad, mientras que en Michoacán (con índice de feminidad de 109), Oaxaca (con índice de 108), Guerrero y Puebla (con índice de 107) el hecho de que existan más mujeres que hombres se debe a la mayor emigración de hombres¹⁹.

Relaciones interétnicas en las ciudades

Como contraparte a la presencia cada vez más intensa de los indígenas en las ciudades, en un gran número de localidades rurales se percibe la ausencia de su población en todos sus rangos de edad. En algunos casos son los hombres los que se van, en otros son las mujeres y en otros más lo hacen tanto los hombres como las mujeres. Entre los ausentes destaca el sector joven de la población. En todo caso, la información de la estructura de la población indígena por edad y sexo, es indicativa de las alteraciones provocadas por la migración. Así, la edad mediana de la población rural es menor que la urbana (en las primeras los indígenas de entre 5 y 14 años representa el 28.9 %, mientras que en las ciudades solamente el 16.1 % son niños); el porcentaje de población entre 30 y 44 años es mucho mayor en zonas rurales lo mismo que es más abundante la población mayor (de entre 45 y 59 años) y la anciana. En tanto que los jóvenes, de entre 15 y 29 años, tienen un porcentaje similar en los dos tipos de regiones (28.1 % en las rurales y 29.8 % en las urbanas)²⁰.

En las ciudades (de más de 50 mil habitantes) los indígenas que las habitan son siempre minoritarios respecto a la población no indígena, tanto en números absolutos como relativos, y lo mismo sucede generalmente en el conjunto de las corrientes migratorias, nacionales e internacionales, en las que participan. Sin embargo, a pesar de su presencia minoritaria ésta adquiere una relevancia especial cuando se hace visible para los sectores no indígenas. En esas situaciones, el contacto interétnico reactiva procesos identitarios en los que se construyen o reafirman prejuicios étnicos, se ejerce la discriminación cultural y la exclusión, y se abren las posibilidades de que la dimensión étnica de las relaciones sociales que se establecen pueda ser empleada para ciertos fines.

Difícilmente en las actuales condiciones de globalización y mundialización —con su lógica de integración en lo económico, financiero, comunicacional e informático, pero también de exclusión y de explotación de grandes sectores sociales— en

19 INEGI, 2002: pp. 420, 423.

20 INEGI, 2002: p. 435

las ciudades pueden imperar sistemas de relaciones sociales cuya lógica de estratificación social y funcionamiento global responda exclusivamente a la dimensión étnica de las relaciones sociales, como pasó durante el período colonial en México y como sucede todavía en algunas regiones del mundo²¹.

Lo que sucede en las ciudades mexicanas con el arribo significativo de inmigrantes indígenas a las ciudades, es un proceso mediante el cual a las relaciones sociales existentes, con su lógica propia de globalización, estratificación, diferenciación y exclusión social, se les agrega la dimensión étnica como una variable más; de allí que conocer cómo se expresa y cómo viven los indígenas tal condición en debe ser materia de investigación y no de generalizaciones que evitan conocer las particularidades de los procesos en los que están involucrados, y contribuyen a generar estereotipos. En el caso mexicano, entonces, lo que sucede es un proceso mediante el cual a las relaciones sociales existentes, en determinadas condiciones, se les agrega la dimensión étnica como una variable más. Variable que ciertamente puede ser aprovechada para acentuar las condiciones de dominación y explotación de los indígenas, pero que también puede ser empleada (por los indígenas) como medio de defensa, organización y negociación y, por esa vía, conseguir mejores condiciones de trabajo, vivienda, servicios, etc. De esta manera, los indígenas que se establecen en las ciudades o que crean vínculos permanentes con ellas, puede ser que se incorporen a ámbitos laborales y sociales donde la dimensión étnica de su identidad no tenga relevancia, como sería en el caso, por ejemplo, de que los indígenas que se incorporan a empleos asalariados en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores contratados, sin que reciba ningún trato diferencial por ser indígenas); o puede ser que, precisamente por el referente de su identidad éstos vivan relaciones sociales (laborales, comerciales e institucionales, entre otras) en donde el referente étnico actúa como catalizador de la situación. Este último sería el caso de los comerciantes ambulantes, las trabajadoras domésticas, o los albañiles, que por ser indígenas reciben un trato diferencial, como puede ser un salario ínfimo o un trato especialmente agresivo. Pero también sería el caso —aunque con un sentido de discriminación positiva— de las

21 Lo étnico se considera que expresa un tipo específico de dominación que se ejerce sobre uno o varios grupos sociales con identidades y culturas propias, y cuya dominación se explica y justifica por la diferencia cultural, real o imaginada, que el grupo dominante emplea para inferiorizar y minorizar al grupo que considera "otro". Dependiendo de la situación histórica, dicha diferencia cultural puede hacer referencia al conjunto de la cultura del grupo dominado, sólo algunos rasgos —como la lengua, la religión o la organización social— e incluso a la identidad como expresión articulada de la diferencia. Dicha dominación puede ejercerse sobre poblaciones homogéneas socialmente, o estratificadas, sin que ello sea condición ni impida el ejercicio de la dominación étnica (Pérez Ruiz, 2003)

instituciones, como fue el del Instituto Nacional Indigenista (ahora Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI) y del gobierno perredista del Distrito Federal, que establecieron políticas públicas específicas para éste sector de población al que identifican por sus cualidades lingüísticas, culturales e identitarias.

En este tipo de contextos, una forma en la que la presencia indígena en las ciudades es estigmatizada, es precisamente mediante su caracterización como “migrante”, aunque se hable de una población que tiene ya dos o tres generaciones de haberse establecido en las ciudades. Al respecto es significativo el estudio realizado por Pérez Ruiz (1991) en Ciudad Juárez Chihuahua, que muestra cómo entre los estudiantes universitarios, mayoritariamente hijos de migrantes, o migrantes de primera generación, pero de clases medias no indígenas (provenían de otras ciudades de Chihuahua y de otras entidades del país) no existe la autocaracterización como migrantes, y cómo en cambio dicho epíteto es aplicado a los indígenas mazahuas, no obstante que su arribo a la ciudad date de más de treinta años. Esa concepción, presente también entre las autoridades municipales, es lo que ha conducido a que en varias ocasiones en “redadas” especiales, los mazahuas, especialmente las mujeres adultas y los niños -que son los que presentan evidencias de su identidad a través del vestido- hayan sido “deportados” en camiones a sus “lugares de origen”.

Es preciso tener presente, sin embargo, que esa permanente condición de “migrante” de muchas maneras ha sido interiorizada, y hasta cierto punto recreada, por las generaciones de indígenas que han nacido ya en las ciudades, a través de las continuas referencias al lugar de origen de sus padres y abuelos, sus retornos periódicos, tanto en días festivos como en casos de enfermedades incurables en la ciudad. Ello coloca a los nacidos en las ciudades en una posición un tanto ambigua respecto a su pertenencia, no sólo frente a la población de las ciudades sino también de cara a la población de la comunidad de la que forman parte sus padres en los lugares de origen. Sucede, entonces, que su condición de “nacidos en la ciudad” les crea tensiones especiales frente a los parientes, amigos y autoridades que permanecen en el lugar de origen, cuando los ven llegar para incorporarse a las peregrinaciones y fiestas cargados de videocámaras, grabadoras, botas vaqueras y lentes oscuros, si no es que su atuendo incluye chamaras de piel negras, el pelo verde y rizado o un peinado punk, o a la última moda (Pérez Ruiz, 1993).

De esta forma, y sobre todo entre estos jóvenes indígenas que han nacido ya en las ciudades, se expresan con claridad (precisamente por la condición generacional de transición en la que están) las tensiones, disyuntivas y elecciones que deben

enfrentar respecto a sus identidades, lealtades, pertenencias y futuro. El no ser “ni de aquí ni de allá”, o desde otra perspectiva el ser “de aquí y de allá” les abre un campo de posibilidades de elección, que se ejercen en medio de tensiones y conflictos con sus familiares cercanos, pero también con los sectores sociales con los que interactúan en las ciudades y las comunidades de origen.

Identidad y cambio cultural

El campo de posibilidades y opciones para el cambio y/o la continuidad de las identidades y las culturas indígenas, cabe aclarar, que no se presentan sólo entre las generaciones nacidas en las ciudades, y están presentes también entre todos los hombres y mujeres indígenas que viven en sus comunidades de origen, y entre los que acaban de llegar a las urbes. Pero esos procesos de elección, continuidad y cambio se perciben con una nitidez especial entre los jóvenes indígenas que llegan a las ciudades en una etapa de su vida, previa al matrimonio, con los recursos económicos que no los confronta con la necesidad de conseguir un empleo y de luchar cotidianamente por su supervivencia, y que carecen aún de las fuertes ligas y responsabilidades hacia la comunidad con las que, generalmente, llegan ya los adultos. Este es el caso de los jóvenes, hombres y mujeres, que provienen de familias de estratos altos y medios en sus comunidades de origen que van a las ciudades a estudiar, o que simplemente buscan otras formas de vida y cultura.

En algunos de estos jóvenes, el acceso a la educación superior, a carreras técnicas como la computación o las especializaciones agropecuarias, los aleja de sus comunidades de origen e incluso de sus familias, lo que los hace renunciar a su identidad cultural y hasta romper con los lazos familiares y comunitarios. En la actualidad, sin embargo, sólo una reducida parte de la población indígena ha podido tener acceso a la educación profesional. Para el año 2000, entre los mayores de 15 años únicamente el 3.9 % de los hombres (102 589 aproximadamente) tuvo algún grado aprobado en carreras profesionales y entre las mujeres solamente el 2 %, es decir 54,016 aproximadamente²².

Cabe decir, no obstante, que parte del problema de que existan cifras censales muy bajas respecto a los índices de población indígena que accede a la educación técnica y superior, que adquiere una profesión o un empleo especializado, radica en la renuncia de muchos de los jóvenes indígenas a su identidad cultural. Este ha sido

22 INEGI, 2002, pp. 432, 433, 436 y 437

el caso de un buen número de médicos, abogados, ingenieros, secretarías, recepcionistas, e incluso maestros que no han optado por la educación bilingüe, y que ya no se reconocen como indígenas.

El abandono de sus identidades culturales, sin embargo, está lejos de explicarse unidimensionalmente, como producto sólo de un factor, como pudiera ser la discriminación en las escuelas, y tendrá que buscarse en una combinación de múltiples factores que deberán incluir la dimensión subjetiva presente en la toma de decisiones entre quienes así han procedido.

Entre otros jóvenes indígenas, sin embargo, el acceso a otros niveles de conocimiento y educación los compromete con su identidad cultural. De ese sector joven indígena es que salen cada vez más los antropólogos, los ingenieros, los agrónomos, los escritores en lenguas indígenas, los intelectuales, los funcionarios públicos y hasta los líderes de las crecientes organizaciones políticas de indígenas en México, todos ellos comprometidos con un proyecto de reivindicación cultural y política de sus pueblos.

En ese sentido, no es casual, que mucha de la intelectualidad india que hoy encabeza los principales movimientos indígenas de México, o que ocupa puestos públicos importantes, haya sido instruida en las ciudades, o que, inclusive, un buen número de ellos radique en los centros urbanos, principalmente en la ciudad de México. Cabe recordar también, que las ciudades son, cada vez más, los sitios donde las organizaciones indígenas de importancia nacional o regional establecen sus sedes y desde donde emprenden sus tareas de organización, movilización y negociación, por lo que es común que algunos de sus líderes (no necesariamente intelectuales) radiquen también en las ciudades. De este modo la Ciudad de México ha sido la sede de las organizaciones indígenas que tienen, o buscan una cobertura nacional, mientras que otras ciudades, medias o pequeñas, como San Cristóbal de las Casas, Chiapas, son cada vez más los centros políticos desde donde las organizaciones indígenas contemporáneas tejen sus redes para la movilización y el apoyo solidario²³.

En la actualidad, es interesante mencionar que existen en México varios programas de educación superior precisamente destinados a este sector de población: la Maestría en Lingüística Indoamericana, del CIESAS y CDI; la Maestría en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); el Programa SNA'EL Saberes que otorga becas para estudios de posgrado a indígenas, de la UNAM, la CDI y el Go-

23 Sarmiento y Chirinos (1989), Burguete (1998), y Gutiérrez (2002).

bierno del Estado de Chiapas; así como El programa de Becas Ford para estudios de licenciatura y posgrado para indígenas de México y Guatemala. Aunque es minoritaria la cantidad de población indígena que puede llegar hasta estos grados, los datos anteriores nos habla de la creciente demanda de los indígenas para acceder a niveles superiores, y de posgrado, en su educación.

Pese a todo, las ciudades presentan condiciones que, dentro de ciertos márgenes, permiten una gama mayor de opciones para los jóvenes que las que presentan las comunidades rurales. De esta forma, aunque en algunos casos las familias tienen posibilidades y recursos económicos para enviar a los niños a la escuela, o para que los jóvenes asistan a instancias de educación superior, esas opciones no entran dentro de las expectativas ni los proyectos de vida de las familias inmigrantes. Algunos casos de resistencia a continuar los estudios así como a buscar empleos estables y aparentemente bien remunerados, los encontramos sobre todo entre los indígenas que viven del comercio ambulante. Entre ellos es posible que los niños y jóvenes acudan a la escuela sólo para aprender a contar y hablar bien el español, pero que vivan la escuela y los trabajos estables como una atadura, que los limita tanto para mantener su contacto con la comunidad de origen como para “vivir” como quieren. Para ellos dedicarse al comercio ambulante significa “andar libres” sin “atarse a un horario” y sin tener que “obedecerle a un patrón” (Pérez Ruiz, 1993)

Situación socioeconómica, género y cambio religioso

Si bien es cierto que tanto hombres como mujeres encuentran en las ciudades un ámbito que les permite, o les obliga, a redefinir sus opciones de vida y sus identidades y que el sector juvenil es un espacio privilegiado para analizar tal situación, el de las mujeres es un campo especialmente importante para advertir nítidamente la complejidad de situaciones y disyuntivas que enfrentan los indígenas en las ciudades. Como ejemplo de esto último, son reveladores los estudios sobre género y migración, realizados por diversos autores que muestran las posibilidades, pero también las restricciones, las dificultades y las transformaciones que están teniendo las indígenas cuando se van de sus comunidades. Perspectiva que, sin embargo, se enriquecería aún más si se emprendiera el análisis de género también por grupos de edad²⁴.

24 Una importante muestra de lo que se está trabajando actualmente en los estudios de género y migración, puede leerse en: Bassols Batalla D. Y Oehmichen Bazán C. *Migración y relaciones de género en México*, GIMTRAP, UNAM-IIS, México, 2000. El estado de la cuestión puede consultarse, en ese mismo libro en los artículos de Marina Ariza y Patricia Arias. Sobre la situación de la mujer y los niños en la Ciudad de México pueden verse también: Thacker y Gómez (1997) y Corona de la Peña (1999).

Uno de los logros de las mujeres que llegan a las ciudades es alcanzar, medianamente la obtención de sus propios ingresos, una mayor capacidad de decisión sobre su vida y la de sus hijos, sean estos presentes o futuros. La escolaridad, los ingresos, un mayor acceso a la información, contribuyen de esta manera a modificar las relaciones entre los géneros imperantes en sus comunidades; pero, como también se ha documentado, es posible que esas modificaciones no sean necesariamente benéficas para las mujeres ni transformen de fondo su papel de subordinación frente a los hombres. Así, la nueva fuerza de las mujeres puede llevar a los hombres a acentuar o buscar nuevas formas para expresar los atributos “legítimos” que debe tener, de acuerdo a su grupo de pertenencia, e inclinarse hacia la poliginia y/o a abandonar a su familia (Oehmichen, 2000). En ese mismo tenor es posible, también, que las mujeres inmigrantes que llegan solas a las ciudades sean valoradas negativamente por los hombres de su comunidad o de otras comunidades, al no tener de su lado las estructuras familiares y comunitarias que las respalden y protejan, y que por ello sean tratadas sin ningún compromiso afectivo y hasta abandonadas cuando resultan embarazadas (Freyermuth y Manca, 2000)

Por su propia condición transitoria, el sector joven indígena vive con especial intensidad los conflictos generacionales al encontrarse en un medio menos acotado por las prescripciones de comportamiento vigentes en su familia y comunidad, y al desenvolverse en un ámbito con una amplia, y muchas veces, contradictoria, oferta cultural. Con la situación agravante de que se desenvuelve en un ámbito urbano agresivo, altamente competitivo y con un amplio margen para la delincuencia y la violencia, no sólo de tipo étnico.

En ocasiones el contacto conflictivo con las bandas, o cualquier otra clase de grupos de jóvenes urbanos no indígenas, conduce a algunos jóvenes indígenas, hombres y mujeres, a integrar sus propios bandas para defender y oponerse a los contrincantes. En otras ocasiones la incorporación o la formación de grupos delictivos tiene más que ver con la falta de opciones de estudio o de trabajo, unidas a la discriminación permanente de la que son objeto. En estos casos, a la situación generalizada de falta de empleo y oportunidades de ascenso social, producto de las condiciones actuales de la economía nacional y global, se incorpora la dimensión étnica que acentúa la exclusión y la autoexclusión²⁵.

25 Para uno de los estudiosos de las bandas juveniles, Carles Feixa (1998) las bandas son para los jóvenes una respuesta sincrética, que mezcla influencias de lo rural y lo urbano, de lo popular con lo masivo y de lo local con lo global, ante sus condiciones de vida, y si bien es ilusoria, sirve para darles

Debe decir, sin embargo, que la participación en grupos de delinquentes indígenas que roban, consumen drogas o violan, no implica necesaria, ni solamente, a jóvenes abandonados, o aislados de su grupo familiar o comunitario, ya que en algunos de estos casos es, precisamente, la pertenencia a cierto grupo familiar y a cierta comunidad cultural lo que les brinda a los jóvenes delinquentes un espacio de apoyo y defensa, cuando éstos son llevados a la cárcel o se ven involucrados en actos de violencia frente a otros grupos²⁶. Cristina Ohemichen (2000), en su trabajo sobre mazahuas residentes en la Ciudad de México relata como entre los hombres de ese grupo existe cierta predisposición a la violencia contra las mujeres de su familia, pero también hacia la delincuencia, el consumo de drogas y alcohol, como producto de las dificultades que tienen éstos en la ciudad para cumplir con las atribuciones y responsabilidades, presentes o futuras, asignadas culturalmente a su género (como proveedores, jefes de familia, protectores, por ejemplo). Según la autora, la mayor facilidad de las mujeres para conseguir trabajo y los ingresos para la familia en ámbitos urbanos sería un factor clave para explicar los cambios en las relaciones entre los géneros e incluso entre generaciones que se están presentando en las familias indígenas.

La violencia, sin embargo, no es un atributo exclusivo de los hombres y es una práctica que se presenta también entre las mujeres, especialmente en sus relaciones con los niños, aunque conceptualizada ésta como “castigo” (Thacker y Gómez, 1997), lo cual, tanto en las ciudades como en el campo, contribuye generar relaciones familiares conflictivas que provocan que en ciertos momentos, los niños huyan de sus casas, engrosando las filas de los llamados niño y jóvenes de la calle.

Ante la violencia familiar, el alcoholismo, la pobreza y, en fin, ante una diversidad de complejas razones, ciertas familias indígenas han recurrido a buscar nuevas opciones religiosas, ya sea dentro de la misma iglesia católica o dentro de otras iglesias. En ocasiones, la opción de incorporarse a ámbitos religiosos nuevos o renovados, se presentan antes de los procesos migratorios, e inclusive pueden ser causantes

identidad social en el difícil tránsito del campo a la ciudad, de la infancia a la vida adulta y para darles una visión universal que contradice su localismo.

26 Entre las investigaciones sobre las bandas de jóvenes no indígenas, resaltan las observaciones realizadas por Jorge Cano, ya que al estudiar a una banda, formada por hijos de inmigrantes, primera generación en la urbe, encuentra que éstos, aunque en apariencia desarrollan un movimiento contracultural, opuesto a códigos y valores establecidos, en el fondo reproducen, aunque de manera oculta, la cultura de origen de sus padres. La pertenencia a la banda satisficaría, en ese sentido, una serie de necesidades afectivas, de expresión, de participación, y aún la de diferenciarse de la cultura de sus padres, en una situación en la los jóvenes carecen de un rol social específico (Jorge Cano, citado por Urteaga, 2000).

de ellos (como en el caso de las expulsiones religiosas en Chiapas), pero en otros, las nuevas religiones se buscan o se encuentran al llegar a las ciudades. Entonces, los lazos de pertenencia e identidad que se forma en entorno a esas iglesias sirven como nuevas, y alternativas, redes de apoyo y solidaridad entre los migrantes, que pueden servir no sólo para aliviar situaciones familiares (como la del alcoholismo o la de los jóvenes delincuentes) sino para construir opciones de vivienda y de trabajo.

Un caso muy significativo al respecto es el que relata Gabriela Robledo (2002), en el que analiza el papel de la migración y la religión en la recomposición de la identidad entre los indígenas, de diversas etnias, que se han establecido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Según la autora, la diversidad de los indígenas que se organizan en torno a las nuevas iglesias, está conduciendo a la creación de una nueva identidad indígena panregional que supera las barreras de la comunidad parroquial y que los proyecta como una fuerza social capaz de negociar a su favor beneficios diversos. Además, de que la adscripción a una nueva religión ha contribuido a la redefinición de las interrelaciones entre hombres y mujeres, sus identidades y sus actividades económicas, por lo que, entre otras cosas, ha disminuido el alcoholismo, la violencia familiar y la poliginia.

En torno a la vida de los indígenas en las ciudades han sido más documentadas las situaciones en las que su arribo ha estado acompañado de pobreza, de violencia y de discriminación, tal vez por su dramatismo y/o porque ilustran bien las condiciones adversas a las que enfrentan. De ahí se deriva que en la mayoría de los casos se describe a los indígenas en los que, al llegar a las ciudades, se magnifican sus condiciones de vulnerabilidad por su pobreza, por su analfabetismo, por su poca o nula escolaridad, por su monolingüismo, por su falta de capacitación técnica, e incluso por los estragos causados por siglos de vivir con una identidad propia estigmatizada, a la que han tenido que agregar una identidad como indios, negativa y de origen colonial. Prostitución, vandalismo, alcoholismo, depresión, drogadicción, narcotráfico y hasta la locura, son situaciones que se presentan entre esos indígenas en las ciudades²⁷.

El trabajo de campo, cada vez más a detalle, muestra que en entre los indígenas que llegan a las ciudades ya empobrecidos, que ven en las ciudades una opción desesperada ante la falta de opciones que viven hay en sus pueblos -por la falta de

27 Sobre la prostitución de indígenas en la Ciudad de México ver: Angoa (1999). Para ver la vida cotidiana de los indígenas en esta misma ciudad, se puede ver también: Albertani (1999), Ignacio Felipe (1999), Sánchez (1999) y Valencia (1999)

tierras, por la falta de apoyos estatales, por los conflictos religiosos y políticos, por la violencia doméstica, etc.-, es donde existen mayores posibilidades de que lleguen a habitar las ciudades perdidas, que tengan que vivir en las alcantarillas o en el drenaje profundo, y que puedan apenas sobrevivir de las limosnas que reciben en las calles. Y aunque ésta puede ser la situación de un gran número de indígenas, ciertamente no es el caso de todos²⁸.

Entre los indígenas mexicanos que han optado por las ciudades existen también experiencias que podríamos calificar de exitosas. Una de ellas es la de los comerciantes que manejan millones de pesos en mercancías. Y una de estas experiencias exitosas es la de los mazahuas, de la región de Temascalcingo, estado de México, quienes iniciaron sus migraciones a la frontera norte del país, hace cuarenta años, que ya han establecido colonias urbanas en las ciudades del norte y que han extendido sus redes comerciales hacia lugares urbanos y turísticos del centro y sur del país (Pérez Ruiz, 1990, 1993). Otra, es el de los nahuas de guerrero que venden artesanías en la Ciudad de México, Cuernavaca, Acapulco, entre otros lugares, y que han sido ampliamente documentados por Catharine Good (1989). Y otra más, es la de los indígenas en San Cristóbal de las Casas Chiapas, que hoy controlan el transporte regional (de taxis y combis) de Los Altos de Chiapas y gran parte del comercio en plazas y mercados de la ciudad (Valencia Rojas, 2000, Hvostoff, 2002, Gutiérrez, 2002)

El poderío económico de tales indígenas muchas veces no es visible para los no indígenas, e incluso puede ocultarse intencionalmente, ya que, por una parte puede propiciar “envidias” al interior de su propio grupo familiar y comunitario (Oehmichen, 2001) y, por otro, puede generar que sus mercancías les sean robadas. Existe, sin embargo, también la posibilidad de que la situación económica de bonanza se oculte como una vía para poder negociar apoyos y recursos -ante autoridades, partidos políticos y organizaciones religiosas o no gubernamentales-, que no les serían otorgados si se supiera su situación económica real (Pérez Ruiz, 1990). En esta última situación es posible advertir, cómo en ciertas circunstancias, la identidad de estos inmigrantes como indígenas, e incluso el estereotipo que los considera siempre pobres e ineptos para la modernidad y el desarrollo, pueden ser instrumentalmente manejados en su beneficio (Hvostoff, 2002).

28 Cada vez son más frecuentes los estudios, enfocados a grupos particulares, que captan la variedad ocupacional de la población indígena. Uno de estos trabajos es el de Carmen Bueno (1999) quién ha estudiado a los indígenas que trabajan en la industria de la construcción.

Un elemento más que influye para que no se puedan captar a primera vista las diferencias socioeconómicas entre los indígenas, es que sus actividades económicas en las ciudades generalmente se incluyen en rubros tan generales como el de la “economía informal”, el “ambulante” o “el subempleo”, que no permiten conocer la especificidad de la actividad ni de los ingresos, y menos aún ubicar el contexto laboral familiar al que se incorporan dichos ingresos. Como ejemplo de dicha ambigüedad basta decir que dentro del rubro “ambulante” entran tanto las vendedoras de chicles que trabajan en las calles, como los vendedores de muebles que poseen varios camiones para transportar sus mercancías por todo el país.

Otro elemento que también debe tomarse en cuenta, es que aún en casos de bonanza económica como los mencionados, se presenta con cierta frecuencia que muchos de esos indígenas habiten, en las ciudades, viviendas precarias, ya sean vecindades, predios invadidos con casas de cartón, etc. No obstante, una mirada más cuidadosa puede contribuir a encontrar las razones de ello. Una razón puede ser que “se viva mal” en las ciudades mientras se ahorra dinero para mejorar la vivienda en el lugar de origen, o para emprender o mejorar el negocio familiar, que puede ser comercial, agropecuario o de cualquier otro tipo y que puede estar en la misma ciudad (en manos de algún familiar), en el lugar de origen o en cualquier otro lugar del país. Otra razón puede ser, que se viva así sólo temporalmente, en lo que se consiguen mejores terrenos para edificar lo que a la larga será la vivienda definitiva. Y otra más, es que se conserven ciertos sitios de vivienda, de mala calidad, porque están cerca de las zonas de empleo y/o comercio, o para albergar allí a los hijos que acaban de casarse o que están próximos a casarse, y/o a los familiares y paisanos que están llegando apenas a la ciudad. También es posible, que varias de estas razones se presenten simultáneamente (Oehmichen, 2001 y Pérez Ruiz, 1990).

Especialmente en el caso de los comerciantes que se trasladan de una ciudad a otra y que en varias de ellas tienen familiares y viviendas, cabe aclarar, que muchos de ellos llevan en sus camiones a “paisanos” o familiares pobres, que son empleados como “macheteros”, choferes y cargadores, ya que venden artesanías, autopartes, productos agrícolas, flores, muebles, artefactos de cocina, etc.) Algunos de estos ayudantes, cuando llegan a las ciudades tienen la opción de quedarse en ellas, solos o con sus familias, y si no cuentan allí con una red de apoyo pueden incorporarse a las filas de los depauperados y miserables de las ciudades (Pérez Ruiz, 1990, 1993).

Situaciones como esas están cada vez más documentadas, y evidencian la existencia de una diferenciación social previa a la migración que condiciona un cierto

rango de posibilidades para unos y otros migrantes, así como un margen de opciones entre los que se manejan los indígenas en las ciudades. Unida a ella, la migración adquiere características específicas según se trate de hombres o mujeres, según sea su situación generacional, y según sean las coyunturas personales, familiares o comunales que inciden en las decisiones del quién, cómo, cuando y hacia dónde emigrar.

Discriminación, redes familiares y organizaciones indígenas

Un aspecto relevante a destacar frente a la desigualdad de condiciones y de posibilidades implicadas en la migración, es que tanto para los indígenas pobres como para los que no lo son, las redes familiares y comunitarias de apoyo son de suma importancia para su vida en las ciudades. En el primer caso para mantener la situación de bonanza, y aún para acrecentarla, y para los segundos como una opción que permite mejorar paulatinamente, o en el peor de los casos, por lo menos sobrevivir²⁹.

Las redes familiares y sociales abarcan varios tipos de vínculos familiares, comunitarios y generacionales y no necesariamente comprenden personas de un mismo nivel socioeconómico. Por ello, es posible que dentro de un mismo grupo familiar, y comunitario, asentado en las urbes haya personas que ocupan diferentes nichos laborales, ocupacionales y socioeconómicos. Así que, por ejemplo, mientras el hombre o la mujer, jefe de familia, se ocupan de la venta de los productos que trasladan en sus camiones, los hombres jóvenes, emparentados con ellos, pueden atender puestos ambulantes de elotes y helados, otros más pueden vender autopartes en las salidas de las ciudades, mientras que ciertas mujeres, parientes de sangre o sólo ritualmente, pueden vender chicles y dulces en las calles, y algunas más (entre ellas las parientes más pobres), junto con sus hijos pequeños, pueden pedir limosna en las calles. Ello, además, de los niños pequeños y los jóvenes que pueden asistir a la escuela (Pérez Ruiz, 1990, 1993).

La importancia de la construcción de estas redes sociales de apoyo es tal, que aún en los casos en que hombres o mujeres se ven obligados a llegar a las ciudades sin contar con ellas, poco a poco las van construyendo. Importante, en ese sentido, es el relato de Freyermuth y Manca (2000) en el que nos relatan las situaciones, generalmente difíciles y dolorosas, que motivan a ciertas mujeres indígenas a viajar e

29 Ver, entre otros: Arizpe (1987 y 1979), Mora (1996), Pérez Ruiz (1993), Ohemichen (2001), Freyermuth y Manca (2000)

instalarse solas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En esos casos, empujadas por su soledad y la necesidad de sobrevivencia, con el tiempo van construyendo redes de apoyo y amistad (interculturales e intergeneracionales) a través del contacto con otras mujeres indígenas inmigrantes de diferentes comunidades, a quienes van conociendo en espacios laborales, recreativos, habitacionales, etc.

Respecto a la composición de los hogares entre los indígenas inmigrantes en las ciudades, es significativa la información obtenida por Flores (2002) ya que, según su muestra encontró un mayor número de hogares familiares y de familias extensas que unipersonales, los cuales, mayoritariamente tienen como jefe a un hombre. Cabe decir, sin embargo que mientras los hogares cuya jefatura está a cargo de mujeres, mayoritariamente comprenden a sus hijos, son muy escasos los hogares formados por hombres solos o en los que los hombres solos se hacen cargo de sus hijos.

La organización en redes se generan, entonces, desde los núcleos familiares propios para extenderse hacia otras familias y miembros de la comunidad o de otras comunidades. A partir de ellas es como también los indígenas en las ciudades han creado otra una gran variedad de organizaciones mediante las cuales fortalecen sus vínculos familiares y culturales, ya sea entre miembros de una misma comunidad, de varias comunidades de una misma región, pero incluso con miembros de otras comunidades indígenas y con población no indígena cerca de ellos por razones diversas. De esa manera, en las ciudades son cada vez más frecuentes las organizaciones indígenas de tipo laboral, cultural, religioso y festivo, que pueden involucrar a indígenas que vienen de diversos los lugares de origen, que hablan diversas lenguas, que viven en diversas ciudades, o que en viajes golondrinos transitan entre campos agroindustriales y la ciudad. Entre estas organizaciones algunas son cívicas y otras religiosas y otras tienen carácter político. Algunas sólo tienen miembros de una región y otras involucran a gente de diversas regiones; en algunas se habla la misma lengua, en otras se habla el español como lengua franca entre los sus miembros que hablan diferentes lenguas indígenas. Ciertas organizaciones involucran a varias generaciones, otras sólo alguna, o integran sólo a mujeres o sólo a hombres. Los indígenas han organizado en las ciudades bandas de música tradicional sólo para niños y otras sólo para adultos, centros culturales, comités de mujeres que cuidan cotidianamente la iglesia, comités vecinales que atienden los problemas de servicios y de vivienda, mayordomías religiosas, asociaciones gremiales, asociaciones políticas, pero también grupos de rock y otros ritmos contemporáneos, en el seno de los cuales, por lo de-

más, han salido a la luz jóvenes compositores que crean “música moderna” en su propia lengua³⁰.

Estos jóvenes, indígenas y urbanos, además de usar guitarras y bajos eléctricos, sintetizadores y baterías, son consumidores de “maquinitas” de juegos electrónicos, de parques de juegos, de cines y videos y, en ocasiones, hasta de computadoras. En estos casos son muy importantes los procesos de apropiación “de lo moderno” para incorporarlos a su vida cotidiana, familiar y comunitaria, en la que sin embargo persiste, no sin conflictos, también la continuidad de sus identidades culturales particulares. También es cierto, sin embargo, que entre ellos se dan importantes procesos de pérdida de elementos culturales como la lengua, la memoria y los conocimientos históricos, cosmogónicos y religiosos.

Las organizaciones culturales o religiosas que involucran a indígenas de varias lenguas y lugares y que inclusive pueden incorporar a sectores de no indígenas -con los que comparten espacios de vivienda o ceremoniales (por ejemplo vecinos de una colonia, de un barrio, y otros usuarios de una iglesia)- sirven, entonces, para construir ciertos ámbitos de identificación, comunicación e intercambio simbólico que, entre otras cosas, contribuyen a mejorar las relaciones de convivencia entre lo diverso³¹.

Pese a la importancia de atender las experiencias exitosas, económicamente hablando, de los indígenas en las ciudades, es importante aclarar, que aún en esos casos no existe garantía alguna de que la vida para ellos transcurra sin conflictos, ya sea por la pérdida cultural, por las tensiones provocadas por el cambio cultural o por la discriminación. La lengua, junto a las marcas más visibles de la identidad, son algunos de los rasgos más visibles que son abandonados u ocultados entre algunos de los indígenas en las ciudades, principalmente entre los jóvenes.

Algunos datos sorprendentes que fortalecen la necesidad de profundizar el tema de las relaciones que hay entre la identidad y la cultura, y muy especialmente el de la relación entre la lengua y la identidad, salieron en la Encuesta Nacional de Em-

30 Sobre las organizaciones indígenas en las ciudades puede verse: Hirabayasi (1985), Beltrán (1986), Sarmiento y Chirinos (1989), Hernández (1989), Thacker (1989), Pérez Ruiz (1990 y 2000), Mora (1996), Thacker y Gómez (1997), González (1999), Sánchez (1999) y Corona de la Peña (1999).

31 Dentro del área metropolitana de la ciudad de México, Ciudad Netzahualcoyotl, ahora con alrededor de 6 millones de personas, es un ejemplo clásico de la lucha de diversos sectores de inmigrantes, indígenas y no indígenas, por conseguir, construir y urbanizar un espacio urbano, en un esfuerzo de años de luchas que incluyó invaciones de tierra y complejos procesos de legalización. Sobre los mixtecos asentados allí, puede consultarse Mora (1996).

pleo en Zonas Indígenas 1997, respecto a las relaciones entre lengua indígena y autodescripción como indígena: en ella, de 2 689 318 hablantes de lenguas indígenas, el 95 % se consideró indígena y el 5 % no. Mientras que de los 511 323 que no hablaban lengua indígena el 45.2 % si se consideró indígena, y el 54.7 % no lo hizo³².

Respecto a la discriminación que viven los inmigrantes en las ciudades, éstos tienen que ver con el tipo de relaciones que establecen con lo indígenas, así como con la “visibilidad” que éstos adquieren como “indios” o “indígenas” y que reactiva con mucha frecuencia, entre la población no indígena (sin que importe sustancialmente su clase social), una serie de estereotipos que se han desarrollado a lo largo de la historia nacional respecto a este sector de población. Lo cual agrega un ámbito más de conflicto a las ciertamente difíciles, competitivas y agresivas, condiciones de la vida en las urbes. De esta manera los derechos humanos y civiles de los indígenas en las ciudades son permanentemente violados por policías, jueces, autoridades de los ministerios públicos, pero también por médicos, enfermeras, personal administrativos de bancos y de la mayoría de las instituciones públicas y privadas, que se niegan a atender esta población, o lo hacen brindando una atención discriminatoria y de mala calidad³³. La violación permanente de derechos humanos entre indígenas no pobres, entre indígenas no mendigantes, e incluso entre indígenas con poderío económico, expone con crudeza la discriminación y el racismo asociado a lo étnico.

Como ejemplo de la activación de los estereotipos, cabe decir que muchas veces los vecinos, cercanos a las viviendas de los indígenas ejercen una serie de presiones para alejarlos, aislarlos o evitar la convivencia directa con ellos, ya que los consideran sucios, ignorantes y “sin cultura”. En ciertos casos, efectivamente se trata de viviendas ubicadas en vecindades maltrechas donde se hacían varias familias, pero en otros, las viviendas de los indígenas pueden ser superiores en servicios y calidad a la de los no indígenas (Pérez Ruiz, 1993) y ello no evita el rechazo y la discriminación por parte de la población no indígena. Ello contribuye a que, en general, las familias indígenas busquen conseguir predios o edificios donde puedan vivir familiares y paisanos, o incluso familias de otras comunidades familiares y lingüísticas formándose, así, enclaves étnicos y pluriétnicos en ciertos espacios urbanos. Dicha pretensión, sin embargo, no siempre es posible, y entonces deben de negociar y convivir con los sectores no indígenas de las ciudades.

32 Ver: INEGI, INI PNUD. OIT, 1998

33 Sobre la situación de los derechos humano entre los indígenas inmigrantes en ciudades ver: Pérez Ruiz (1992), Kearney (1994), López Bárcenas (1999) y Gobierno del DF (1999).

De esta manera, la lucha por modificar su situación discriminatoria y desventajosa, respecto al resto de la población mexicana, ha ido ocupando un lugar cada vez más importante entre los indígenas y ello —aunado al interés por adquirir una vivienda, a la necesidad de defenderse de las agresiones de las autoridades y cuerpos policiacos, así como el interés por defender sus derechos humanos, políticos y culturales— les ha llevado a incorporarse a diferentes movimientos sociales y a negociar con partidos políticos, iglesias, organizaciones no gubernamentales y demás intermediarios de la vida pública en México.

Algunos de esos movimientos y organizaciones podrían considerarse de tipo étnico³⁴, pero otros no ya que sus demandas son similares a las de cualquier otro sector de población en condiciones similares de pobreza. La participación de los indígenas en organizaciones de tipo político, ha ido creciendo en los últimos años, pero igualmente importante ha sido la participación de los indígenas en organizaciones y movimientos sociales no étnicos, ya que en conjunto, ello ha impulsado el fortalecimiento de la dimensión nacional de su identidad y, con ello, de su carácter como ciudadanos.

El movimiento indígena contemporáneo ha demostrado que para muchas de sus organizaciones no existen contradicciones irresolubles entre sus demandas como ciudadanos y sus demandas étnicas. La demanda actual por la autonomía, que emerge como una sentida demanda sobre todo de las organizaciones y bases indígenas que luchan por el control de sus territorios, no comprende con claridad, sin embargo, la problemática y los derechos específicos de los indígenas urbanos ni de aquellos que transitan permanentemente a todo lo largo y ancho del país.

Reflexión final

En la actualidad, forma parte del debate nacional, y especialmente de la discusión entre las organizaciones indígenas de México, establecer con claridad los ámbitos de relación, interacción y competencia, entre los derechos humanos de los indígenas como individuos, sus derechos políticos como colectivos con identidades y culturas propias (es decir como pueblos) y sus derechos políticos como ciudadanos mexicanos. Importará tener claro en ese debate la pluralidad social, económica,

34 Se considera que no toda reivindicación hecha por un grupo indígena es étnica. Son étnicas sólo aquellas demandas relacionadas con la situación de dominación que viven debido a la forma como las poblaciones indígenas están inciertas en los Estados nacionales, y que se justifican por su historia pre estatal y sus especificidades identitarias y culturales.

demográfica y cultural de los indígenas así como del país en su conjunto. Tal será el reto social y político, por lo menos, de todo este siglo que vivimos. En el campo de las ciencias sociales, en consecuencia, nos queda la obligación de dar cuenta de las particularidades que en cada país, región y ciudad adquieren los fenómenos migratorios, las relaciones interétnicas y los procesos identitarios y políticos que involucran a las poblaciones indígenas, mismas que cada vez más exigen ser actores políticos claves no sólo para definir su futuro sino el de todo el país.

Bibliografía

Arizpe Lourdes

1979 *Indígenas en la Ciudad de México: el caso de las Mariás*, Sep-Setentas y Editorial Diana, México.

Barth, Frederik

1976 *Los grupos étnicos y sus fronteras*, Fondo de Cultura Económica, México.

Bartolomé, Miguel A

1997 *Gente de costumbre y gente de razón*, Siglo XXI e INI, México.

Bataillon, Claude y Rivère D'arc. Hélène

1979 *La ciudad de México*, SepSetentas, México.

García Canclini Néstor

1990 *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, CONACULTA/Grijalbo, México.

García Canclini

2000 "Escenas sin territorios. Cultura de los migrantes e identidades en transición", en José Manuel Valenzuela (coord.) *Decadencia y auge de las identidades*, El Colegio de la Frontera Norte y Plaza y Valdés, México.

Garretón, Manuel Antonio

2002 *América Latina: un espacio cultural en el mundo globalizado*, Convenio Andrés Bello, SantaFé de Bogotá.

Giménez, Gilberto

2000 "Identidades étnicas: estado de la cuestión", en Leticia Reina (coord.) *Los retos de la etnicidad en los estados-nación del siglo XXI*, CIESAS, INI, y Miguel Ángel Purrúa, México.

2002 "¿Culturas híbridas en la frontera norte?", en Fátima Flores (coord.) *Senderos del pensamiento social, México*, Facultad de Psicología, Ediciones Coyoacán, México.

2003 “Cultura, Identidad y metropolitano global” ponencia presentada en noviembre de 2003, en el Seminario sobre representaciones sociales, cultura y globalización, coordinado por Gilberto Giménez, México.

Held David y McGrew Anthony

2003 *Globalización/Antiglobalización. Sobre la reconstrucción del orden mundial*, Piados, Buenos Aires.

INEGI, INI, SEDESOL, PDUD y OIT

1998 *Encuesta Nacional de empleo en zonas indígenas 1997*, México.

INEGI, Instituto Nacional de las Mujeres

2002 *Mujeres y Hombres 2002*, México.

INEGI

2002 *Los jóvenes en México*, México.

Lira, Andrés

1989 “Ciudades multiétnicas en la historia de la Ciudad de México. Notas para su estudio”, ponencia presentada en el Seminario El Rostro Indígena de la Ciudad de México, organizado por el INI y el DDF, los días 16 y 17 de noviembre, México.

Lins Riveiro, Gustavo

2003 *Postimperialismo: cultura y política en el mundo contemporáneo*, Gedisa, Barcelona.

Moscovici, Serge

1989 “Des représentations collectives aux représentations sociales” en Denis Jodelet, *Les Représentations sociales*, Presses Universitaires de Francia, Paris.

Orozco y Berra, Manuel

1973 *Historia de la Ciudad de México desde su fundación hasta 1854*, SepSetentas, México.

Pérez Ruiz Maya Lorena

1993 “La identidad entre fronteras” en Bonfil Batalla, Guillermo (Coordinador) *Nuevas Identidades culturales en México*, CNCA, México.

Pérez Ruiz Maya Lorena

2002 “Del comunalismo a las megaciudades: el nuevo rostro de los indígenas urbanos”, en De la Peña Guillermo y Vázquez León, Luis (Coordinadores) *La antropología sociocultural en el México del milenio: búsquedas, encuentros y transiciones*, el Fondo de Cultura Económica y CNCA, México.

Pérez Ruiz y Maya Lorena

2003 “El estudio de las relaciones interétnicas en la antropología mexicana”, en Valenzuela José M. (Coordinador) *Los estudios culturales en México*, Fondo de Cultura Económica, México.

Pescador, Juan Javier

1993 “Patrones demográficos urbano en la Nueva España 1700-1820”, en CONAPO *El Poblamiento de México: una visión histórico-demográfica*, Tomo II, México.

Serra Puche, M. Carmen

1989 “Ciudades pluriétnicas en la Cuenca de México durante la época prehispánica”, ponencia presentada en el Rostro Indígena de la Ciudad de México, organizado por el INI y el DDF, los días 16 y 17 de noviembre, México.

Valdés Luz M. y Menéndez Teresa

1987 *Dinámica de la población de habla indígena (1900-1980)*, INAH-SEP, México.

Valencia Rojas, Alberto

2000 *La migración indígena a las ciudades*, INI, México.

Valencia Rojas, Alberto

1999 “La migración indígena en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México”, en *Ce-Actal* Núm. 101, verano de 1999, México.



EXPERIENCIAS

Escuela de formación política del CEDIB. Una experiencia de formación política con organizaciones populares urbanas

Miguel Miranda*

Antecedentes

Análisis de la coyuntura actual en la que se inserta el proceso de la Escuela de formación política

El actual periodo histórico que vive Bolivia se caracteriza por una profunda crisis social, política y económica. Después de la debacle del proyecto político-económico neoliberal, las clases dominantes no han tenido la capacidad de plantear un nuevo proyecto alternativo, pues claramente ellas identificaron toda su proyección política con este modelo diseñado e implantado básicamente desde los agentes operadores de las políticas mundiales dominantes (agencias de cooperación internacional, gobiernos de los países industrializados, etc.).

Ante la ausencia de una clase política con capacidad para dirigir a la sociedad boliviana hacia la transformación estructural del país, en los últimos años se ha hecho evidente la re-emergencia y fortalecimiento de las organizaciones populares, funda-

* Filósofo y Teólogo. Responsable de la Escuela de Formación Política del CEDIB.

mentalmente conformadas por indígenas, campesinos, trabajadores informales de las periferias urbanas, obreros y grupos de las clases medias empobrecidas, que a partir de sus propias necesidades objetivas de subsistencia, intervienen profundamente en los procesos sociales, asumiendo un rol de participación mucho más político.

Si bien podemos precisar que ha habido un gran avance en los factores objetivos que determinan el desarrollo de estas organizaciones re-emergentes, es necesario considerar a partir del análisis de los diferentes procesos sociales en los que intervienen estos grupos, que existe una importante carencia en el desarrollo de los factores subjetivos. Si se hace una revisión del proceso social en los últimos años, se puede identificar un fenómeno constante en los movimientos sociales, que hace evidente una profunda limitación: se presentan momentos de gran avance en el que las organizaciones populares logran reivindicaciones fundamentales y se plantean a sí mismas transformaciones más profundas, pero inmediatamente después se presenta un periodo de reflujó dramático en los movimientos sociales, en los que sus direcciones cometen errores que van incluso en contra de los propios intereses de sus bases sociales.

Este fenómeno es explicable a partir de considerar que existe una grave carencia en el desarrollo de los factores subjetivos de las organizaciones sociales. Entre los elementos más importantes que inciden en esta carencia están el débil acceso y uso de la información y el insuficiente desarrollo de capacidades de análisis crítico de la realidad social por las organizaciones populares.

Esta insuficiencia en el desarrollo de capacidades de análisis y ubicación estructural hace que las organizaciones populares de base se pierdan en demandas sectoriales y en la maraña de luchas insignificantes con los gobiernos locales haciendo juego a la consolidación de estrategias controladas de participación, que han sido diseñadas por el mismo modelo neoliberal (Ley de participación popular, reglamento de OTB, Ley de Municipalidades).

Recogiendo estas necesidades y demandas, el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) viene desarrollando desde el año 2006 una experiencia más sistemática y procesual de formación política para las organizaciones populares, preferentemente suburbanas. Esta experiencia educativa popular pretende contribuir a desarrollar mejores condiciones subjetivas para el cambio social protagonizado por las organizaciones populares y fortalecer –desde su perspectiva y su rol autónomo– sus capacidades de intervención en los espacios políticos del país.

El presente plan de formación –que recoge una amplia experiencia de 7 años

de trabajo educativo en barrios de la zona sur de la ciudad de Cochabamba y reedita una primera experiencia piloto de formación política desarrollada en el año 2005– busca construir este espacio formativo de análisis y reflexión del propio contexto local con una proyección nacional, bajo un soporte de comprensión histórico-estructural de ejes temáticos con particular relevancia estratégica –desde la perspectiva económico-política– en el país. Además, se busca potenciar la reflexión autocrítica del rol y ubicación social e histórica de las organizaciones populares, para fortalecer el sujeto colectivo del cambio estructural.

En todo este proceso, el programa de formación política se propone asumir desde sus básicos principios conceptuales, epistemológicos y pedagógicos la rica experiencia de la Educación Popular latinoamericana.

¿Quiénes son los actores de estos procesos educativos y cuál es el lugar social desde donde actúan?

Los protagonistas son personas que en su accionar manifiestan un compromiso con la construcción del bien colectivo. Ello se traduce en una posición activa frente a la organización, sea en ejercicio formal de la dirigencia o no.

Por nuestra experiencia de trabajo en barrios de la zona sur de Cochabamba, está demostrado que no siempre se da la ecuación entre un real compromiso con el bien colectivo y el ejercicio de dirigencia en la organizaciones de base. En muchos casos, los dirigentes controlados por los grupos de poder son exactamente el perfil opuesto al que la Escuela de Formación tiene definido para el desarrollo de los procesos educativos, pues:

1. No buscan el real fortalecimiento de las bases en el desarrollo de su conciencia crítica.
2. Tras el ejercicio de la dirigencia suelen buscar su propia promoción económica y política y no la defensa de los intereses de sus bases.
3. Suelen tener esquemas mentales y prejuicios muy marcados sobre la comprensión de los procesos sociales y políticos.

Como contrapartida a ese perfil negativo, la Escuela requiere de:

1. Personas que busquen el fortalecimiento de las bases en su capacidad de análisis crítico de la realidad, a partir del reconocimiento de su propia realidad.

2. Personas que creen en el potencial transformador de la lucha popular.
3. Personas con la mente y el corazón mínimamente abiertos para poder engranar adecuadamente en los procesos educativos dialogales e interactivos de la Escuela.
4. Personas con real actividad en cualquier organización popular, preferentemente urbana, ocupen o no cargos dirigenciales.

Otra de las características de la escuela es la diversidad en la composición del grupo, articulada por el factor común de la pertenencia a los sectores populares.

La Escuela trabaja con grupos altamente heterogéneos en experiencias de vida, edad, sexo, escolaridad, procedencia y experiencia organizativa. El factor que da coherencia y unidad a toda esta diversidad es el hecho de vivir procesos de empobrecimiento y exclusión. Hemos descubierto que los procesos educativos se dinamizan y enriquecen mejor a partir del mayor intercambio entre diferentes personas de los sectores populares. La metodología de la escuela se desenvuelve como una especie de acción de tejer y articular distintas experiencias, perspectivas, problemáticas, luchas... de los sectores sociales empobrecidos y fragmentados por el modelo. La dinámica educativa de la Escuela consiste básicamente en promover espacios para que los fragmentos de la lucha popular se articulen en torno a un proyecto común que recoja sus diversas problemáticas cuyo tronco común es la misma contradicción de clase.

La Escuela tiene como uno de sus ejes la recuperación (no repetición a-histórica) de la rica experiencia política del movimiento popular boliviano y latinoamericano. En los barrios y en las organizaciones populares suburbanas aún se encuentran –a veces invisibilizados, a veces excluidos- actores sociales que tienen buena formación política y amplia experiencia en la lucha popular. Ex mineros, ex ferroviarios, ex fabriles, antiguos dirigentes y militantes del movimiento sindical aparecen como de las cenizas cuando los espacios educativos favorecen la emergencia de las experiencias de vida. En la dinámica de reflexión colectiva estos actores suelen destacar por la calidad de su análisis, por la capacidad de integrar el bagaje teórico que tienen con las experiencias de vida y la problemática de los actuales contextos.

Los objetivos de la Escuela

El objetivo de la escuela es desarrollar, en coordinación con organizaciones populares urbanas, un proceso de formación/reflexión contextualizado en la realidad

local, con sentido crítico y con énfasis en una mirada histórico-estructural a procesos económico-políticos nacionales, potenciando destrezas y valores de la organización popular, para fortalecer sus capacidades de participación y acción política colectiva.

Entre los objetivos específicos están, desarrollar capacidades de análisis crítico de contextos locales en el marco de procesos estructurales, hacer una lectura crítica de nuestra historia nacional a partir de temas económico-políticos estratégicos y potenciar destrezas, valores y actitudes críticas para el fortalecimiento de la organización popular.

Bases metodológicas

La Escuela emplea la llamada “metodología dialéctica” que presupone una concepción dialéctica de la realidad, una manera de comprenderla de modo integral y una manera de situarse frente a ella. Este es el punto de arranque en la construcción de una metodología propia –colectiva, popular, integradora de las distintas facetas del empobrecimiento en los sectores urbanos- para analizar y comprender la realidad y actuar sobre ella para transformarla.

Para la construcción de las bases teóricas –epistemológicas y pedagógicas- de esta metodología se parte de las experiencias vividas, de las contradicciones experimentadas. Y de ello se extrae consecuencias de carácter más formal, para construir aprendizajes sobre hechos similares de alcance más amplio, interrogando y articulando, problematizando y descubriendo de manera permanente. El grupo diverso de personas –miembros de distintas organizaciones populares, con toda su carga de realidad, con sus experiencias de la pobreza, con sus experiencias de lucha, con sus cuestionamientos y su posición sobre la realidad- es la base material desde la que parte y sobre la actúa la metodología dialéctica. No es una construcción teórica sobre la nada o sólo sobre moldes formales abstractos.

Por otra parte, los procesos educativos de la Escuela de formación política del CEDIB abarcan un conjunto integrado y articulado de diversos elementos, procesos y actores. Los elementos del curso son los materiales, metodologías, exposiciones, dinámicas de grupo, entre otros. Los procesos son las acciones de los/las participantes (consideradas individual y colectivamente); los momentos formativos presenciales y no presenciales; las acciones de las organizaciones específicas de los/las participantes en relación con el conjunto de los procesos del movimiento popular en el país. Los actores son las personas participantes, individual y grupalmente; las y los facilitadores; las organizaciones populares de donde vienen los/las participantes.

Concebimos la Escuela no como una instancia aislada ni abstraída de los contextos de los sujetos que son protagonistas en ella sino como un proceso articulado dialécticamente a las acciones de las organizaciones a que pertenecen los y las participantes. Más aún, estas acciones son el punto de partida y el punto de llegada de todo el proceso. En medio estaría la propuesta sistemática del curso mismo como un elemento dinamizador y cualificador de las acciones. Y, cabe recordar, estas acciones están siempre contextualizadas en el acontecer de la sociedad. Una lucha por el agua en un barrio, unos procesos de reivindicación de los derechos de las mujeres no son átomos aislados en torno a sí mismos. Son hechos que interactúan con otros; tienen sus causas y sus efectos. Son parte de este tejido de relaciones en la sociedad; su existencia se comprende mejor relacionándolos con los elementos estructurales del contexto histórico.

La dinámica fundamental del proceso educativo planteado en la Escuela consiste en articular, relacionar, entrecruzar los distintos elementos, visiones y acciones de los y las protagonistas, comprendiéndolos en procesos históricos estructurales de mayor alcance, para proyectar acciones y propuestas en esta perspectiva más amplia e integral. Es una dinámica a contracorriente de la dinámica que ha generado el modelo económico-político vigente, cuyo rasgo principal en las organizaciones populares –como ya dijimos– es la fragmentación y la dispersión.

Características de los procesos de aprendizaje

De las anteriores bases metodológicas se derivan unas características algo más precisas de los procesos de aprendizaje en la Escuela:

1. ***Aprendizajes a partir del intercambio y la interacción***, con los otros y otras, sobre una base común que es la pertenencia y la fidelidad a los sectores sociales empobrecidos. Este aprendizaje busca articular todas las visiones y acciones de los actores en un mismo proceso, sobre la base de comprensión de procesos históricos estructurales.
2. ***Dinámica participativa***, el grupo es el que construye colectivamente los conocimientos a partir de su práctica y experiencias propias. Las personas que dirigen las sesiones tienen un rol de facilitación de los procesos educativos y no exclusivamente de disertación magistral. La diversidad de experiencias y percepciones del grupo es la materia prima para el desarrollo de los procesos educativos.

3. ***Aprendizajes por descubrimiento***, no sólo por recepción de información. Los y las participantes han de descubrir por sí mismos, a partir de sus experiencias previas y sus propias percepciones de la realidad, los contenidos que se ponen en los módulos de aprendizaje. Ello supone que cada participante asume un ritmo propio en el curso. Las dinámicas grupales y otros recursos didácticos se enfocan para este fin.
4. ***Aprendizajes significativos para la acción***, no se aprende sólo para “saber más cosas” sino para que las acciones en las organizaciones adquieran mayor claridad y calidad política. Aunque el curso otorga un certificado a la participación suficiente y óptima del mismo, éste no es su propósito final. El propósito, como ya se ha dicho, tiene que ver con la cualificación política de las acciones de las organizaciones populares que tienen representantes o miembros activos en el proceso de la Escuela.
5. ***Aprendizajes a partir del ritmo y realidad personal***. Los y las participantes tienen características diversas lo que marca ritmos propios para cada quien. Los procesos educativos de la Escuela no violentan esos ritmos, más bien aprovechan la diversidad para reforzar y retroalimentarse mutuamente entre todos y todas.

La estructura global de los contenidos

La estructura general de los contenidos del curso tiene 3 grandes componentes cuyos temas y perspectivas se entretajan a lo largo de todo el curso:

- ***El componente Analítico-Metodológico de la realidad social***. Un taller que busca aportar elementos teóricos y metodológicos para aprender a analizar la realidad social articulando los problemas concretos que se viven en los contextos específicos (barrios suburbanos) con los ejes y procesos estructurales que explican la realidad nacional de manera más orgánica y en perspectiva histórica.
- ***El componente Histórico***. Un seminario sobre historia nacional a para comprender la problemática actual del país en perspectiva histórica, tomando como temas eje de lectura aquellos que tienen una importancia particular por ser temas estratégicos desde una perspectiva económica y política (propiedad, gestión y control de la tierra - territorio y los recursos naturales).

- *El componente de reflexión sobre el Rol de la Organización Popular.* Un taller que introduce criterios y elementos de reflexión crítica sobre el rol de las organizaciones populares en la sociedad y en los cambios sociales.

Valoración del proceso de la Escuela hasta la fecha

El CEDIB viene desarrollando desde el año 2006 estos procesos de formación política con diferentes personas activas en organizaciones populares sobre todo organizaciones suburbanas. Hasta la fecha se han desarrollado 3 ciclos de 13 a 15 módulos cada uno, y está en proceso la organización de un cuarto ciclo.

En los dos primeros ciclos, el grupo de participantes era sólo de Cochabamba. En el último ciclo se contó con participantes de organizaciones populares de Cochabamba (ciudad, Punata, Quillacollo), Tarija, Santa Cruz y Oruro.

Hasta el momento, la valoración de esta experiencia de educación popular es, en líneas generales, muy positiva:

- Se percibe que los procesos educativos de la Escuela contribuyen a reforzar y cualificar las acciones de los participantes en sus organizaciones, ensanchando la visión de los problemas locales en una dimensión más estructural y nacional.
- Se percibe que el paso por la Escuela provoca una mayor motivación en los/las participantes para comprometerse con los procesos de sus organizaciones.
- Consideramos que se ha logrado significativamente que los procesos de la Escuela estén vinculados a los procesos de reivindicación y lucha de los participantes en sus organizaciones.
- Se percibe el acierto que tiene la Escuela en sus opciones y prioridades respecto a: (a) los actores y sus características (personas activas y comprometidas en diversas organizaciones sobre todo urbanas); (b) las bases teóricas metodológicas y epistemológicas; (c) la propuesta metodológica. Se percibe la relevancia de procesos de formación política más sistemáticos y profundos para las tareas y desafíos de las organizaciones populares del país.
- Se está logrando dar a la Escuela una proyección nacional. Para ello se ha logrado coordinar, en primera instancia, con instituciones de otros distritos del país para el desarrollo de un ciclo con presencia de actores de distintos departamentos del país. En una primera instancia, se ha contado con

la participación de tres instituciones en calidad e invitados (técnicos de las instituciones y personas de organizaciones con las que ellos/ellas trabajan). En este momento se tiene en proceso la co-organización de un nuevo ciclo con estas instituciones, con un nivel de coordinación mayor, que incluye la planificación conjunta y la co-responsabilidad del desarrollo del ciclo.

- Internamente, el equipo ha logrado un buen nivel de desarrollo de una visión compartida de la Escuela en cuanto a sus propósitos finales, metodología, prioridades, etc. Ello ha contribuido a lograr unas tareas realizadas en equipo (desarrollo de metodologías, producción de materiales impresos y audiovisuales, identificación y selección de materiales ajenos adaptables a los procesos de la Escuela, entre otras), aunque aún falta mejorar la metodología de trabajo en equipo.
- Varios de los elementos metodológicos y de contenidos han sido una y otra vez mejorados y redefinidos a partir de evaluaciones de los talleres y ciclos realizados. Por tanto, la formulación actual de ellos, tal cual aparece en este artículo, puede considerarse como aprendizajes que el propio equipo viene sistematizando a partir de las mismas acciones educativas.
- La Escuela está articulada en el Plan Estratégico institucional del CEDIB. Ello se traduce no sólo en la continuidad de la gestión de recursos, sino en la articulación de esta estrategia educativa con otras estrategias de documentación, información, investigación y de incidencia en la formación de opinión pública crítica.
- Existe la intención de hacer seguimiento a los procesos de los/las participantes en sus organizaciones. En algunos casos esta intención ha pasado a la acción (apoyo en talleres en sus organizaciones, participación de ellos/ellas en otros cursos patrocinados por CEDIB, participación de ellos/ellas en foros sobre temas de coyuntura, entre otras).

Al mismo tiempo, también de manera general, observamos algunas limitaciones y tareas pendientes en la Escuela:

- Los principales materiales impresos de apoyo (módulos) aún están en periodo de revisión.
- Tenemos el desafío de precisar mejor –a partir de una reflexión más sistemática en el equipo- de la proyección de la Escuela a mediano plazo y en función de los desafíos actuales y futuros de la coyuntura del país.

- Desde un comienzo, la evaluación de los procesos de la Escuela sugirió la estructuración de un segundo nivel, sobre la base de esta primera propuesta que constituiría un nivel básico. El diseño de este segundo nivel avanzado aún está pendiente.
- Los aprendizajes del equipo a partir de la práctica no están aún elaborados. Aún tenemos muchas tareas pendientes de sistematización de las experiencias
- La tarea de sistematizar mejor los materiales y todos los componentes concurrentes en el proceso educativo aún está pendiente.
- No se ha logrado de manera sistemática hacer seguimiento a las acciones de los/las participantes en sus organizaciones. Los procesos de seguimiento que hay son espontáneos y dispersos. Este desafío desborda las posibilidades físicas del equipo.

Para tratar de enfrentar a algunos de estos desafíos estamos iniciando un proceso de sistematización de esta primera fase de la experiencia de la Escuela. Esta sistematización está orientada por la metodología de sistematización de experiencias de algunas corrientes de Educación Popular en América Latina. El objetivo que orienta este primer proceso de sistematización es la visibilización e identificación de los procesos de aprendizaje de los/las participantes del Curso de Formación Política en las acciones colectivas desarrolladas en sus organizaciones populares. Para acercarnos a este objetivo nos hemos propuesto:

- Conocer las características de los procesos de aprendizaje de los/las participantes del Curso de Formación Política en las acciones colectivas desarrolladas en sus organizaciones populares.
- Determinar el avance cualitativo de las acciones de los/las participantes en términos de la cualidad política de las acciones colectivas que se desarrollan en sus organizaciones.
- Conocer mejor las formas y mecanismos como los/las participantes del curso de formación política construyen conocimientos colectivamente y a partir de la acción.

Al finalizar este proceso de sistematización estaremos en mejores condiciones de precisar los aprendizajes del equipo a partir de estas experiencias.